



*Al servicio  
de las personas  
y las naciones*



# Informe 2011

## ART - Redes Colombia

Avances del programa para alcanzar los resultados



### Tabla de contenido

	Página
Introducción .....	2
1. El Programa ART-Redes .....	3
2. Principales cambios en el contexto colombiano durante 2011 .....	5
3. Síntesis de los resultados obtenidos en 2011 .....	6
4. Informes por territorio .....	15
• Nariño .....	17
• Huila y piedemonte amazónico .....	24
• Meta .....	31
• Oriente Antioqueño.....	37
• Cesar .....	43
• Montes de María .....	50
5. Priorización territorial y estrategia de salida .....	56
6. Retos 2012 .....	59
<b>Anexos</b>	
<b>Anexo 1.</b> Consideraciones analíticas de priorización territorial y estrategias de salida ....	61
<b>Anexo 2.</b> Implementación financiera .....	75
Glosario .....	78

---



Padre Rafael Castillo

Ex Director del Programa de Desarrollo y Paz de los Montes de María\*

## **“Hemos abierto un escenario de reconciliación y desarrollo”**

*“La experiencia de ART-Redes es una oportunidad para la reconciliación, el desarrollo y la paz en medio del conflicto armado.*

*En el espíritu de esta estrategia que se ha realizado en los últimos años en Montes de María con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y con el apoyo y la participación de otras agencias de Naciones Unidas, de la cooperación sueca y de la cooperación española, en articulación con el apoyo de la Unión Europea y la presencia cercana de nuestro Estado, hemos abierto un escenario de reconciliación y desarrollo que ha tenido como meta y como fin construir un territorio donde tenga vigencia el Estado Social de Derecho, donde todas y todos nuestros pobladores encuentren posibilidades para desarrollar plenamente sus capacidades como personas y en donde el norte ético del desarrollo de la sociedad montemariana sean los derechos humanos.*

*Hemos soñado, y lo hemos alcanzado en gran medida, con generar una sociedad civil organizada, solidaria y participativa, comprometida en la construcción de lo público, con criterios de justicia social, verdad y libertad.”*

*\*Discurso durante la visita a Cartagena del Secretario General de Naciones Unidas. Cartagena – Junio de 2011.*

---

Hace ya casi una década se presentó el Informe Nacional de Desarrollo Humano (INDH): “El callejón con salida”. Este completo documento evidenció que las raíces del conflicto armado en Colombia estaban en las regiones y que el conflicto y su creciente degradación eran el principal obstáculo para el desarrollo humano. Frente a este panorama, a partir del 2004, el PNUD tomó la decisión de desarrollar mecanismos tendientes a mejorar los niveles de desarrollo humano. Para tal fin, impulsó la construcción de la paz desde y con las regiones, centrando su atención en las víctimas y en la población en mayor estado de vulnerabilidad: mujeres, indígenas, afro descendiente, jóvenes y campesinos. Este objetivo implicó la presencia directa del PNUD en los territorios con un modelo de construcción de paz desde lo local que hoy se sigue ejecutando en el marco del Programa ART-Redes.

Este Informe, presenta los principales resultados alcanzados en el 2011 por el Programa en los seis territorios en donde actualmente se desarrolla. La información para la realización del presente documento, se obtuvo de fuentes primarias a través de la realización de dos tipos de grupos focales: uno de instituciones y otro de organizaciones de la sociedad civil, que fueron sujetos de intervención de manera directa o indirecta durante 2011, en cada territorio. En este proceso participaron 48 representantes de organizaciones de la sociedad civil en el territorio y 30 representantes de instituciones locales (Ministerio Público, gobernaciones, alcaldías y APC, entre otras) así como funcionarios de agencias internacionales que trabajan en el territorio. A pesar que no es un grupo representativo en términos estadísticos, al ser informantes cualificados proveen información valiosa de las tendencias sobre las percepciones y los efectos de las intervenciones del Programa.

La información secundaria, se obtuvo mediante una ficha de monitoreo relacionada con los indicadores a nivel de producto, así como un abordaje analítico de los efectos de la intervención del Programa. Esta metodología permitió identificar impactos tempranos a nivel de individuos, organizaciones sociales y el entorno sociopolítico, así como identificar retos para la intervención en el futuro.

Esta información se compara con los índices de capacidades estimados en la línea de base 2010, tanto a nivel nacional y departamental, para mostrar la coherencia programática entre las estrategias desarrolladas y los resultados del estudio (Acciones Transformadoras). Así mismo, esta comparación revela una tendencia sobre el avance hacia los resultados, en términos del fortalecimiento de las capacidades locales para la paz.

Por razones metodológicas en informe se presenta dividido en 6 partes y 2 anexos:

- El Programa ART-Redes
- Principales cambios en el contexto colombiano durante 2011
- Síntesis de los resultados obtenidos en 2011
- Informes por territorio
- Priorización territorial y estrategias de salida.
- Retos 2012

Anexos

- Consideraciones analíticas de priorización territorial y estrategias de salida (Anexo 1)
- Implementación financiera (Anexo 2)

El Programa agradece el acompañamiento técnico y financiero de la Embajada de Suecia mediante la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI) y a los participantes de organizaciones sociales y funcionarios públicos que aportaron sus percepciones para la construcción de este informe.



*“Nosotras lo que hicimos fue mirar la situación de esta región, hacer un diagnóstico participativo y detectar las problemáticas. Luego hicimos unos encuentros para que las mujeres, a través de la narración de su historia de vida, pudieran exteriorizar el dolor. Ese fue el comienzo de la asociación Narrar para Vivir que, adelanta un trabajo de memoria. Queremos que nuestras comunidades tengan claro lo que pasó y el dolor que ocasionó, que no volvamos a repetir momentos tan dolorosos.”*

**Mayerlys Angarita.** Asociación Narrar para vivir. Montes de María.

## I. El programa ART-Redes

El programa ART-Redes (Reconciliación y Desarrollo) trabaja para contribuir a la construcción social de paz, al desarrollo humano, a la gobernabilidad democrática y a la reconciliación, a través del respaldo y fortalecimiento, en los ámbitos nacional y territorial, de iniciativas de la sociedad civil y del Estado, promoviendo su participación en procesos políticos, económicos y sociales incluyentes, su capacidad de transformar escenarios de violencia y conflictos e incidir en la construcción de políticas públicas.

El Programa ART-Redes está alineado con los objetivos nacionales descritos en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “Prosperidad para Todos”, particularmente con las estrategias: Convergencia y desarrollo regional, Igualdad de oportunidades para la prosperidad social y Consolidación de la paz.

Los socios estratégicos del Programa por parte de la cooperación internacional son la cooperación sueca (ASDI) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Ha habido un aporte significativo también de la cooperación italiana. Así mismo es importante señalar la alianza con las agencias del Sistema de Naciones Unidas, entre las cuales se destaca el trabajo que se realiza con ACNUR, UNICEF, ONU Mujeres, OCHA y OACNUDH. A nivel del Gobierno nacional los principales socios son: la Agencia Presidencial para la Cooperación, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) - a través de la Dirección de Justicia y Pa y la Dirección de Desarrollo Territorial. Se establecen mecanismos de articulación con el Programa Presidencial de Acción contra Minas (PAICMA) y con el Programa Presidencial de Derechos Humanos. Son aliados claves la Unidad de Víctimas, el Centro de Memoria Histórica, la Unidad de Restitución de Tierras, así como la Vicepresidencia, el Departamento de Prosperidad Social, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Interior. A nivel del gobierno regional se destacan las iniciativas desarrolladas con la Gobernación de Cesar y Nariño, las defensorías regionales y las personerías municipales.

A nivel de las organizaciones de la sociedad civil se desarrollan actividades en asocio con 78 redes de organizaciones de la sociedad civil, entre los cuales se destaca el trabajo realizado con los Programas de Desarrollo y PAZ (PDP), Agencias de Desarrollo Económico Local (ADEL), organizaciones indígenas y afrodescendientes, organizaciones de Mujeres, organizaciones de campesinos, organizaciones de derechos humanos y de víctimas, Iglesia y Pastoral Social, ONG, Universidades, Centros de Estudio, Medios de Comunicación Local, entre otras asociaciones y organizaciones de la sociedad civil.

El Programa plantea el logro de 5 resultados, los cuales están contruidos de forma concertada con la Oficina para la Prevención y Recuperación de la Crisis del PNUD (BCPR). Cada resultado representa un Eje Programático, sobre el que se definen las intervenciones a nivel nacional y territorial, según las dinámicas propias de cada territorio objetivo, como se muestra en la siguiente tabla:

Ejes estratégicos del Programa ART-Redes	Objetivo específico
<p><b>1. Prevención, transformación de conflictos y promoción de una cultura de paz</b></p>	<p>Generar y fortalecer capacidades, procesos y espacios de diálogo para la promoción de una cultura de paz, la prevención y transformación no violenta de conflictos y la mitigación de sus efectos.</p>
<p><b>2. Justicia, derechos de las víctimas y derechos humanos</b></p>	<p>Fortalecer los mecanismos de acceso a la justicia para hacer efectivos los derechos de la verdad, la justicia y la reparación dentro del marco del Estado Social de Derecho.</p>
<p><b>3. Democracia local para la paz</b></p>	<p>Instituciones del Estado y la sociedad civil en los territorios Redes mejoran su legitimidad, transparencia y eficiencia y sus capacidades para la construcción de ciudadanía y la formulación y gestión de política públicas de desarrollo, paz y reconciliación.</p>
<p><b>4. Desarrollo socioeconómico sostenible para la paz</b></p>	<p>Promover alternativas de desarrollo socioeconómico que contribuyan a la cohesión social, la inclusión, la convivencia y la paz.</p>
<p><b>5. Monitoreo, evaluación, gestión del conocimiento y comunicación</b></p>	<p>Fortalecer el sistema de monitoreo y evaluación y la gestión del conocimiento para lograr mayores impactos, visibilizar los logros y optimizar la toma de decisiones.</p>



*“Uno se siente parte del proceso cuando tiene una clara percepción de lo que pasa en el municipio. Es cuando decide convertirse en sujeto político. Así se empieza a leer la realidad y a pensar ¿qué puedo hacer? y a convocar a otros jóvenes para hacerles entender que el cambio es responsabilidad de todos. La Mesa Departamental de Jóvenes del Meta ha generado, gracias al apoyo del Programa Redes y sueco espacios para que como sea, cantando, bailando, trabajando, se puedan hacer aportes que ayuden al cambio.”*

**Viviana Palacios.** Mesa Departamental de jóvenes del Meta

## 2. Principales cambios en el contexto colombiano durante 2011

Varias medidas ha tomado el Gobierno nacional que han sido consideradas como avances importantes para construir la paz del país y la consolidación de la gobernabilidad y la democracia, entre ellos el reconocimiento de la existencia de un conflicto armado; la aprobación de la ley de víctimas y de restitución de tierras sancionada por el Presidente Juan Manuel Santos el 10 de junio de 2011 con la presencia del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon; la reanudación del diálogo con las instituciones, como las altas Cortes; unas nuevas relaciones con la sociedad civil y sus constantes pronunciamientos sobre el logro de la paz a través del diálogo.

El Gobierno ha impulsado dos espacios tripartitos sociedad civil, Estado y comunidad internacional: uno, la Declaración Conjunta para construir de manera participativa la política pública de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario; y dos, la Mesa Nacional de Garantías de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos y sus mesas territoriales. Si bien ha manifestado su voluntad alrededor de estos espacios, existen temores porque continúan amenazas y asesinatos de líderes y defensores, lo que ha impedido superar las desconfianzas Estado-sociedad civil. Según las organizaciones, han sido asesinados 50 líderes en los últimos tres años por defender sus tierras.

Si bien la población obligada a desplazarse ha descendido en los últimos años (129.883 en el 2010 y 102.956 en el 2011), la magnitud de la problemática que enfrenta también se refleja en que han sido forzados a abandonar 5,5 millones de hectáreas, de acuerdo con un estudio realizado en el 2009 por una comisión de seguimiento a la política pública del desplazamiento forzado. En los últimos años también se ha dado un importante descenso de los homicidios (15.459 en el 2010 y 14.637 en el 2011), aunque tres departamentos del país concentran el 49.7% de los homicidios de todo Colombia y los problemas de inseguridad ciudadana se han generalizado. Uno de los principales factores que está afectando la seguridad ciudadana y los esfuerzos de construcción de paz es la presencia de bandas postdesmovilización (con 4.700 integrantes en 2010 y 5.7000 en enero 2012, según la Policía Nacional). El uso de las minas antipersonal y MUSE continúa afectando a la población, en especial a la rural, aunque en los últimos años también se ha registrado una reducción: un total de 540 personas resultaron víctimas de 2.506 eventos que se presentaron en el 2010, mientras que en el 2011 fueron 466 las víctimas de los 2.404 eventos ocurridos. Las acciones de la guerrilla, bandas postdesmovilización, narcotraficantes y otros actores han generando una mayor violencia contra las víctimas porque son quienes les han usurpado las tierras y tienen intereses en megaproyectos, así como en los cultivos ilícitos, el tráfico de droga, la explotación de oro y carbón, entre otros.

A pesar de la riqueza del país, de que hay unos indicadores positivos en la economía, de su crecimiento sostenido en los últimos años y de los esfuerzos del Gobierno nacional, Colombia sigue presentando unos altos niveles de pobreza, de indigencia y desigualdad. Según información del Gobierno de agosto 2011, en el 2009, el 40,2% de los colombianos está en situación de pobreza y el 14,4%, indigencia. El Informe de Desarrollo Humano 2011 del PNUD, lanzando el pasado septiembre, reveló que si bien los indicadores sociales y de desarrollo humano muestran que en el mediano plazo la situación de la gente ha mejorado, dicha mejoría se refleja de manera muy diferenciada dependiendo del lugar en que se habite y, además, que la brecha entre el campo y la ciudad ha aumentado. Según el Índice, el país aumentó en desarrollo humano 6 puntos entre los años 2000 y 2010 -pasó de 0,78 a 0,84-, pero dicho desarrollo es menor si se tienen cuenta la concentración de la propiedad de la tierra y la violencia. Cuando se incluyen estas variables el desarrollo disminuye en todas las regiones.

Además de los efectos del conflicto armado y la pobreza y la desigualdad, muchas de sus víctimas lo son también de los desastres naturales lo que ha provocado una doble afectación. Como resultado de la intensa ola invernal o Fenómeno de la Niña 2010-2011, 3.219.239 personas han resultado damnificadas 879.542 familias, las cuales



representan el 6,9% de la población total del país (durante el segundo semestre de 2010 y el primer semestre de 2011). La temporada invernal ha impactado a 28 departamentos (88% del total nacional) y 1.041 municipios (93% del total nacional), siendo la Región Caribe la más afectada: 1.629.961 personas resultaron damnificadas en 7 de los 8 departamentos de la zona, lo cual significa el 51% del total de personas damnificadas de Colombia.

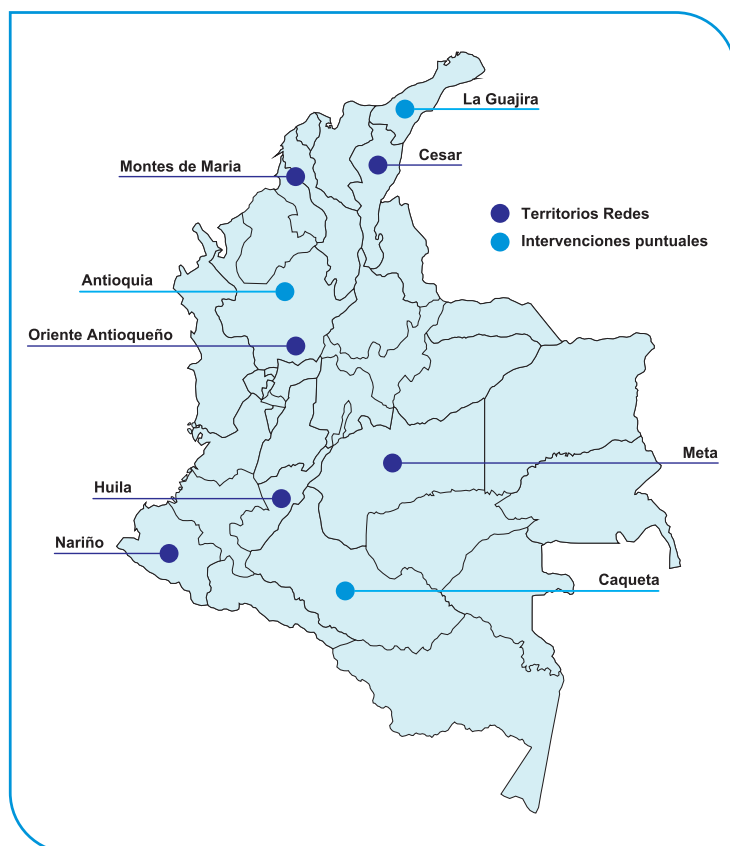
Además de estos desafíos, las elecciones locales del octubre de 2011 también significaron un reto adicional para la institucionalidad y la sociedad y no sólo por los temores de infiltración de las campañas por actores ilegales o por las posibles acciones de la guerrilla y las bandas para impedir el voto libre de la ciudadanía, que fueron menos que las esperadas. También, ante el reclamo de la población para que en las campañas y las agendas programáticas fueran incluidos temas relacionados con la construcción de paz y los derechos de las víctimas y acciones concretas para responder a un 'día a día' en medio de un conflicto armado con fuerte impacto en la población y en especial en aquella en estado de mayor vulnerabilidad.



*“Una buena Ley no es suficiente. Debe tener un efecto transformador en la vida de las víctimas y una implementación apropiada, así esta Ley determinará si las expectativas se cumplen. En Colombia todo está listo para apoyar a su Gobierno y a la sociedad civil en esta tarea tan importante”*

Palabras del Secretario General de Naciones Unidas, Señor Ban Ki-moon durante la sanción, por parte del Presidente Juan Manuel Santos, de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras”. 10 de junio del 2011

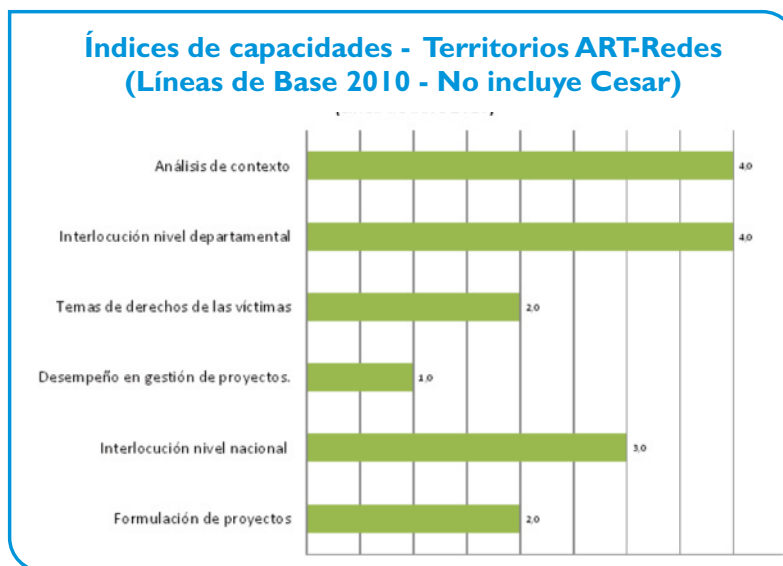
### 3. Síntesis de los resultados obtenidos en 2011



El Programa ART-Redes se encuentra, actualmente, focalizado en seis territorios: Oriente Antioqueño, Montes de María y Meta (desde 2004), Huila (desde 2007), Nariño (desde 2008) y Cesar (desde 2010). La selección de estos territorios obedeció a criterios de análisis en los que se tuvo en cuenta: los niveles históricos de exclusión, la pobreza, la conflictividad y la presencia de capacidades locales de construcción de paz, con voluntad de ser acompañadas y apoyadas.

A nivel de las organizaciones de la sociedad civil, el Programa promueve la participación de más de 800 organizaciones sociales de distintos niveles, articuladas en 78 redes, entre las cuales están los Programas de Desarrollo y PAZ (PDP), las ADEL, organizaciones indígenas y afrodescendientes, de mujeres, de campesinos, de derechos humanos y de víctimas, Iglesia y Pastoral Social, universidades, centros de estudio, medios locales de comunicación, entre otras asociaciones y organizaciones.

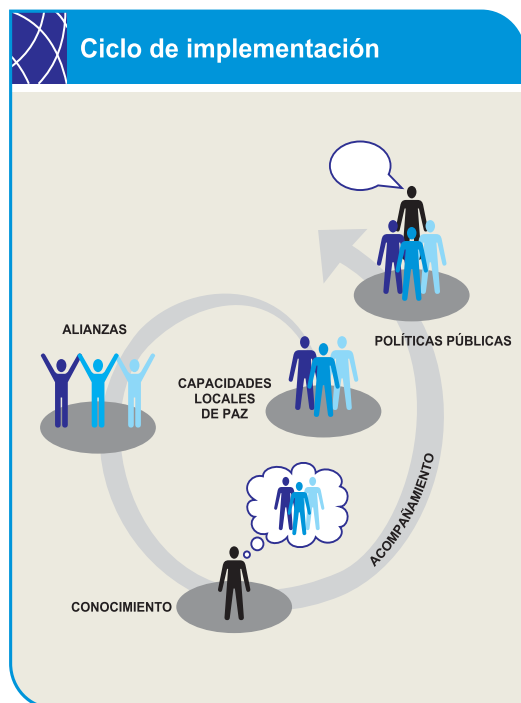
De acuerdo con el estudio de Línea de Base 2010, estas redes se caracterizaban por tener un nivel alto de capacidades para realizar un análisis del contexto político, de la violencia, de modelos de desarrollo y de dinámicas de poder, así como de interlocución con instancias públicas departamentales y municipales. Sin embargo, sus capacidades de interlocución con instancias públicas nacionales estaban en un nivel medio. Así como también sus capacidades en temas de derechos de las víctimas, formulación y gestión de proyectos y sistematización de experiencias.



### Acciones transformadoras

El programa ART-Redes plantea unas líneas de intervención de abajo hacia arriba (bottom - up), definidas con base en el Acuerdo Programático (PRODOC). Sin embargo, las estrategias se diseñan, definen y concretan en cada territorio y se convierten en conocimiento para alimentar la interlocución a nivel nacional. En este sentido, las estrategias desarrolladas para mejorar las situaciones encontradas por la Línea de Base responden a la identificación de capacidades en los territorios y se pueden categorizar de acuerdo con la lógica de intervención (ver diagrama):

El Programa ART-Redes ha identificado cuatro elementos clave para desarrollar en los procesos que apoya: a) Fortalecimiento de capacidades de paz; b) Fomento de conocimiento útil para la acción; c) Consolidación de alianzas y d) Incidencia en políticas pública.



#### a) Fortalecimiento de capacidades de paz

ART-Redes apoya procesos de organización comunitaria y de articulación de la sociedad civil en torno al desarrollo humano y a la gestión no violenta de los conflictos, ya que éstos fragmentan a las comunidades. Por ello, trabaja en promover el tejido social para incrementar las capacidades de las organizaciones sociales con el fin de que se constituyan como interlocutores reconocidos y con mayor poder de incidencia. También trabaja con las instituciones responsables de la implementación de lo público con el ánimo de que materialicen sus políticas, cumplan con los estándares adecuados y sean más efectivas en sus alcances.

#### b) Fomento del conocimiento útil para la acción

El Programa facilita espacios para la construcción colectiva de conocimiento y para orientar estrategias comunes de cara a los conflictos para contrarrestar sus consecuencias: la fragmentación, la desconfianza y la desesperanza. El conocimiento útil configura un lenguaje común, visiones colectivas de país y estrategias conjuntas para potencializar acciones de construcción de paz.

### c) Consolidación de alianzas

ART-Redes acompaña procesos para consolidar la gobernabilidad democrática con presencia del Estado y promover puentes sólidos entre la sociedad civil y las instituciones. Impulsa, facilita y consolida alianzas interinstitucionales en las que participan el Estado, la sociedad civil, el sector privado, la cooperación internacional, el Sistema de Naciones Unidas, la Iglesia Católica, otras comunidades religiosas y demás actores relevantes en el territorio con el objetivo de fortalecer las capacidades locales de construcción de la paz.

### d) Incidencia en políticas públicas

El Programa promueve que se incorpore en las agendas públicas estrategias por consenso para atender la perspectiva de la construcción de paz, la reconciliación y la participación proactiva para la elaboración y aplicación de políticas públicas sobre desarrollo humano, paz y reconciliación. Esto facilita que los logros de las iniciativas apoyadas sean sostenibles y tengan un impacto local y a gran escala. También busca recuperar la política como mecanismo para tramitar los conflictos y alcanzar los logros sociales deseados, los resultados siguientes son:

En esta lógica de intervención, los siguientes son los principales resultados y productos, esperados establecidos en el PRODOC, por cada uno de estos ejes:

#### 1. Prevención, transformación de conflictos y promoción de una cultura de paz

##### 1.1. Promoción de capacidad de análisis, planeación y gestión sensible a los conflictos

- 2585 personas en los 6 territorios ART-Redes, entre las que se encuentran representantes de las organizaciones de la sociedad civil (indígenas, mujeres, afro descendientes) y funcionarios públicos, quienes han mejorado sus capacidades para realizar propuestas de construcción de paz y diseñar políticas públicas incluyentes. Esto gracias a iniciativas de capacitación formal y no formal, en temas de acción sin daño, metodologías de mediación y transformación no violenta de conflictos, DDHH y DIH, liderazgo juvenil, equidad de género y ciclo de políticas públicas.
- Se han desarrollado herramientas en los 6 territorios que permiten tanto a organizaciones de la sociedad civil como a instituciones reconocer las dinámicas de construcción de paz y del conflicto, tales como los documentos de análisis producidos por el Observatorio de DDHH y Cultura de Paz en Huila, el Informe sobre capacidades locales de paz en Oriente Antioqueño y la caracterización sobre la población en situación de desplazamiento en el Meta, instrumentos apropiados y utilizados por instituciones locales, principalmente la Defensoría del Pueblo.
- 171 actores de organizaciones sociales, de instituciones y agencias del SNU de Huila, Montes de María y Meta (en asocio con la Universidad Nacional de Colombia) y de Oriente Antioqueño (en asocio con OCHA), ampliaron sus conocimientos en el tema de acción sin daño como aporte fundamental a la construcción de paz. Como resultado de esta actividad, 10 procesos sociales e institucionales fueron seleccionadas para aportar sus experiencias de construcción de paz en tres regiones, a las que se les brindó asistencia técnica para incluir en sus estrategias el enfoque de acción sin daño.

##### 1.2. Difusión de una cultura de paz

- 90 medios de comunicación comunitarios, articulados en redes de comunicación que promueven espacios de construcción de paz en Nariño, Huila y Antioquia, han logrado visibilizar temas de construcción de paz y fortalecer las redes de comunicadores, siendo actores esenciales en los procesos de difusión de experiencias de construcción de paz y convocatoria y articulación en los diferentes espacios apoyados por ART-Redes.

##### 1.3. Impulsada la cohesión social, mitigados los efectos sobre la población víctima de las minas antipersona, la vinculación a grupos armados ilegales y el desplazamiento forzado

- Tres territorios ART-Redes (Nariño, Antioquia y Cesar) cuentan con mejores herramientas para incorporar dentro de sus Planes de Gobierno, acciones orientadas a reducir la vulnerabilidad de las poblaciones afectadas por la contaminación de minas antipersonal (MAP) y munición sin explotar (MUSE), así como para mejorar la atención integral a las víctimas de accidentes, en el marco de la acción integral contra minas (AICMA).

- En el marco del proyecto conjunto con UNICEF, se contribuyó a cotejar la información de las víctimas identificadas con la base de datos nacional que consolida el PAICMA para la verificación de la inclusión de personas no registradas. Gracias a esto, 150 víctimas de MAP / MUSE de los departamentos de Cauca, Choco, Cesar, Nariño, Antioquia han recibido asesoría legal, acompañamiento en su Proceso de reclamación de derechos y asistencia humanitaria. Por otra parte, se mejoraron las capacidades de 300 funcionarios públicos y autoridades municipales, los sobrevivientes y sus familias sobre la implementación de la Ley de Víctimas y las implicaciones para las víctimas de MAP / MUSE y se brindó asistencia técnica para realizar el Plan de Acción 2011 - 2014, el cual les permitió a los funcionarios tener una comprensión de la visión general de la AICMA y la base para la formulación de proyectos de cooperación de AICMA.
- Según la cifra oficial de PAICMA durante 2011 se registraron 255 víctimas civiles en los departamentos de Antioquia, Nariño y Cauca. En estos 3 departamentos, se mejoraron las condiciones para que 100 víctimas civiles de MAP/MUSE tuvieran acceso a la ruta de atención a víctimas. El Programa ART-Redes ha permitido activar la ruta institucional y el trabajo en red de las organizaciones y se evidencia una importante mejora en el acceso a la atención médica. Así mismo, cabe señalar que se ha reducido en cerca de 70% el tiempo requerido para solicitar cita con especialistas.
- 1900 Personas desplazadas reasentadas o retornadas en Cesar, Antioquia y Meta definieron, mediante ejercicios participativos con instituciones, sus prioridades en términos de proyectos socioeconómicos y fortalecimiento organizacional, posibilitando generar mejores ingresos, reducir su percepción de inseguridad alimentaria y generar condiciones de convivencia que permitan resolver sus conflictos.
- 37 experiencias juveniles de construcción de paz fueron presentadas en el marco del encuentro “Diálogo de convivencia, prevención y protección. Jóvenes constructores de política” realizado conjuntamente con el DNP. De este encuentro surgen una serie de recomendaciones para la elaboración de políticas públicas que inciden directamente en la población juvenil, en temas que incluyen componentes de prevención, derechos de adolescentes y jóvenes, Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el documento CONPES 3673 de 2010 “Política de prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes por parte de los grupos armados organizados al margen de la ley y de los grupos delictivos organizados”
- En 2011 la Red fútbol y paz consolidó su trabajo en 10 municipios de 5 departamentos del país atendiendo aproximadamente a 25.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en actividades educativas, lúdicas y deportivas para la prevención del reclutamiento y actividades ilícitas, el maltrato infantil, la deserción escolar, la violencia basada en género y el consumo de sustancias psicoactivas. A través de 14 fundaciones o asociaciones privadas se promueve la construcción de paz, la resolución pacífica de conflictos, la convivencia y reconciliación

#### *1.4. Espacios de diálogo para incidir en agendas y políticas públicas de construcción de paz*

- En seis territorios se ha facilitado la creación de 39 espacios de diálogo entre 136 redes e instituciones locales (alcaldías, gobernación, defensorías regionales y personerías). Estos espacios garantizan la participación activa de la sociedad civil en el análisis de las causas, dinámicas e impactos del conflicto armado. De igual manera facilitan la interlocución en temas vitales para las comunidades como: consulta previa con comunidades indígenas y afro; situación de la población desplazada y sus derechos; equidad de género; políticas públicas de género y juventud; derechos de los pueblos indígenas; efectos de los megaproyectos en los derechos humanos de las comunidades y prevención de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
- En el ámbito nacional se ha implementado un convenio con la red de los Programas de Desarrollo y Paz (PDP), que reúne los 19 programas regionales: El Programa contribuye a fortalecer la capacidad de incidencia política de la red, ofrece asistencia técnica en temas estratégicos como víctimas y tierras y contribuye a la sistematización de las experiencias territoriales de la red.

## 2. Justicia, derechos de las víctimas y derechos humanos

### 2.1. Fortalecimiento del sistema de justicia e instituciones del Estado en el ámbito regional

- A través de la asistencia técnica del Programa y teniendo como insumos las propuestas de organizaciones de víctimas y acompañantes de proceso de víctimas en los espacios de diálogo, en 4 regiones (Cesar, Montes de María, Meta y Antioquia) se han desarrollado o implementado modelos de orientación, atención psicosocial y psicojurídica a víctimas del conflicto armado interno, las cuales están siendo articuladas con las instituciones garantes de sus derechos a nivel local. Estos modelos incluyen metodologías de análisis de capacidades de las instituciones para atender y orientar víctimas (ej. estrategia de justicia transicional del Caribe, ruta de protección a reclamantes de tierras en Antioquia y protocolos de entrega de cadáveres de víctimas de desaparición forzada en el Meta - en articulación con el Fondo de Justicia Transicional -), modelos de atención centrados en víctimas. Por ejemplo el Programa Departamental de Atención integral a víctimas del conflicto y Reintegración comunitaria (PAVIREC) en Cesar; el Comité Regional de Atención a Víctimas (CRAV) en Meta; el Centro de Atención a víctimas de violencia intrafamiliar (CAVIF) en Montes de María y el Programa de Acompañamiento a Víctimas (PAVIC) en Huila y espacios permanentes de interlocución para realizar seguimiento a la situación de restitución de derechos de las víctimas. Por ejemplo en el Meta, la Mesa Interinstitucional de Desaparición Forzada y la Unidad Móvil de Atención a Víctimas.
- En cuatro regiones (Cesar, Meta, Nariño y Antioquia) se han desarrollado capacidades en las instituciones para responder a los requerimientos que en términos de complementariedad deben asumir las instituciones locales para el cumplimiento de la Ley 1448 (ley de víctimas). En este sentido se ha prestado asistencia técnica y se han firmado acuerdos municipales para la creación de dos comités de justicia transicional departamental y trece municipales y se han elaborado insumos para la construcción, en Antioquia, de una política pública de reparación colectiva.

### 2.2. Herramientas que contribuyen a reducir la Violencia Basada en Género (VBG)

- Las iniciativas desarrolladas con las redes de organizaciones de mujeres de Nariño, Cesar, Meta y Huila (en articulación con ONU Mujeres) y de Montes de María y Antioquia (en articulación con organizaciones de la sociedad civil) en torno a la situación de inequidad con respecto a las mujeres y la violencia basada en género, permitió fortalecer capacidades a mujeres de las organizaciones de la sociedad Civil y de funcionarios de diferentes instituciones para que puedan atender y orientar a mujeres víctimas. Estas capacidades fueron institucionalizadas a través de la Secretaría de la Mujer en los departamentos de Nariño, Meta y Cesar, en las políticas públicas y en las rutas de atención a mujeres víctimas de violencia en Huila y Centros de Atención a Víctimas de violencia Intrafamiliar en Montes de María.
- 1204 mujeres mejoran sus conocimientos en: autoreconocimiento de género; Estado, democracia y ciudadanía con enfoque de género; lineamientos organizativos de los procesos de mujeres y política pública nacional de mujeres. Este proceso fue fundamental para visibilizar la situación de violencia basada en género y acompañar otros procesos como la Semana por la vida en Huila y la campaña ¡Párala ya! en Cesar.
- En alianza con ONU Mujeres, se han realizado consultas sectoriales con organizaciones de mujeres para la construcción participativa de la Política Pública Nacional de Género, establecida en el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos”, en la cual han participado 120 mujeres de los territorios ART-Redes. Actualmente se encuentra en consulta para ser elevada a documento CONPES.
- En el departamento de Nariño se ha aprobado una política pública departamental de género, y en Meta y Pasto (Nariño) formuló una política pública para la equidad de género. En todos estos casos, ART-Redes aportó asistencia técnica en la formulación del proyecto y facilitó la participación de organizaciones sociales con enfoque en mujeres y equidad de género.

### 2.3. Mecanismos para acceder a la verdad, la justicia, y la reparación

- Las iniciativas sociales, instituciones locales y universidades que apoya el Programa ART-Redes en los territorios, han permitido que 9169 víctimas sean orientadas o reciban atención psicosocial y psicojurídica. Así mismo, se ha facilitado la entrega de los restos mortales de 160 víctimas de desaparición forzada, en articulación con el Fondo de Justicia Transicional (FJT). En el marco de la mesa de garantías de derechos humanos se realiza el seguimiento a 10 casos de víctimas amenazadas.

- 1764 participantes de organizaciones y 150 funcionarios públicos han mejorado sus capacidades en temas de derechos de las víctimas, particularmente en: rutas de acceso a derechos; posibilidades de acción jurídica; incidencia política; reconstrucción de memoria individual y colectiva; ley de Justicia y Paz y Decreto 1290 de Reparación Administrativa y Ley de Víctimas y restitución de tierras. Actualmente los líderes replican los contenidos de estas capacitaciones en sus municipios de influencia.
- 480 víctimas de 47 municipios han participado en ejercicios de reconstrucción de la memoria como una forma de simbolizar el deseo de no repetición y dignificar a los familiares de las víctimas del conflicto armado. Dentro de estas experiencias se destacan: el video multimedia de Minas de Iracal de Pueblo Bello en Cesar; la compilación “Narrativas visibles en el Meta; el Museo itinerante de la memoria en Montes de María y el Museo de la Memoria en Antioquia.
- 300 organizaciones de víctimas participaron en espacios de diálogo para realizar propuestas de política pública en el marco del contenido de la Ley de víctimas. En las regiones en que coinciden el FJT y el Programa ART-Redes, se presentó complementariedad canalizando estas propuestas a través de FJT, para ser elevadas al Ministerio de Justicia, encargado de la elaboración del articulado final.

#### *2.4. Fortalecimiento de capacidades e incidencia en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario.*

- 150 organizaciones participaron de manera activa y efectiva en espacios de socialización y consulta de la Declaración Conjunta de Derechos humanos y presentaron propuestas y recomendaciones para construir una política pública de DDHH y Derecho Internacional Humanitario. A pesar de la desconfianza que algunas organizaciones y plataformas tienen frente a las instituciones y sus reservas frente al avance en la protección y garantía de los derechos, la presencia territorial del Programa facilitó los espacios de diálogo, constituyéndose en un garante del proceso. En el 2011 se ha reactivado la Mesa Nacional de Garantías para defensores y defensoras de derechos humanos y las oficinas territoriales del Programa ART-Redes han facilitado la participación de las organizaciones de derechos humanos de las regiones en los 6 espacios nacionales de rendición de cuentas con la participación de los ministros del interior, de agricultura y de defensa y de la Fiscalía General.
- La presencia territorial del Programa ART-Redes permite facilitar el acceso institucional en zonas muy afectadas por el conflicto, a través de misiones conjuntas con agencias del Sistema de Naciones Unidas (SNU) ACNUR, OACNUDH, CICR y DNP. De esta manera, se han acompañado 40 misiones humanitarias para trabajar con pueblos indígenas de Huila, Caquetá y Nariño.

### **3. Gobernabilidad, democracia local y construcción de paz**

#### *3.1. Poblaciones históricamente excluidas son reconocidas y participan en espacios de incidencia, fortaleciendo sus liderazgos y organizaciones*

- Un total de 78 redes de mujeres, indígenas, afrodescendientes y jóvenes de las 6 regiones del Programa han sido fortalecidas en sus capacidades técnicas para incidir en políticas públicas que les favorezcan.
- Mediante asistencia técnica a gobernaciones y alcaldías locales se han desarrollado, de forma participativa, herramientas para la formulación, seguimiento y veeduría de: políticas públicas locales en Cesar, Huila y Nariño; el establecimiento de espacios de participación; el fortalecimiento de Programas de Desarrollo y Paz y el fomento de alianzas entre organizaciones, instituciones y empresas privadas. Entre estas herramientas podemos mencionar los sistemas de protección y prevención en DDHH y DIH y las matrices de implementación de políticas públicas de juventud y de género en Nariño.
- En el caso específico de Nariño, estos procesos han permitido formular y aprobar la Política Pública de juventud, la Estrategia Departamental de Protección de Derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, el Plan de etnodesarrollo del pacífico nariñense y establecer espacios de implementación de las políticas en donde participan continuamente 160 mujeres y 180 jóvenes líderes de organizaciones. Así mismo, estos procesos han posibilitado articular agencias de cooperación internacional alrededor de los Planes de Desarrollo departamental y del municipio de Pasto, como un modelo de alineación y eficacia de ayuda directa al desarrollo.
- 1217 personas pertenecientes a organizaciones sociales de Huila, principalmente autoridades y mujeres indígenas, han mejorado sus conocimientos para incidir en la formulación de políticas públicas en torno a temas de derecho y gobierno propio, jurisdicción indígena, fortalecimiento de las

mujeres indígenas en torno al Auto 004 y Auto 092. Estos procesos han permitido contar con mejores elementos para establecer y orientar los planes de vida en los territorios indígenas.

### *3.2. Incorporación de temas de desarrollo, paz, reconciliación, participación de poblaciones excluidas y fortalecimiento de la democracia local en las agendas del proceso electoral 2010 - 2011*

- En el marco del proceso electoral 2010 – 2011, los territorios desarrollaron un estrategia en articulación con el Área de Gobernabilidad del PNUD, orientado a incidir en los programa de gobierno de los candidatos y candidatas y en los planes de desarrollo departamentales y municipales para incluir en estos, temas pertinentes a poblaciones tradicionalmente excluidas en las regiones. Esta estrategia se enmarca en tres fases, de las cuales se resaltan los siguientes resultados:

#### **Etapa preelectoral**

- Mediante la producción y difusión de 5500 ejemplares de las separatas territoriales “Construcción participativa de planes de gobierno” se promovieron espacios de formación a organizaciones de la sociedad civil y candidatos a corporaciones públicas para definir agendas comunes sobre temas prioritarios, entre los cuales predominaron las temáticas de equidad de género y derechos de las víctimas<sup>1</sup>.
- 11.280 personas participaron en 47 foros con candidatos en los 6 territorios y en 25 municipios. Durante estos foros se firmaron 50 pactos con candidatos y candidatas, en los cuales se acordaba incluir temas de víctimas, mujeres y equidad de género, etnias (indígenas y afro descendientes), desarrollo rural, jóvenes, AICMA y comunicación y cultura. Así mismo se apoyo la formación y participación de 75 observadores electorales.

#### **Etapa post - electoral**

- Se brindo asistencia técnica a los candidatos y candidatas elegidas, con el fin de incorporar las propuestas suscritas en los pactos en los planes de desarrollo municipal. Debido a la fecha de preparación de este Informe aún no se había aprobado los planes de desarrollo lo que impide establecer con exactitud la magnitud de la incidencia lograda. Sin embargo, es importante anotar que de las personas que participaron en los procesos de formación, 33 resultaron elegidas para corporaciones públicas.

## **4. Desarrollo socio económico sostenible para la Paz**

### *4.1. Promoción de alternativas de desarrollo económico local incluyente en concertación entre el Estado, sociedad civil y sector privado*

- De manera directa, 580 familias en 4 regiones (Huila, Montes de María, Meta y Antioquia) desarrollan iniciativas socio productivas enfocadas en recuperación de las condiciones económicas de población desplazada o asentada de zonas de alto impacto del conflicto, esto contribuye también a reconstruir el tejido social y fortalecer las organizaciones de base en términos de sus capacidades de formular y gestionar proyectos productivos. A pesar de que estas iniciativas llevan poco tiempo de implementación, las familias beneficiarias perciben una reducción en su situación de inseguridad alimentaria, e incursionan en mercados campesinos con sus productos mejorando sus ingresos y reduciendo los costos por la intermediación.
- A través del fortalecimiento de las Agencias de Desarrollo Local, los Programas de Desarrollo y Paz y la articulación a la oferta local institucional de proyectos de desarrollo, en Antioquia, Nariño y Cesar se han identificado y formulado de manera participativa 11 iniciativas por la que buscan el desarrollo rural con enfoque territorial, enfocadas en la restitución de tierras a población desplazada en proceso de retorno creación de Zona de Reserva Campesina, asistencia técnica a organizaciones de mujeres para la presentación de proyectos productivos al INCODER (en el Cesar).

<sup>1</sup>Es importante anotar que esta etapa es previa a la promulgación de la ley 1448, por lo cual las responsabilidades emanadas de la ley no fueron incluidas en los programas de gobierno, sin embargo, durante el 2012 se ha prestado asistencia técnica a gobernaciones y municipios para implementar esta política.

En articulación con las ADEL de Nariño la identificación de cadenas de valor para formular e implementar proyectos que beneficiaran de manera directa a 4.000 personas en situación de vulnerabilidad, residentes en zonas de alta incidencia del conflicto. Se ha consolidado la Red Agencias de Desarrollo Económico Local de Colombia (ADELCO) que ha permitido desarrollar una estrategia de servicios a los socios. Además se ha fomentado un intercambio de aprendizajes, en red, en marketing territorial, turismo, agroindustria y estrategia territorial y se ha constituido un banco de proyectos.

- ADELCO ha mejorado sus capacidades en términos de incidencia en política pública y creación de nuevas alianzas, consolidándose como un actor influyente y legitimado en materia de Desarrollo Económico Local, de tal manera que ha sido incluida en el Plan Nacional de Desarrollo (Capítulos II y VII) como una herramienta priorizadas y está involucrada en el Proyecto DELCO del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y financiado por la Unión Europea (UE), encargada de aportar y sistematizar insumos para el CONPES de Desarrollo Local, actualmente en discusión.

## 5. Monitoreo, Evaluación, Gestión del Conocimiento y Comunicación

- Se encuentra en proceso la sistematización de la experiencia de construcción de paz con enfoque territorial en Nariño, un documento de "lecciones aprendidas para la construcción de paz desde las regiones" y la sistematización de la experiencia de trabajo articulado con ONU Mujeres "Género y construcción de paz, nuevas perspectivas". Lo anterior como un ejercicio para recuperar la memoria de los actores sociales y visibilizar sus apuestas de construcción de paz y el trabajo de ART-Redes en Colombia para contribuir al debate nacional e internacional sobre construcción de paz con enfoque territorial.
- Se ha elaborado un video sobre la experiencia de ART-Redes con la participación de las iniciativas territoriales de paz.
- Teniendo en cuenta los resultados de la Línea de Base 2010, se ha presentado un ajuste al marco de resultados de ART-Redes y por esta vía a los planes de trabajo anuales con el objetivo de enfatizar en el desarrollo de capacidades que son débiles en las organizaciones de la sociedad civil.

### Iniciativa ART Multiniveles

Si bien en términos del PRODOC la iniciativa ART es un componente transversal en la intervención esta ha sido más desarrollada en Nariño y en Montes de María, en donde ha mejorado la articulación de los actores con el ciclo de programación local se ha generado un importante efecto multiplicador de recursos (por cada US\$1 invertido en los territorios se movilizan US\$15) para desarrollar iniciativas de construcción de paz. De este trabajo podemos resaltar los siguientes resultados:

- En proceso, transferencia hacia las nuevas instituciones nacionales y locales del Sistema Nacional de Cooperación Internacional (SNCI) de los mecanismos y espacios de articulación multinivel iniciado con enfoque ART. Para esto se han generado reuniones con funcionarios de APC y con los nuevos gobiernos regionales teniendo en cuenta el enfoque metodológico y los avances en Nariño, referencia del SNCI.
- Se ha apoyado la presentación regional de APC en 8 regiones y se diseñó una línea de base sobre articulación multinivel y eficacia de la ayuda a nivel local en el marco del SCNI que está en actual implementación. Además fue aprobada una propuesta a APC de la primera fase de transferencia del enfoque ART para el fortalecimiento de SNCI (USD\$ 80.000) y otra propuesta de apoyo a las ADEL (por USD \$ 220.000) permitiendo el aval político para el inicio de la apropiación nacional.
- 60 representantes de gobiernos locales y regionales de América Latina y otros países del sur y varias redes de cooperación descentralizada, organizaciones de la sociedad civil, agencias nacionales, la Unión Europea, la OCDE y las Naciones Unidas participaron en Seminario "Eficacia de la ayuda a nivel local: Perspectiva de América Latina" obteniendo un insumo importante para el documento final del proceso consultivo liderado por la Iniciativa ART y presentado en el FAN 4 de Busán. En las mismas fechas, el IV Encuentro de Cooperación Descentralizada, organizado con la ACCI Medellín y el Gobierno Nacional permitió traer a Colombia buenas prácticas de cooperación descentralizada Europea.



## Impactos tempranos

Los productos y sus efectos relacionados en la sección anterior; están orientados a producir impactos positivos en la condiciones de construcción de paz en los territorios. Durante los grupos focales con organizaciones sociales e instituciones fue posible establecer una serie de impactos tempranos a nivel de individuos, el entorno socio político y efectos directos de las intervenciones, que describen un cambio en las situaciones encontradas en los ejercicios de análisis de conflicto y en la línea de base, los cuales merecen especial seguimiento:

Las propuestas de las organizaciones se transfieren a las instituciones y se convierten en políticas públicas para la construcción de paz a nivel territorial que introducen aspectos para reducir las brechas en poblaciones tradicionalmente excluidas particularmente mujeres y grupos étnicos

- Las iniciativas desarrolladas y la aplicación de enfoques diferenciales han permitido que las redes sociales tengan la capacidad de formular propuestas de políticas públicas en temas de su interés y que estas propuestas se vean materializadas en planes, programas y proyectos a nivel municipal y departamental que les permitan transformar sus condiciones de vida y por esta vía superar las conflictividades. Entre ellas las políticas públicas que están aprobadas o en proceso de aprobación se cuentan las de: equidad de género de Nariño y Meta; la apropiación de modelos de atención a víctimas en 3 regiones, la creación de secretarías de equidad de género en Nariño, Meta y Cesar; la creación de Zonas de Reserva Campesina en Cesar y Montes de María; los planes de etnodesarrollo de Nariño y Montes de María, el reconocimiento del gobierno propio indígena de Huila y Cesar; las políticas de Juventud de Nariño y la inclusión de temas de construcción de paz en los planes de desarrollo municipales y departamentales y de los 6 territorios ART-Redes.

Promoción de facilitadores para la solución de conflicto en sus comunidades u organizaciones o mejores condiciones de vida

- Los procesos de capacitación y el diálogo han permitido que las comunidades empoderen a los líderes para que estos multipliquen los conceptos de construcción de paz; dinamicen espacios para exigir el respeto de los derechos humanos; generen relaciones más horizontales con las instituciones locales; participen de forma activa en los procesos electorales y logren posiciones en las corporaciones públicas. Esto constituye una capacidad instalada en los territorios para facilitar la resolución de conflictos.

Establecimiento de foros, mesas u otros mecanismos para el debate

- Los espacios de diálogo se han consolidado e incluso en algunos casos se han institucionalizado, permitiendo mejorar la interlocución entre organizaciones sociales e instituciones. Se resalta la percepción que la interlocución entre la comunidad y las instituciones ha mejorado notablemente, reduciendo el temor en las comunidades de hablar, participar y exponer sus propuestas, debido a que se estigmatizaban. Actualmente, las organizaciones y comunidades propone con tranquilidad y los funcionarios de la entidades públicas han mejorado su percepción hacia ellos. Ejemplos son los espacios de diálogo alineados al ciclo de programación local en Nariño y Meta.

Reconocimiento a las brechas de género y aplicación de conductas afirmativas

- Los participantes de las iniciativas, tanto de organizaciones sociales y de instituciones han ido cambiando gradualmente la percepción de la Violencia Basada en Género (VBG) es un tema exclusivamente de las mujeres y han incluido propuestas para aplicar conductas afirmativas para reducir la inequidad de género en el marco de los programas de gobierno. Estas propuestas han sido institucionalizadas y hoy en día son implementadas desde las alcaldías y gobernaciones. Por ejemplo, la política de equidad de género de Nariño y Meta, la Semana contra la violencia basada en género de Montes de María o la campaña ¡Párala ya! del Cesar.

## Mejores conocimientos para desarrollar propuestas de construcción de paz.

- El acceso de 6938 personas en diferentes espacios de formación dirigidos a desarrollar capacidades para analizar las causas y dinámicas del conflicto con enfoques poblacional y de derechos, ha permitido mejorar la calidad en las propuestas de construcción de paz de las redes y organizaciones. Por ejemplo, de propuestas que representaban problemas individuales hoy hay iniciativas colectivas que buscan solucionar causas estructurales de los conflictos en los territorios.

### Recuperación de medios de vida

La lógica de intervención integral de ART-Redes permite identificar comunidades con mayores necesidades en términos de mejoramiento de sus condiciones de vida y articular cadenas de valor para los productos tradicionales de la región de manera sustentable. Es así como se ha logrado que 580 familias de comunidades identificadas como prioritarias mejoren sus ingresos y reduzca su situación de inseguridad alimentaria e incursionen en mercados campesinos con sus productos. Esto ha permitido mejorar sus ingresos y reducir los costos de intermediación.



*“Gracias al trabajo de la Mesa Humanitaria del Meta empezamos a hablar de derechos étnicos y de inclusión. Hoy, por decreto, se reconoció el Consejo de Comunidades Negras del Departamento. Ya se nos reconoce una identidad. Antes existíamos pero no éramos reconocidos. Este proceso se ha hecho posible gracias a la cooperación internacional y que siempre ha estado a nuestro lado dándonos asesoría técnica y recursos.”*

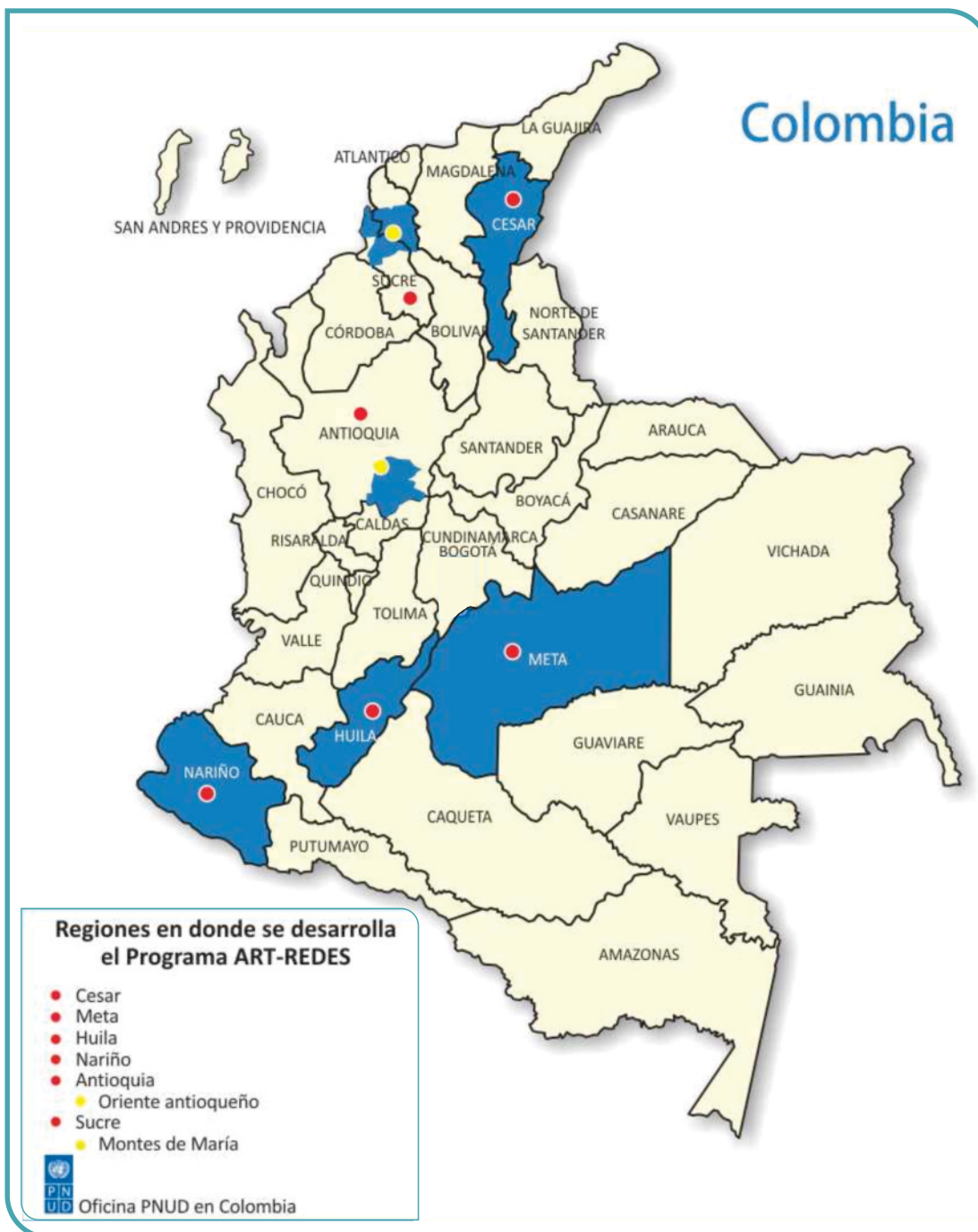
**Luis Eduardo Perea Caicedo.** Líder de la Mesa Humanitaria del Meta

## 4. Informes por territorio

El enfoque territorial implica definir desde los territorios y con los actores sociales relevantes, las propuestas de construcción de paz más pertinentes. Esta consideración motiva el interés de presentar un Informe por cada territorio en donde se desarrolla el Programa ART-Redes. En cada región se presenta la situación inicial (en términos de la línea de base y del contexto); las estrategias establecidas en cada territorio (en términos de acciones transformadoras de la situación); los resultados obtenidos en desarrollo de las estrategias y los impactos tempranos percibidos por las organizaciones de sociedad civil e instituciones.

Así mismo, se han seleccionado algunos testimonios de personas que participan en los procesos para mostrar, más allá de los efectos cuantitativos, los efectos de la intervención. También se incluyen mapas para referenciar la intervención a nivel municipal y gráficos que ilustran las redes con las que se trabaja en el territorio.

## Regiones donde se desarrolla el programa ART-Redes



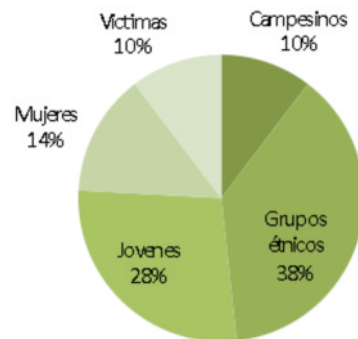
Colombia

# Nariño



El Programa ART-Redes inició sus actividades en Nariño en 2008. Históricamente, por su posición estratégica, el departamento ha tenido fuerte presencia de grupos armados ilegales, principalmente las FARC. A su vez, la problemática de contaminación de MAP / MUSE y los cultivos ilícitos de coca han generado una lucha territorial, en la cual los principales afectados han sido las comunidades indígenas, campesinas y afros, grupos poblaciones predominantes en el departamento.

## Nariño - Organizaciones vinculadas a las redes sociales por enfoque

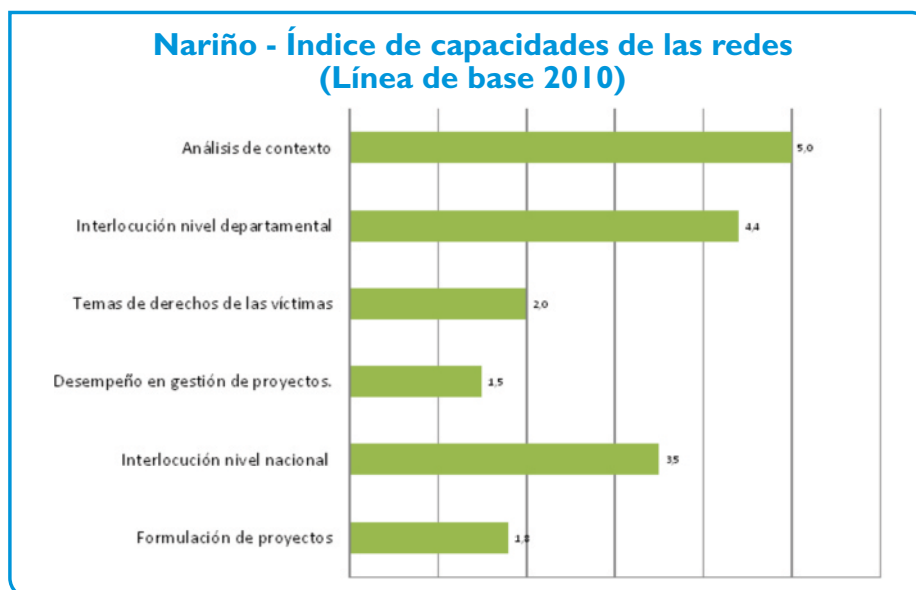


En este contexto, el programa ART-Redes trabaja con 21 redes de organizaciones sociales e instituciones, las cuales se caracterizan, según la Línea de Base 2010, por contar con amplias capacidades para analizar el contexto de conflicto, desarrollar estrategias orientadas a la construcción de paz en la región y sostener un alto nivel de interlocución con instituciones departamentales.

## Redes Nariño



Sus principales debilidades se centran en temáticas de derechos de las víctimas y en la formulación, gestión y sistematización de proyectos. Así mismo, se evidencia la necesidad de cualificar los Planes de Etnodesarrollo para las comunidades afrodescendientes y los Planes de Vida para las comunidades indígenas. Cabe anotar que en 2010, el tema de los espacios de interlocución en Nariño se orientaba a temas de participación ciudadana, convivencia y derechos humanos.



### Acciones transformadoras

Luego de una fase exploratoria concluyó en el 2007, se inicio en Nariño, un año después y con un proyecto piloto, el programa ART-Redes, que integró elementos de construcción de paz de BCPR y de planeación participativa, según el enfoque metodológico de la iniciativa ART del PNUD. Esta experiencia piloto permitió, durante el 2011, implementar las siguientes estrategias:

#### *a) Fortalecimiento de capacidades locales de paz*

El trabajo del Programa en Nariño tiene como principal objetivo dinamizar un proceso de articulación local que permita definir e implementar agendas de desarrollo humano y paz. En esta lógica las acciones están encaminadas a lograr la articulación entre los diferentes espacios territoriales, sectoriales y poblacionales (afros, indígenas, mujeres y jóvenes) en un espacio común.

#### *b) Fomento de conocimiento útil para la acción*

Sistematizar la experiencia de construcción de paz en Nariño, ya que ha sido un referente en términos de la alineación de la cooperación internacional con el ciclo de programación local.

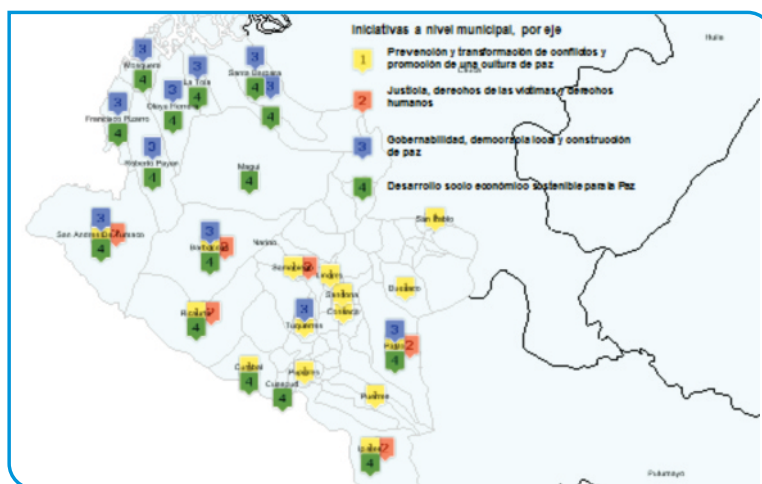
#### *c) Consolidación de alianzas*

Continuar con el desarrollo de capacidades de la Mesa Departamental de Mujer y Género, la Mesa Departamental de Juventud, la alianza Nariño Decide y la Alianza de Comunicación y Cultura.

#### *d) Incidencia en políticas públicas*

Facilitar los procesos de implementación del Plan de Desarrollo Departamental, de la Estrategia de Cooperación y de las políticas públicas de equidad de género, infancia adolescencia y juventud y la estrategia de protección de derechos de niñez y juventud departamental, promoviendo la participación de actores representativos en cada uno de estos referentes.

En el marco de estas estrategias se obtuvieron los siguientes resultados, en cada uno de los ejes del programa:



## 1. Prevención y transformación de conflictos y promoción de una cultura de paz

- 27 Escuelas de Liderazgo Juvenil han permitido a 800 jóvenes desarrollar capacidades de liderazgo y adquirir herramientas para trazar estrategias orientadas a la transformación del conflicto. Es importante anotar que la vinculación de los jóvenes ha aumentado 40%.
- 2500 jóvenes, vinculados a las Escuelas de Liderazgo Juvenil participaron en seis mesas subregionales del Grupo de Trabajo Departamental (GTD) y han incidido en la la Política Pública Departamental sobre infancia, adolescencia y juventud y en la estrategia de protección de los derechos de la niñez y la juventud del departamento. Esta política se lanzó en 2011 con la participación de 180 jóvenes de Nariño.
- 17 Escuelas Municipales de Mujer han permitido a 850 mujeres desarrollar capacidades de liderazgo e incidencia. Este grupo de mujeres ha participado en la construcción e implementación de la Política Pública de Equidad de Género elaborada con el apoyo técnico del Programa ART-Redes. Esto se traduce en más mujeres participando en las mesas municipales, subregionales y en la mesa departamental de mujer y equidad de género. Actualmente existen 10 mesas temáticas subregionales de Mujer y Género desde donde promueven la implementación de la Política Pública de Género aprobada en 2010. Es importante anotar que la participación de mujeres vinculadas a estos procesos aumentó 40%.
- Con la participación de la institucionalidad departamental, municipal y nacional y de las comunidades residentes en zonas afectadas por minas antipersona y con el apoyo del PNUD, PAICMA y UNICEF se construyó el Plan de Acción Departamental de acción integral contra minas. Actualmente un comité articula el Plan para prevenir accidentes con minas y reparar a las víctimas en la región.
- Consolidación de un proceso con diversos actores para fortalecer la construcción de una visión región desde la cultura y la comunicación. Este proceso ha permitido, entre otros, fortalecer la Red de Comunicación y Cultura liderada por el Fondo Mixto de Cultura, en la que participan emisoras comunitarias y colectivos de comunicaciones.

## 2. Justicia, derechos de las víctimas y derechos humanos

- En el marco del Comité de Impulso de Derechos Humanos y Víctimas de Nariño, 158 víctimas que representan a 87 organizaciones y grupos étnicos del departamento, participan e inciden en la formulación de la Ley de Víctimas y las mesas de garantías de defensores de derechos humanos.
- La estrategia ART ha permitido articular organizaciones de derechos humanos y derechos de las víctimas, tales como: el Comité de Impulso (Departamental - articulación sociedad civil DDHH y víctimas); la Mesa de Garantías (Nacional/Departamental- garantías a defensores de DDHH); la Mesa de DDHH Nariño (Departamental-Espacio tripartito DDHH), el Comité Interinstitucional de Atención a Víctimas (Departamental-Espacio tripartito atención a víctimas); el Comité de DDHH Sector Montañoso (Regional- Articulación sociedad civil DDHH y víctimas); la

mesa de DDHH de Pasto (Municipal- Espacio Tripartito DDHH y víctimas) y la Misión Humanitaria Permanente del Territorio del Pueblo indígena Awá (MHPTIA) . Estos grupos articulan 35 actores para desarrollar capacidades en materia de DDHH, implementación de estrategias en favor de los derechos de las víctimas, coordinan acciones de actores locales y fomentan la articulación local/nacional.

- Las instituciones departamentales, en el marco de la Ley 1448, han mejorado sus capacidades para garantizar los derechos de las víctimas, a través de la asistencia técnica al Comité Interinstitucional de Atención a Víctimas, el cual ha desarrollado un plan de trabajo en formación y participación en políticas públicas, promoción y difusión de los DDHH y análisis del conflicto armado.
- Incidencia en el proyecto de Ley de Víctimas a través de tres estrategias: socialización, análisis de los retos de los espacios y referentes y la consulta directa a las víctimas de las organizaciones. El grupo de trabajo de víctimas de Nariño se reunió con el Comité de Impulso de Organizaciones Sociales de Víctimas y Defensa de los DDHH de Nariño, el Comité Interinstitucional de Atención a Víctimas, los Comités Territoriales (Departamental y municipales) de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Mesa de Garantías a los Defensores y Defensoras de DDHH y Líderes Sociales, el Comité de Estudio y Evaluación de Riesgos – CRER, la Mesa Departamental de Derechos Humanos de Nariño, el Comité Interinstitucional de Vigilancia a la Gestión Pública (CIVIGEP) para socializar y analizar el contexto y los retos de la implementación de la Ley 1448 desde las diversas visiones y elaborar documentos de aportes a la misma, los cuales fueron entregados al FJT a través del Programa de Convivencia.
- Se facilitó la conformación de la corporación del Cabildo La Montaña (Samaniego) y en proceso de legalización la corporación del resguardo “La Montaña”. Actualmente se está validando de manera participativa el Plan de Vida del sector montañoso, a partir del cual el Comité elaboró la agenda de incidencia en el Plan de Desarrollo municipal para su negociación con la alcaldía de Samaniego. Este resultado fue posible gracias al acompañamiento del Comité de DDHH Sector Montañoso de Samaniego, Santa Cruz de Guachavez y La Llanada, que incluye cinco corregimientos, 23 veredas y sectores de las Juntas de Acción Comunal y los Comités de Trabajo.
- El apoyo que el Equipo Humanitario Local (EHL) ha brindado a la MHPTIA ha permitido identificar los riesgos en que se encuentra la comunidad y avanzar en respuestas a sus diferentes problemáticas.

### 3. Gobernabilidad, democracia local y construcción de paz

- 160 mujeres y 180 jóvenes líderes de organizaciones de la sociedad civil participaron activamente en las mesas municipales, subregionales y departamentales de Mujer y Equidad de Género y de Jóvenes, desarrollando estrategias de implementación de la Política Pública de Género, aprobada en 2010, y la estrategia de Protección de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, convocada por la Alianza para la Niñez y la Infancia.
- Con la participación de más de 4500 mujeres y de 3000 jóvenes y en coordinación con instituciones locales (Gobernación, articulación con 15 alcaldías, Escuela Superior de Administración Pública ESAP, universidades, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), IDSN, 10 ONG y organizaciones sociales), se aprobó la Política Pública de Juventud y la Estrategia departamental de Protección de Derechos de niños, niñas y jóvenes. El proceso cuenta con el apoyo de más de diez actores internacionales que se han vinculado al proceso.
- Así mismo se establecieron instrumentos de coordinación definidos como “matrices de implementación” . Estas matrices incluyen todos los temas claves para la construcción de paz desde lo local y han permitido desarrollar capacidades y comprometer a los actores públicos y de la sociedad civil en la implementación de las políticas públicas. El proceso cuenta con el apoyo de más de diez actores internacionales.
- Apoyo a la implementación participativa de los Planes de Desarrollo Departamental y el Municipal de Pasto (2008-2012). A partir de estos Planes y, con la participación de diferentes actores, se desarrollaron la Estrategia Regional y Municipal de Cooperación para el Desarrollo y la Paz. Esta estrategia ha permitido, en los últimos cuatro años, el trabajo articulado de más de 16 agencias de cooperación en Nariño.

- PNUD Nariño apoyó la formulación del Plan de Etnodesarrollo del pacífico nariñense. El documento es el referente para que las organizaciones que representan a las comunidades afro en los consejos comunitarios puedan participar e incidir en los planes municipales de desarrollo. El Plan de etnodesarrollo beneficia a la población de 9 municipios en dos regiones geográficas de Nariño (Telembí y Sanquianga) en que residen 180.000 habitantes pertenecientes a grupos étnicos: afro (89%) mulatos y mestizos (5%) e indígenas (6%) de los grupos Awá y Eperara Siapidara, reunidos en 13 resguardos que ocupan el 30% del territorio.
- En el marco de la estrategia del PNUD para las elecciones departamentales y municipales de 2011, se conformó en Nariño la Alianza: Nariño Decide. A partir de esta alianza se consolida una estrategia durante el 2011 centrada en incidir programáticamente en el proceso electoral y en fortalecer las administraciones. En el marco de esta alianza, se apoyó la realización de más de 32 foros con candidatos a las corporaciones públicas en más de 25 municipios del departamento. A nivel departamental más de 10.000 personas participaron en los foros. Esta estrategia fue coordinada por cuatro actores estratégicos: PNUD, Fondo Mixto, Suyusama y las ADEL. A la fecha de las elecciones 140 participantes en el proceso electoral representaban a 97 organizaciones de Nariño.
- La anterior estrategia incidió para que de las 114 personas inscritas (49 mujeres), 29 fueran elegidas: 3 para alcaldía, 21 para concejos municipales y 5 para las JAL. De todo el grupo de elegidos, 12 son mujeres.
- La Alianza Comunicación y Cultura ha conformado un Consejo Departamental de Comunicación que cuenta con un Plan de Acción formulado.

#### **4. Desarrollo socio económico sostenible para la paz**

- 4000 beneficiarios directos y 300.000 indirectos es el número de personas que se benefician de la Agencia de Desarrollo Económico Local (ADEL) Nariño que promueve el Desarrollo Económico Local en el marco de los siguientes componentes: Fortalecimiento, participación e incidencia de la ADEL en la Comisión Regional de Competitividad; en los proyectos del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico de Nariño (CIIDET Nariño); en el Proyecto de Desarrollo Turístico Binacional entre Colombia y Ecuador “Quiero a mi Frontera” y, en el proceso de la Región Pacífico, Minga Agroecológica al Sur.
- Se han definido lineamientos y estrategias para el desarrollo económico rural con enfoque territorial: Plan de negocios de café, estudios de mercado de la planta de fique, Plan de negocios de hortofrutícola y Proyecto Binacional de Turismo. Estos planes inciden en 2012, en el Plan de Desarrollo y en la Estrategia de Desarrollo Rural de la Gobernación de Nariño.
- Las ADEL regionales de la Agencia de Desarrollo y Paz del Pacífico Sur de Nariño (ADEPAS) y la Agencia de Desarrollo y Paz del Sur de Nariño (ADIFSUR), han formulado 9 proyectos que están en proceso de implementación, en la línea de pesca y de maricultura, en la producción y comercialización de camarón y en el fondo de capital semilla para mujeres afrocolombianas. Este proceso genera ingresos para 109 familias desplazadas del municipio de Cuaspud, fortalece los derechos humanos, la democracia y la gobernabilidad en la frontera colombo ecuatoriana y apoya el fortalecimiento institucional de la ADIFSUR.
- Más de 15 organizaciones de pequeños productores y por lo menos 5 Consejos Comunitarios de comunidades afrodescendientes han consolidado el Consejo Regional de Cacao, construyendo un acuerdo regional de competitividad de este producto, el cual permite coordinar acciones con las entidades públicas y desarrollar capacidades de los agricultores.
- Identificadas seis cadenas de valor de la región a través de estudios de cacao, turismo, hortalizas, fique, café y leche. 39 instituciones u organizaciones han sido fortalecidas para mejorar su nivel de ingreso.

#### **5. Monitoreo, Evaluación, Gestión del Conocimiento y Comunicación.**

- La construcción de modelos de escuelas de formación en liderazgo a jóvenes permitieron ampliar de 10 a 27 estas escuelas en igual número de municipios. Esto en articulación con el programa Ventana de Paz y Creciendo Juntos, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Gobernación de Nariño.
- Se ha sistematizado la experiencia de Nariño bajo el título “Eficacia del desarrollo a nivel local para la construcción de paz y el desarrollo humano en Nariño, Colombia”. Fue seleccionada por el Departamento



Nacional de Planeación (DNP) como una de las 10 mejores prácticas nacionales. Fue presentada durante el taller de inducción a nuevos alcaldes y gobernadores de Colombia en diciembre del 2011.

### Impactos tempranos

- Las organizaciones de grupos tradicionalmente excluidos, principalmente indígenas (Awa, Pastos, Eperara Siapidara, Ingas), afro y jóvenes no solamente son más visibles sino que cuentan con espacios de articulación con las instituciones locales e inciden efectivamente en el diseño de políticas públicas para mejorar sus condiciones de vida. A su vez mejoran sus capacidades para construir planes de vida étnicos y generar alertas sobre violaciones a los derechos humanos.
- Las estrategias de formación política y empoderamiento de poblaciones excluidas han permitido que 138 personas (100 mujeres) sean candidatas en el proceso electoral e incidencia en el mismo desde la miradas y los referentes de los jóvenes, las mujeres, los indígenas y las comunidades afro, permitiendo que el porcentaje de mujeres electas para los concejos municipales pasara de 9% en 2003 a 12.5% en 2011.
- Las rutas de derechos son conocidas y exigidas por las víctimas y de manera organizada presentan propuestas a las instituciones para que incorporen criterios diferenciales, como es el caso de la mesa indígena y de mujeres. Lo anterior permitió crear, entre las víctimas, una conciencia de analizar la situación e intervenir, pero también de organizarse para incidir en políticas públicas. Tal es el caso de la Ley de Víctimas. Esto es más relevante si se tiene en cuenta que han sido procesos de construcción colectiva y que se han ido abriendo espacio en los 32 municipios del departamento.
- Nariño cuenta hoy con una estrategia de construcción de paz consolidada y articulada con las iniciativas de cooperación institucional e internacional, que responde a las propuestas de 289 organizaciones. Esta estrategia se desarrolla en el marco de seis espacios permanentes de diálogo y concertación: protección y derechos humanos; atención integral a las víctimas y atención humanitaria; mujer y género; adolescencia y juventud, desarrollo económico, medio ambiente y cultura. Hacen parte de esta estrategia ocho mesas municipales con espacios permanentes en: infancia y juventud; desarrollo económico local; comunicación y cultura; medio ambiente; gobernabilidad, atención humanitaria y participación. Estos espacios y mesas se encuentran alineados con el ciclo de programación local y se han convertido en referentes para la gestión local (AOD), la construcción de paz y el desarrollo humano. El modelo ha sido considerado positivo por el Gobierno colombiano por la transferencia y apropiación de estrategias para la construcción de paz y por el fortalecimiento el Sistema Nacional de Cooperación Internacional. Así mismo ha facilitado la articulación interagencial del Equipo Humanitario Local (EHL) siendo un referente efectivo en Colombia.
- 5 de estos 14 han ganado independencia y apropiación de tal manera que el apoyo directo del PNUD ya no es una condición necesaria para su funcionamiento debido al alto nivel de empoderamiento y de su posicionamiento. En el caso del Grupo de Trabajo Departamental se está elaborando una ordenanza que posicione la cooperación como una política pública que trascienda periodos gubernamentales.
- La estrategia de articulación con la cooperación internacional ha permitido movilizar, entre 2007 y 2011, aproximadamente USD\$ 28.850.000 dirigidos a planes, programas y proyectos estratégicos de construcción de paz y desarrollo humano, generando un efecto multiplicador de hasta 15 veces la inversión que ART-Redes realiza en ese territorio. Entre los nuevos programas vinculados a la Estrategia de Cooperación están el Programa Ventana de Paz, financiado por el MDG Fund de AECID (7 millones de USD) y el Programa Creciendo Juntos, financiado por la cooperación canadiense (10 millones de USD).



Jorge Martínez

Gobernador Resguardo La Montaña (en proceso de legalización)  
Departamento de Nariño.

## **“Paz en el territorio y vida digna”**

---

*“En 2008, el Ejército Nacional bloqueó durante seis meses las principales vías de acceso a nuestra comunidad. En ese tiempo no pasaba ni salía nada. Posteriormente se nos restringió el ingreso de remesas, abonos y otras mercancías y muchos de nosotros fuimos estigmatizados. Se violaban nuestros derechos fundamentales. De esta experiencia aprendimos que teníamos que retomar nuestra seguridad alimentaria y que debíamos conocer más acerca del tema de derechos humanos.*

*Fue así, como empezamos a pedir asesoría y capacitación en el tema. Varias agencias y entidades que estaban presentes en el territorio nos acompañaron en un primer momento, pero luego solo el PNUD se quedó para ayudarnos a fortalecer. Después de adelantar procesos de capacitación, análisis y de recibir asesoría surgió una propuesta que involucraba a 16 veredas del sector y que llamamos: Paz en el Territorio y Vida Digna. De esa forma fue posible constituirnos como un resguardo indígena y realizar nuestro Plan de Vida.*

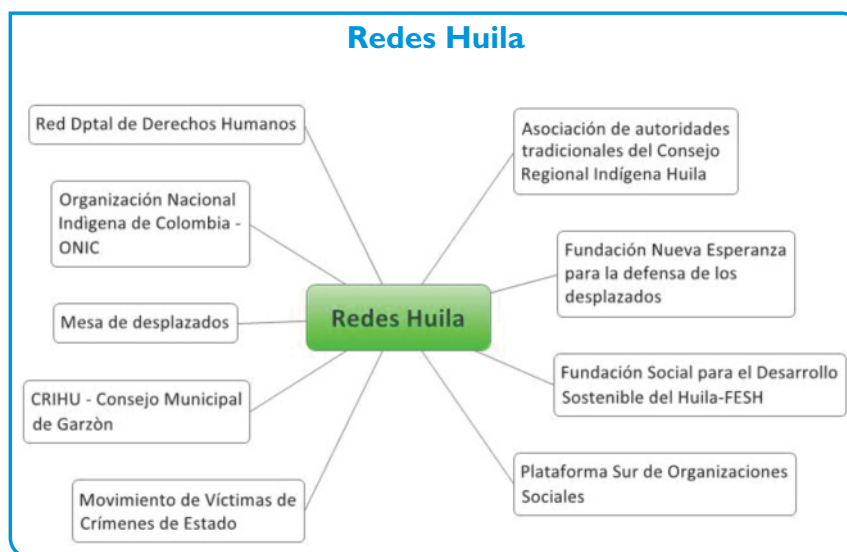
*Actualmente, la comunidad ha podido ver los resultados de habernos organizado. El conocimiento de nuestros derechos y deberes nos ha permitido disminuir los conflictos y concretar nuestra gran propuesta de legalizarnos en un resguardo indígena. Ahora, nos sentimos cohesionados como una sola comunidad, que cuenta siempre en sus reuniones y actividades con los delegados de las 16 veredas, lo cual antes no se daba.”*

---

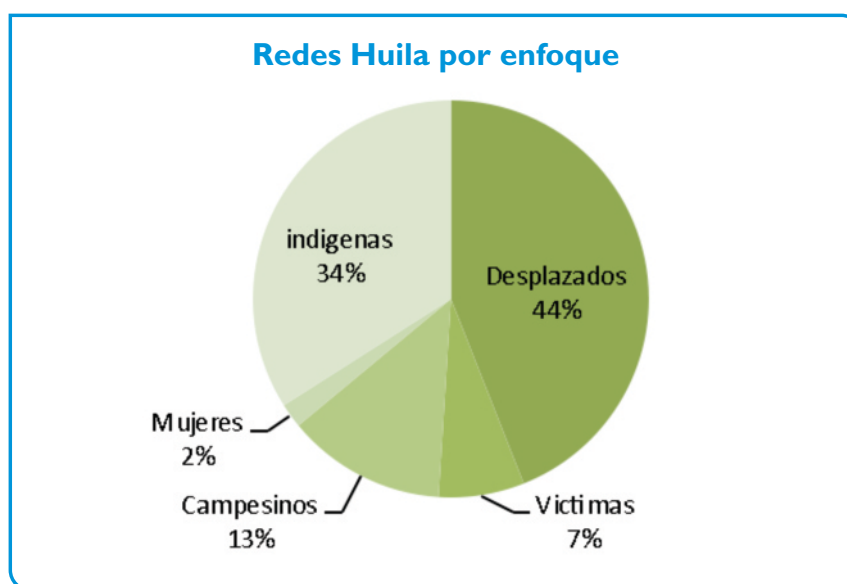
# Huila y el piedemonte amazónico



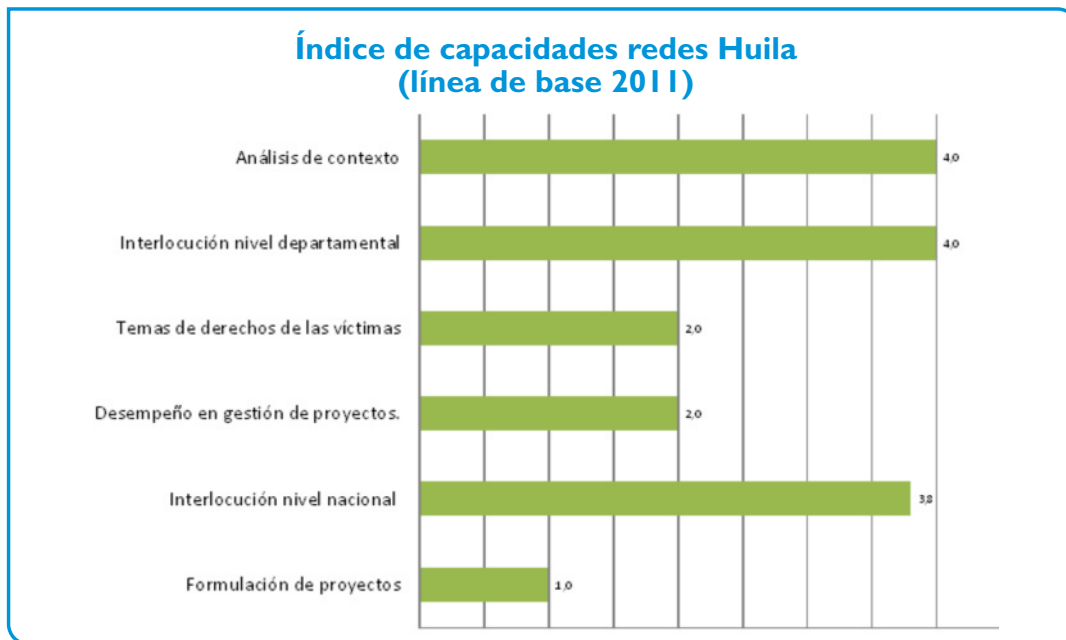
ART- Redes inició intervención desde el año 2006 en el Huila con el objetivo de potencializar las iniciativas de desarrollo y paz. Ha articulado trabajo con 9 redes de organizaciones sociales e instituciones, las cuales se enfocan principalmente en temas de derechos humanos, y derechos de las víctimas, en poblaciones en situación de vulnerabilidad, desarrollo rural y medio ambiente, entre otros.



Desde el inicio del Programa de Desarrollo y Paz Huipaz, la cobertura territorial no era solo el departamento del Huila sino que también municipios de Caquetá ante las afinidades culturales, socio-económica y territorial.



Según la Línea de Base 2010, las redes de Huila cuentan con un alto nivel en capacidad de análisis de contexto e interlocución con instancias públicas a nivel departamental.



No obstante sus debilidades se centran en la formulación y gestión de proyectos y en las pocas capacidades en el tema de derecho de las víctimas. Así mismo, las redes consultadas mencionaron que uno de los principales factores que obstaculizaba el trabajo de construcción de paz en la región era que las instituciones manejaban su propia lista de prioridades y las comunidades no eran tenidas en cuenta para realizar procesos de construcción participativa de planes, proyectos y políticas públicas, razón por la cual carecían de enfoques de derechos, de género y étnico. Aseguraron que las organizaciones tampoco contaban con espacios de participación para incidir en políticas públicas.

También se pudo observar, que el índice de confrontación entre las organizaciones y las entidades públicas fue uno de los más altos a nivel de los territorios, especialmente entre las entidades del Estado y las organizaciones indígenas. Adicionalmente se observaron tensiones entre las organizaciones y los grupos armados; débil capacidad para realizar alianzas y procesos de memoria y un casi nulo desarrollo de las organizaciones de jóvenes.

### Acciones transformadoras

En los departamentos de Huila y Caquetá, el programa ART - Redes del PNUD ha canalizado gran parte de sus esfuerzos en fortalecer la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario; el acceso a la justicia, la paz y el desarrollo humano sostenible, incluyendo el enfoque diferencial, pluralista y de género.

La presencia del Programa es en Huila, pero se adelantan acciones puntuales en Caquetá, debido a que estos dos departamentos tienen dinámicas sociales e institucionales comunes que los efectos del conflicto se presentan con mayor intensidad en las zonas fronterizas de los departamentos y en poblaciones en mayor estado de vulnerabilidad. Por lo anterior, la oficina territorial ha definido un plan estratégico, según la lógica de intervención, de la siguiente manera:

#### a) Fortalecimiento de capacidades locales de paz

Desarrollar espacios de construcción de cultura de paz con enfoque poblacional que promuevan el respeto y el ejercicio de los derechos, la diferencia con el otro, el abandono de la violencia como medio para resolver los conflictos y las bases de un Estado profundamente democrático, participativo, pluralista, respetuoso del poder y garante de los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas sin distinción alguno.

#### b) Fomento de conocimiento útil para la acción

Desarrollar capacidades desde la sociedad civil y la academia para promover una cultura de paz y diseñar contenidos académicos y participativos que reflejen en una formación más adecuada, la realidad del territorio, en temas de garantías de derechos de las víctimas.

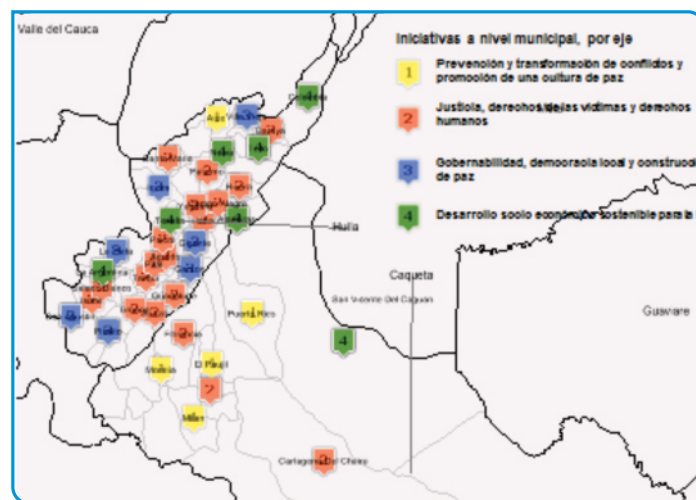
### c) Consolidación de alianzas

Mejorar la articulación con organizaciones de cooperación internacional (FORUMSYD y SUIPPCOL) y Agencias del Sistema de Naciones Unidas, tales como ACNUR, OACNUDH, ONU Mujeres, FAO y PMA con el fin de garantizar espacios de análisis y creación de escenarios de construcción de paz, exigibilidad de derechos, acompañamiento en misiones de verificación de DDHH y asistencia técnica a la población.

### d) Incidencia en políticas públicas

Asistencia técnica a las instituciones departamentales y municipales (Defensoría del Pueblo, personerías y alcaldías municipales) y a la Gobernación del Huila para promover la puesta en la agenda pública territorial de procesos de visibilidad de las violaciones de los derechos humanos y las infracciones al DIH; mediación en procesos para la resolución de conflictos; construcción o reformulación de políticas públicas enfocadas a grupos poblacionales y con enfoque diferencial; fortalecimiento de procesos de equidad de género y eliminación de todo tipo de violencias e impulso de las mesas de protección y prevención. Asistencia específica en algunos municipios de importancia estratégica, como San Vicente del Cagúan.

En el desarrollo de estas estrategias, se alcanzaron los siguientes resultados, de acuerdo a cada eje del Programa:



### 1. Prevención, transformación de conflictos y promoción de una cultura de paz

- 735 personas (374 hombres y 361 mujeres) desarrollaron, durante 2011, capacidades en temas como metodologías de mediación y transformación no violenta de conflictos, derecho internacional de los derechos humanos; contexto colombiano y conflicto armado político y social; derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado y derechos humanos de las mujeres; política pública de juventud; Ley 375 y Ordenanza 064 y enfoque de derechos. Esto fue posible gracias a iniciativas de formación desarrolladas con OACNUDH, ACNUR, ONU Mujeres y el Programa de Acompañamiento e Intervención Integral a Víctimas del Conflicto Armado Interno de la Universidad Surcolombiana (PAVIP - USCO). Este proceso ha permitido certificar a 18 Gestores Humanitarios, aumentar y cualificar su participación en espacios de construcción de redes para su posterior incidencia en la construcción política pública de juventud y desarrollar sus habilidades para resolver conflictos.
- Los departamentos de Huila y Caquetá cuentan con un observatorio de análisis regional Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y Violencia OBSURDH. Los análisis y sistematización realizados han permitido responder con acciones a la realidad y producir tres números de la revista "Voces y Silencios". La publicación visibiliza y sigue casos de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH. A su vez, se han incluido y depurado los 296 casos de los 1457 casos del periodo 2007-2011 y registros de la base de datos del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) para garantizar el proceso de recopilación de datos. Además, se amplió el número de organizaciones que implementan el marco conceptual, metodologías de sistematización de la información y que suministran información al proceso Banco de Datos el CINEP.
- La alianza con la PAVIP - USCO ha permitido desarrollar una estrategia de fortalecimiento de la cultura de paz en la universidad pública mediante la cátedra de "Constitución Política y Cultura de Paz", la cual es una asignatura obligatoria para los estudiantes de derecho, quienes en sus prácticas tienen la oportunidad de brindar mejor orientación a las víctimas.

- 36 experiencias de construcción de organizaciones en el departamento son visibilizadas en el marco del “Encuentro 20 de abril”, en el cual participaron 90 líderes de y 20 medios de comunicación comunitaria y ciudadana de 20 municipios del Huila. Este encuentro ha permitido consolidar la estrategia de construcción regional de experiencias y medios de comunicación comunitaria y ciudadana para incidir en la construcción de políticas públicas de cultura, comunicación e información y permitió construir lineamientos para los consejeros municipales en comunicación y cultura para desarrollar políticas públicas municipales y departamentales.
- Los jóvenes en el departamento cuentan con mayor y mejores espacios de articulación, expresiones organizativas y la participación como sujetos activos de su propio desarrollo en el Huila para su incidencia en la construcción política pública de juventud. Estas organizaciones cuentan con un espacio físico (Casa de la Memoria), un diagnóstico participativo sobre el estado de las políticas públicas de juventud, y la articulación de 26 organizaciones juveniles y la red de apoyo a la Campaña de Objeción de Conciencia, creada con la participación de 18 organizaciones, redes y entidades.
- Cualificado espacio para la participación de organizaciones sociales en 8 espacios interinstitucionales para la resolución de conflictos y mesas de concertación en articulación con Ministerio Público y el SNU. Estos espacios han girado en torno a temas de seguimiento a derechos económicos y sociales (municipio de Colombia), concertación en temas de derechos de los pueblos indígenas al territorio (San Agustín y la Plata), Reforma Ley 30, seguimiento a desplazamientos forzados, y efectos sobre los DDHH de los megaproyectos. Como resultado de estos espacios se han obtenido por parte de las instituciones locales actas de compromiso para que haya mejoras de infraestructura, reconocimiento de espacios de interlocución institucionales como forma de acceso a derecho (marchas campesinas) y compromiso para la reubicación de una base militar ubicada en un resguardo indígena. Esto último como muestra al reconocimiento de sus derechos constitucionales y para evidenciar el desarrollo de capacidades de los indígenas de los resguardo (Anaconas, Guámbianos y Nasas Paéces) para negociar sin recurrir a medios violentos y reiterando su autonomía como pueblos indígenas.

## 2. Justicia, derechos de las víctimas y derechos humanos

- 477 mujeres mejoran sus conocimientos en herramientas de auto reconocimiento, Estado, democracia y ciudadanía desde un enfoque de género, lineamientos organizativos de los procesos de mujeres, Política Pública Nacional de Mujeres y Lineamientos de incidencia en política pública. Este proceso se ha desarrollado en el marco de la alianza Casa de la Memoria-ONU Mujeres y les ha permitido aumentar y cualificar su participación en espacios de organización, construcción de redes para su posterior incidencia en la política pública de equidad de género y eliminación de todo tipo de violencias contra las mujeres.
- 1.689 Personas (701 hombres y 968 mujeres 988) de zonas de alta incidencia del conflicto armado acceden a proceso de formación individual sobre rutas de acceso a derechos, posibilidades de acción jurídica, de incidencia política y de reconstrucción de memoria individual y colectiva, Ley de Justicia y Paz y el Decreto 1290 de reparación administrativa, Ley de Víctimas y restitución de tierras y efectos de los megaproyectos sobre los DDHH.
- 102 víctimas del conflicto armado interno contaron con acompañamiento y representación jurídica con mecanismos de consulta, asesoría y representación jurídica y psicosocial y recuperación de memoria, que permiten el goce efectivo de sus derechos, por medio de las iniciativas “Programa de Acompañamiento e Intervención Integral a Víctimas del Conflicto Armado Interno de la Universidad Surcolombiana” CAPS y Caguán Vive. Estas iniciativas han permitido la realización de 215 consultas jurídicas de víctimas del conflicto armado interno, seguir 3 casos emblemáticos sobre ejecuciones extrajudiciales en el Huila a través del OBSURDH, defensa del territorio (comunidad indígena Resguardo la Reforma) y resignificación de la denuncia del delito de desplazamiento en la región sur colombiana.
- Las instituciones del Huila cuentan con mejores herramientas para promover la inclusión de agendas políticas de redes de organizaciones de mujeres en el proceso de construcción de Planes de Gobierno y Planes de Desarrollo territoriales, tales como instrumentos para la implementación del “Pacto Institucional de Prevención y Atención a las Violencias contra las Mujeres del departamento del Huila” (Gobernación) y los Acuerdos de voluntades firmados con los candidatos a la Gobernación, a la Alcaldía de Neiva y a la Alcaldía de Algeciras para incluir Planes de Desarrollo territoriales la perspectiva de género.
- Se ha institucionalizado en el departamento del Huila la “Semana por una vida sin violencias contra las mujeres” como espacio de visibilización e incidencia política para la eliminación de todo tipo de violencias contra las mujeres a través de la articulación de esfuerzos de las organizaciones, la institucionalidad, la empresa privada y el SNU.

- Se ha incrementado la presencia institucional, particularmente del Ministerio Público, y el seguimiento de casos de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH en zonas de alta incidencia del conflicto en Huila y Caquetá en articulación con organizaciones de la sociedad civil, Ministerio Público, CICR y SNU (OACNUDH, ACNUR). Esto se ha logrado con 38 misiones conjuntas de verificación de la situación de derechos humanos, seguimiento de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH.

### **3. Gobernabilidad, democracia local y construcción de paz**

- 1.187 personas pertenecientes a comunidades indígenas y (773 hombres y 414 mujeres) participaron en los procesos de fortalecimiento interno del Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU), mejorando sus conocimientos en derecho propio para la construcción de Planes de Vida de los cabildos y resguardos.
- 150 Personas (114 hombres y 36 mujeres) de la región “Pato Balsillas han cualificado su participación activa en los procesos de control y veeduría social, recuperación de la memoria histórica y apoyo a iniciativas de desarrollo económico local que impulsa la Asociación Municipal de Colonos del Pato Balsillas (AMCOP).
- Se han fortalecido las capacidades internas, los programas, el desarrollo de proyectos y el reconocimiento de los derechos a la autonomía, unidad, cultura y territorio de los pueblos indígenas y el CRIHU en Huila y Caquetá para su articulación e incidencia política. Esto mediante los Programas “Mujer creadora de vida” (Alianza con la ONIC) para el fortalecimiento de las mujeres indígenas en torno al auto 004 y Auto 092; articulación con la mesa subregional y departamental de mujeres del Huila (ONU Mujeres - PNUD); la capacitación a 30 líderes y lideresas en el marco del programa de Jurisdicción Indígena (pueblo Yanacona), acompañamiento y fortalecimiento para la creación de la Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Caquetá; el Programa Guardia Indígena, la realización de un diagnóstico territorial de los 21 cabildos y de los 3 pueblos del Huila; el proceso de formación en derecho propio para las autoridades administrativas de los pueblos indígenas de Huila y Caquetá, el Proyecto “Estrategia Regional de Capacitación de Autoridades Administrativas Indígenas de los departamentos”. En estos procesos han participado 105 autoridades administrativas de los pueblos indígenas de los dos departamentos.
- Las Juntas de Acción Comunal (ASOJUNTAS) de Colombia y San Vicente del Caguán desarrollaron sus capacidades mediante la creación comités de impulso interveredales de DDHH y Mesas de Concertación campesina, comités de veeduría del proyectos productivos y Comités de Mujeres de la región del Pato Balsillas.
- 11 organizaciones han consolidado una estrategia de fortalecimiento de la red UNIOS de las organizaciones sociales para la incidencia política a nivel del municipio de San Vicente del Caguán. Estas organizaciones desarrollaron un proceso participación activa de las organizaciones y procesos de base de San Vicente del Caguán para la elección de cargos de elección popular a la Alcaldía de San Vicente del Caguán y de construcción participativa de plan de gobierno realizado.
- En articulación con Huipaz y en el marco del proceso electoral 2011, se contribuyó a fortalecer el Proceso de Observación Electoral en el departamento del Huila mediante la capacitación sobre delitos en los procesos electorales de 75 personas (34 mujeres y 41 hombres) como observadores del proceso electoral y 34 Periodistas (16 mujeres y 18 hombres).
- 1280 personas participaron en 12 foros para la inclusión, evaluación y seguimiento de temas referentes a víctimas, mujeres, jóvenes, comunicación y cultura en la construcción de Planes de Desarrollo 2012 - 2015 con perspectiva de género y presupuestos sensibles. En estos espacios se logró la firma de un acuerdo de voluntades con 6 Partidos Políticos y 11 Acuerdos de voluntades firmados con los candidatos a la Gobernación del Huila, la Alcaldía de Neiva y la Alcaldía de Algeciras.

### **4. Desarrollo socio económico sostenible para la paz**

- 224 habitantes de zonas de alta incidencia del conflicto han mejorado sus capacidades para desarrollar iniciativas socio productivas mediante las estrategias de formación titulada desarrollada en articulación con la ESAP y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en temas de desarrollo económico sostenible, gestión y administración pública, sistemas de manejo ambiental y mejoramiento de la producción de café.
- 250 (140 hombres y 10 mujeres) habitantes de zonas de alta incidencia del conflicto armado interno se han beneficiado de proyectos modelo de desarrollo económico sostenible alternativo y de reactivación económica en el marco de las iniciativas de AMCOP-HUIPAZ. Estos proyectos han estado orientados a apoyar, con subsidios de micro capital, la siembra de 69 hectáreas de frijol, recuperación de la despensas de semillas propias de los pueblos indígenas, avicultura, piscicultura, ganadería y otras propuestas productivas de pequeña escala seleccionadas e implementadas. Asimismo han buscado el fortalecimiento agropecuario y agroindustrial.

- Se ha impulsado un proceso de socialización y divulgación de los impactos producidos por la construcción del megaproyecto hidroeléctrico del Quimbo, mediante la elaboración y distribución de 100 ejemplares del boletín "La voz de Matambo", elaborado por las comunidades de la zona de influencia de la represa.
- Se formularon desde las perspectiva de poblaciones excluidas agendas políticas colectivas que definen acciones concretas frente a temáticas relacionadas con el acceso, uso y control de la tierra y la política pública de seguridad, soberanía y autonomía alimentaria para su posterior concertación con instituciones del Estado. En estos espacios han participado representantes de la Red Departamental Agroalimentaria de 9 organizaciones, y la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina. Como resultado de este proceso, los candidatos| a la Alcaldía de San Vicente del Caguán firmaron un pacto para el desarrollo y sostenibilidad de la Zona De Reserva Campesina ZRC del Pato Balsillas, la constitución de la (ZRC) de Lozada-Guayabero y de la aspiración de otras regiones del municipio a constituirse en ZRC, la creación y funcionamiento del Consejo Municipal de desarrollo rural de San Vicente del Caguán y la incorporación de las propuestas de planes de desarrollo locales de las diferentes zonas en el Plan de Desarrollo Municipal.
- Se han fortalecido las alianzas-convenios de Asociación Municipal de Colonos de Pasto (AMCOP) con la institucionalidad y la empresa privada para el desarrollo de política pública territorial, entre las cuales se encuentran el Mejoramiento de las condiciones productivas del café especial amazónico y la estrategia de comercialización como fuente de generación de ingresos de campesinos organizados de la zona del Pato en el municipio de San Vicente del Caguán (Ministerio de Agricultura, Gobernación de Caquetá, Alcaldía de San Vicente del Caguán y Federación de Cafeteros). Existe el compromiso entre ELECTROHUILA y AMCOP para iniciar el proceso de ampliación del proyecto de Electrificación de la región Pato Balsillas, la reactivación de la Zona de Reserva Campesina del Pato-Balsillas, la actualización del Plan de Desarrollo Sostenible de la ZRC, las obras de Mejoramiento de la vía Neiva - San Vicente del Caguán y 30 familias beneficiadas del desembolso de créditos del Banco Agrario.

### Impactos Tempranos

- La presencia territorial de ART-Redes ha mejorado en Huila y Caquetá la percepción de protección de las personas en zonas de alta incidencia del conflicto armado interno, gracias a la estrategia conjunta de acompañamiento regular, seguimiento, incidencia política y visibilización de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH, articulando con procesos de comunidades de base, defensorías del pueblo, personerías municipales, organizaciones defensoras de DDHH, ONG nacionales e internacionales y SNU (OACNUDH, ACNUR, ONU Mujeres).
- Las comunidades indígenas no solamente conocen más sus derechos, sino que gestionan sus conflictos de una manera no violenta, posibilitando así la reducción de conflictos en el territorio. Actualmente cuentan con acciones para el reconocimiento de los territorios de los resguardos, plasmadas en el Plan de desarrollo. Por ejemplo los procesos de acompañamiento y formación les han permitido gestionar una escuela propia que atiende a 42 niños, niñas y adolescentes y posicionar líderes en los ámbitos políticos locales.
- Los jóvenes y sus organizaciones se han convertido en actores clave en el escenario de construcción de paz local. Actualmente se están abriendo espacios para los jóvenes y se cuentan con proyectos dirigidos a ellos, como el Carnaval por la Paz, que fuera de ser un proceso cultural y artístico, también incluye aspectos como capacitaciones acerca de derechos humanos.
- Las víctimas cuentan con iniciativas para la atención y orientación de sus casos. A nivel departamental el PAVIC representa mejores capacidades locales no solo para orientar víctimas y acompañarlas en sus procesos de restitución de derechos, sino como un espacio de formación continua. A nivel municipal en San Vicente del Caguán se creó una oficina especializada de atención de víctimas y desplazados y en el Plan de Desarrollo de Pitalito se ha definido la creación de una oficina especial para los proyectos de género y mujeres, especialmente de las mujeres víctimas de abusos y violaciones.
- Las comunidades que han sido objeto de la intervención, se han empoderado a través de jornadas de paz, con la creación de su Juntas de Acción de Paz en siete veredas de San Vicente del Caguán, lo cual les ha permitido disminuir tensiones, debido a que los campesinos que sentían "maltratados" por la Administración Pública: ahora perciben que se relacionan de forma diferente con las instituciones, cuentan con las herramientas y conocimientos para hacer propuestas.
- Las estrategias desarrolladas en el marco de las elecciones 2011 demostraron cómo los procesos de fortalecimiento de capacidades conducen a generar liderazgos positivos, lo cual garantiza la inclusión de enfoques poblacionales en las políticas públicas, como en el caso de San Vicente del Caguán, en el cual el alcalde, 4 Ediles y personas que conforman las JAL fueron participantes de los procesos facilitados por ART - Redes.





Fernando Iván López

Miembro del PAVIC  
Departamento de Huila

## “Queremos se un verdadero factor de construcción de paz”

*“El Programa de Acompañamiento de Atención integral a Víctimas del Conflicto Armado Interno (PAVIC) es una puesta en la que venimos trabajando desde hace dos años la sociedad civil, la academia, los miembros del Ministerio Público como la Defensoría Regional del Pueblo y la Personería de Neiva y un cúmulo de organizaciones sociales de la región defensoras de derechos humanos, organizaciones de víctimas, las agencias del Sistema de Naciones Unidas como el PNUD, ACNUR, ONU Mujeres y también la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas.*

*Esta apuesta pretende articular los esfuerzos de trabajo que ya se venían haciendo con víctimas en una sola apuesta que permita mejorar el impacto a partir de racionalizar los esfuerzos, los recursos y las posibilidades que cada uno de estos actores del PAVIC venimos haciendo.*

*El programa se ha articulado alrededor de 5 ejes que buscan acciones de acompañamiento jurídico, psicosocial y técnico a las víctimas, poder desarrollar acciones de incidencia ante las autoridades para el tema de protección, identificar los vacíos en la protección y la atención, de tal manera que la política pública refleje estos vacíos y pueda generar procesos de protección.*

*También buscamos, a través de la investigación, lograr una información veraz, objetiva y oportuna para las autoridades y las víctimas de tal manera que se pueda definir la política pública con mayor precisión atendiendo la realidad del contexto y para que las víctimas puedan contar con planes de acuerdo con la exigibilidad de sus derechos.*

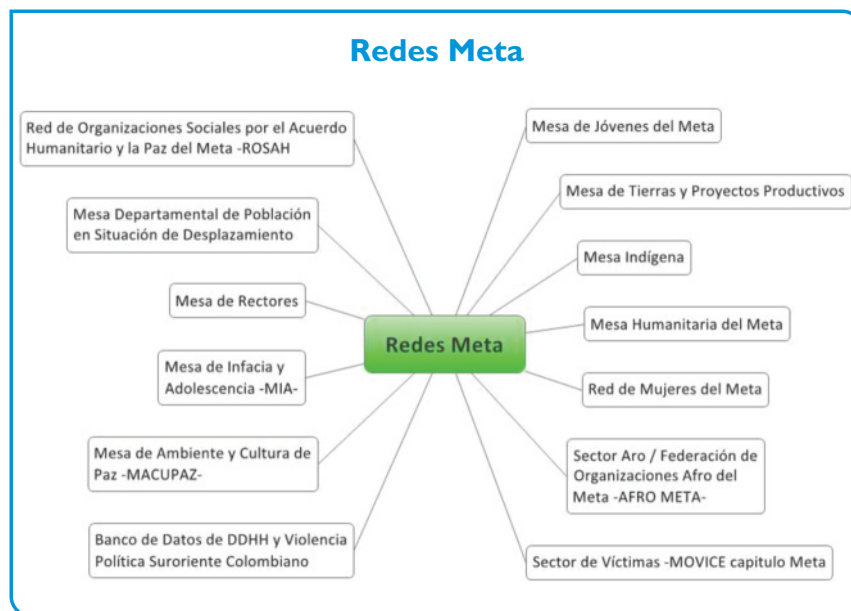
*En términos generales en el PAVIC venimos dando los primeros pasos entre la fase de concertación, en la que nos tardamos dos años, y ahora trabajamos en la fase de implementación de tal manera que toda esa buena voluntad de articulación se traduzca en la práctica y podamos a mediano plazo, ser un verdadero factor de construcción de paz en el departamento y que afiance caminos de diálogo y de concertación nacional”.*



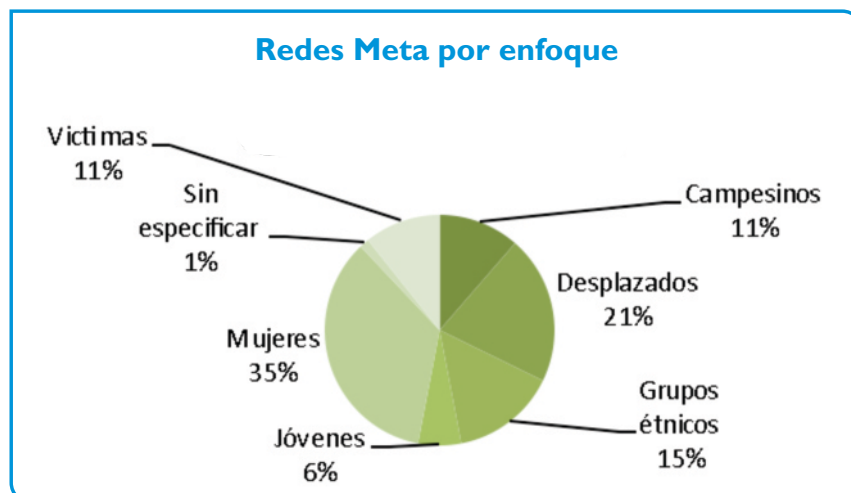
# Meta

El departamento del Meta se ubica en un punto particular de la geografía colombiana donde confluyen la cordillera oriental y la llanura. Adicional a su tradicional vocación ganadera, cuenta con grandes reservas petroleras e hídricas, lo cual aunado a su posición geopolítica ha sido determinantes en su grado de conflictividad así como sus altos niveles de marginalidad y pobreza, la presencia de grupos armados fuera de la ley, el narcotráfico y los cultivos de que son su combustible del conflicto y han abonado la complejidad de los escenarios departamental y nacional y los múltiples conflictos políticos, sociales y económicos, históricamente no resueltos.

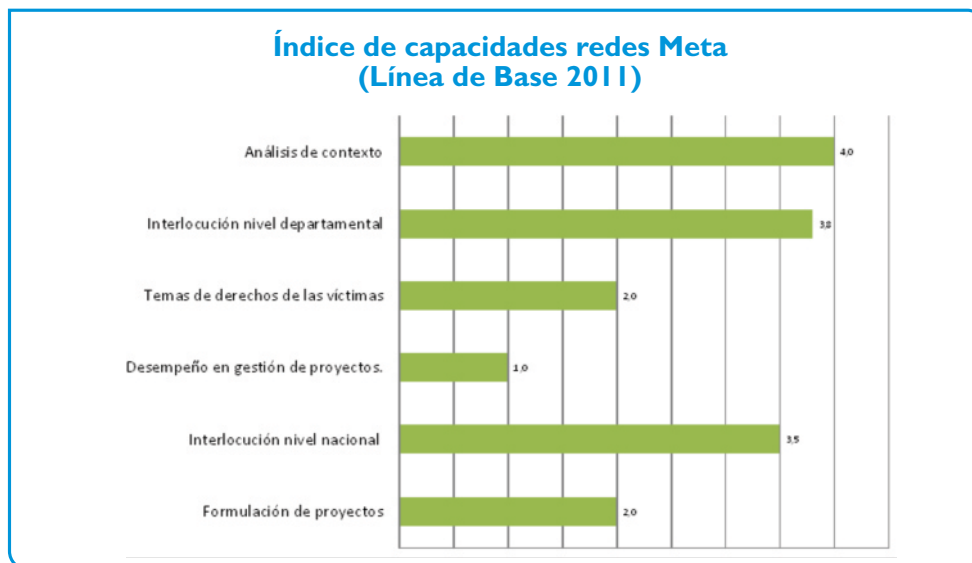
ART-Redes inició intervenciones desde el año 2004, como apoyo al laboratorio de paz de la UE. Ha articulado 13 redes de Organizaciones de la sociedad civil instituciones:



Estas redes se enfocan principalmente en temas de mujeres y equidad de género, población desplazada y temas étnicos, principalmente indígenas.



Según la Línea de Base 2010, las redes de Meta cuentan con un nivel relativamente alto de capacidades en análisis de contexto, y medio, en interlocución con instituciones del nivel nacional y departamental. Por otra parte sus debilidades se centran en la formulación de desempeño en proyectos socioeconómicos y temas de derechos de las víctimas. Así mismo, las redes caracterizadas mencionaron que uno de los principales factores que obstaculizaban su trabajo de construcción de paz fue la ausencia de seguridad y la presión que ejercen los grupos armados ilegales, así como la falta de espacios de incidencia en políticas públicas. Se resalta también el alto índice de confrontación entre las organizaciones de la sociedad civil, y las instituciones del Estado. En 2010, se calculó dicho índice para Meta en un 6, valor que fue el más alto para las regiones ART-Redes.



### Acciones transformadoras

De acuerdo a la lógica de intervención se desarrollaron en el departamento, las siguientes estrategias con el objetivo de transformar la situación evidenciada en el estudio de Línea de Base y en relación al contexto:

#### a) Fortalecimiento de capacidades locales de paz

- En el marco de la reestructuración institucional que prevé la Ley de Víctimas, desarrollar capacidades institucionales (reestructuración institucional) con Gobernación, el Comité Regional de Atención a Víctimas (CRAV), organizaciones de sociedad civil, en articulación con el FJT.
- Mejorar las capacidades de las organizaciones sociales y las instituciones para formular políticas y estrategias de reducción de la violencia basada en género en el departamento.
- Posibilitar la implementación de proyectos socio productivo para población desplazada (en articulación con ACNUR).

#### b) Fomento de conocimiento útil para la acción

- Facilitar y dar asistencia técnica a las víctimas para que construyan su memoria histórica y cuenten con espacios institucionales para exigir sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

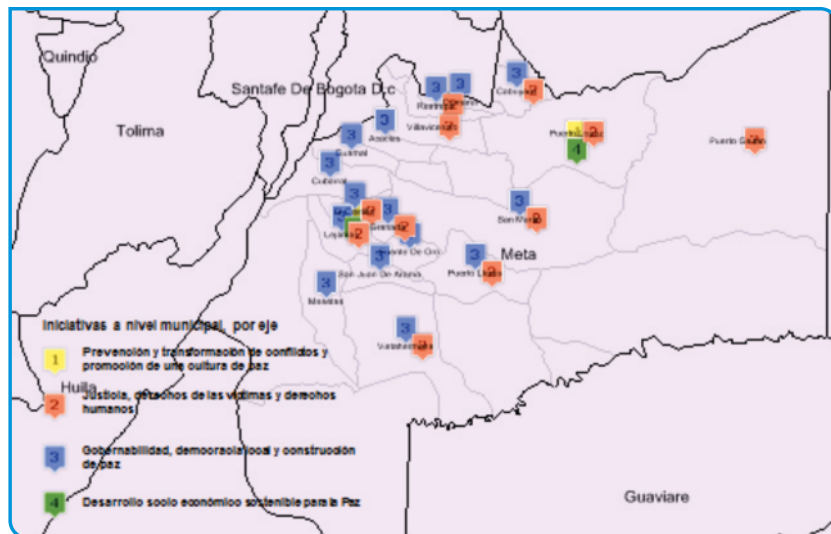
#### c) Consolidación de alianzas

- Desarrollar las capacidades de las redes u organizaciones que dinamizan la formulación y seguimiento de políticas públicas en temas de VBG, mitigación de conflictos, construcción de paz (Alianza para la Política Pública de Género, Alianza indígena, Alianza por la Democracia, DEL y el Comité regional de atención a víctimas).

#### d) Incidir en políticas públicas

- Facilitar los espacios y la participación de poblaciones tradicionalmente excluidas de los procesos electorales, con el fin de cualificar el voto e incluir en programas de gobierno y planes de desarrollo, temas de construcción de paz a nivel departamental y municipal.

En el desarrollo de estas estrategias, se alcanzaron los siguientes resultados, de acuerdo a cada eje del Programa:



## 1. Prevención y transformación de conflictos y promoción de una cultura de paz

- Al interior de la Mesa Humanitaria del Meta, 10 redes de la sociedad civil articulan al menos 50 organizaciones (cerca de 1.000 personas) y han aumentado su interlocución con autoridades mediante la construcción de una agenda propia, constituyéndose en un actor legítimo de la sociedad civil. Han posicionado en su trabajo organizativo y como líderes y lideresas en torno a temas de equidad de género para las mujeres del Meta y política pública indígena del Meta – (en aprobación) y para incluir la Prevención del reclutamiento de NNA en el plan de desarrollo departamental. Activar el Comité de Comunidades étnicas como una iniciativa vinculada a la Gobernación. Así mismo, ha logrado articular en los municipios del alto y bajo Ariari, el movimiento social, con la Defensoría, personerías y ACNUR.
- El gobierno departamental y el de Villavicencio han incluido en sus planes de trabajo y en los proyectos de planes de desarrollo la promoción de los espacios de construcción de paz y de diálogo directo con las comunidades indígenas, afro y las mujeres, mediante la creación de tres secretarías u oficinas de asuntos diferenciados.
- A nivel del trabajo con las personerías se hizo una caracterización de la población indígena en Villavicencio. Con este documento, se activó el Comité de Comunidades Étnicas y ahora esto es una iniciativa vinculada a la Gobernación.

## 2. Justicia, derechos de las víctimas y derechos humanos

- Las víctimas del departamento del Meta cuentan con un Comité Regional de Atención a Víctimas (CRAV), que se ha constituido en un espacio de interlocución entre las víctimas, sus organizaciones y las instituciones con competencia en garantizar sus derechos. Este se ha consolidado en un espacio de carácter tripartito, con la presencia de 6 instituciones públicas, 9 personerías, agencias del SNU y organizaciones sociales, el cual ha facilitado la interlocución de las víctimas con las autoridades y se ha iniciado un proceso de reconocimiento de los derechos de las víctimas, permitiendo una mejor comprensión y aplicación de la Ley de Víctimas.
- A partir de éste espacio, se han identificado y entregaron los restos óseos de 160 víctimas de desaparición forzada a sus familiares, en coordinación y bajo los parámetros del protocolo de entrega de restos óseos de la Fiscalía General de la Nación (FGN), apoyado por el FJT. Así mismo por esta vía se ha desarrollado la capacidad de la Fiscalía para reducir el efecto traumático que implica la entrega de los restos.
- Más de 1.483 casos de víctimas del conflicto armado, de todos los municipios, han reconstruido su memoria histórica en contrapeso a las versiones de los postulados en justicia y paz, en el marco alianzas con la Defensoría del Pueblo (Narrativas visibles), Banco de datos de violaciones a los DDHH del suroriente colombiano y galerías municipales de la memoria, impulsadas por diferentes organizaciones. Esta estrategia les ha permitido a 300 víctimas a su vez recibir atención psicosocial y jurídica por parte de la Defensoría para etapas procesales de justicia y paz y a los fiscales de justicia y paz, contar con una sistematización de los casos como elementos para etapas procesales.

- Se ha reconocido la existencia de brechas de género en materia de la efectividad de los derechos de las víctimas, lo cual implica un trabajo personal alrededor del reconocimiento de los crímenes de género y el trabajo en torno a la garantía de VJR y la interiorización del enfoque por parte de las víctimas. Este avance se ha logrado gracias a la formación de más de 150 funcionarios públicos (Personerías, Alcaldías, Gobernación, Fiscalías, Procuradurías, etc.) temas de VJR y Prevención de violaciones a DDHH, el desarrollo de políticas públicas departamentales y en cuatro municipios (Villavicencio, Puerto Lleras, Vista Hermosa, Granada) la inclusión de las instituciones públicas departamentales y al menos 4 municipales apropian e incluyen en sus políticas temas que buscan complementar las políticas nacionales en relación a la garantía efectiva a la VJR, la creación de las Secretarías departamentales de género y de víctimas, derechos humanos y paz, lo cual evidencia que la institucionalidad pública departamental ha asumido y posicionado el trabajo de posicionamiento de la política respecto a la eliminación de todas las formas de violencias contra las mujeres y la promoción de iniciativas para garantizar la existencia de una efectiva equidad.

### **3. Gobernabilidad, democracia local y construcción de paz**

- Se desarrollo una estrategia electoral (en coordinación con el área de gobernabilidad del PNUD), que contribuyó a que en 18 municipios se firmaron igual número de pactos de los candidatos y candidatas, en el marco de la Alianza para la democracia, el desarrollo, la construcción de paz en el territorio. Esta alianza está conformada por organizaciones sociales, gremios y medios de comunicación, apoyado por la empresa privada.
- Por medio de esta estrategia, más de 5.000 ciudadanos y ciudadanas dieron a conocer a los candidatos y candidatas de 20 municipios del Meta sus prioridades locales en el marco de 18 foros municipales, un debate de carácter municipal y 2 conversatorios individuales.
- Producto de los espacios de diálogo entre organizaciones sociales y candidatos y candidatas, el programa de gobierno departamental y 5 programas de gobierno municipales que incorporan temas de políticas públicas de construcción de paz, DDHH, ODM, Víctimas, y Planes de ordenamiento territorial.

### **4. Desarrollo socio económico sostenible para la Paz**

- 80 funcionarios y funcionarias de Consejos Territoriales de Planeación, mejoraron sus capacidades para elaborar Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y Estrategias con Enfoque Territorial (EOT), mediante la formación en temas de desarrollo con enfoque territorial y de construcción de paz.
- En el marco del apoyo a la red de mujeres, 59 familias de 12 municipios incursionan en mercados campesinos con sus productos, generando incremento en los niveles de ingreso, eliminando intermediarios y mejorando la rentabilidad de los productos. Estos mercados se realizan en Villavicencio, producto de una alianza (Cámara de Comercio de Villavicencio – Unillanos – Red de mujeres del Meta- ANUC – PNUD)
- 49 familias desplazadas en la zona rural y 30 en el casco urbano en el municipio de El Castillo, perciben un mejoramiento de las condiciones de vida, con la implementación de huertas caseras como estrategia de seguridad alimentaria y de fortalecimiento organizativo. Lo anterior se evidencia en el diagnóstico realizado sobre los resultados de esta iniciativa. Inicialmente había un 45% de desnutrición crónica de niñas y niños de 0 a 5 años y las familias percibían la alimentación como su principal prioridad. En un diagnóstico posterior, las familias ya no identifican la alimentación como su principal prioridad. Es importante anotar que en este proyecto más de 307 mujeres son beneficiarias.
- 729 personas desplazadas han sido reubicadas/retornadas en los municipios del El Castillo, (42%) y han mejorado su seguridad alimentaria generando proyectos para sus necesidades básicas a través de ejercicios participativos una iniciativa conjunta PNUD y ACNUR. Estos ejercicios sirven, además, como estrategia de protección y prevención contra nuevos desplazamientos, así como mayor credibilidad en los procesos de cooperación internacional

### **Impactos Tempranos**

- Ante la situación observada con respecto al 2010 en la Línea de Base, se observa un mejoramiento sustantivo en la incidencia de las organizaciones sociales en las políticas públicas departamentales. En el caso de la población indígena, los procesos de concertación y diálogo entre diferentes resguardos, han permitido construir una propuesta de política pública departamental. Por su parte, la población afro, que era invisibilizada del contexto del departamento, ha logrado que se desarrollen consultas previas (Ordenanza 682).

- Las instituciones han adoptado un lenguaje que permite el dialogo con respecto a temáticas del conflicto armado, particularmente, reclutamiento forzado de niños y niñas y ejecuciones extrajudiciales. En esto el papel de ART-Redes ha sido fundamental como mediador en los espacios de diálogo, pero también en el desarrollo de capacidades de las organizaciones sociales para producir propuestas.
- Tanto a nivel de planes de gobierno, como en el programa de gobierno departamental, se ha aumentado la participación de organizaciones, particularmente de afros e indígenas. Y esto se ha visto reflejado en políticas públicas más incluyentes y concertadas, tales como en la Secretaría de Víctimas departamental, el tratamiento de los derechos humanos, el planteamiento del sector productivo y la subregionalización del departamento. Lo anterior es un avance para reconocer la naturaleza política de los y las ciudadanas, lo que conlleva una mayor participación en los procesos políticos, desde la participación activa como candidatos y candidatas, así como en el papel del electorado como sujetos activos en el impulso del debate público, la rendición de cuentas, el voto consciente y la incidencia en la construcción de políticas públicas.
- Actualmente existe un reconocimiento de las organizaciones de víctimas. El papel de la Mesa Humanitaria ha sido fundamental para visibilizar sus propuestas, por ejemplos las de Memoria Histórica, especialmente en la parte rural y la Galería de la Memoria. Así mismo han promovido la exigibilidad de derechos en los planes de gobierno y generando liderazgos positivos de tal manera que 21 mujeres de la red de mujeres y organizaciones que trabajan principalmente en 14 municipios se postularon en cargos de elección popular en los comicios del 2011; de los cuales son electas 7 mujeres es decir 1 de cada 3.
- Así mismo los líderes y lideresas que participan en los procesos de la Mesa Humanitaria han interiorizado los temas de género, enfoques diferenciados, enfoques sensibles al conflicto y construcción de paz, así como la acción no violenta en sus trabajos municipales.
- Las comunidades involucradas en iniciativas de recuperación temprana han mejorado las condiciones de vida de 250 familias (Delicias, Rodeo), pasando de la etapa de asistencia a un avance en los nivel de desarrollo representado en la organización.



Nidia Cortés Parra

Concejala del municipio de Castilla (Meta)  
Red de Mujeres del Meta

## “Debemos creer en nosotras”

*“Hace 15 años inicié mi trabajo social. Estuve vinculada en actividades relacionadas con las escuelas del municipio. En 2007 ingresé a la Red de Mujeres del Meta. En un comienzo fue difícil. Mi esposo no quería que trabajara en esto pero yo insistí, hice parte de la red, el tema me apasionó y me ha hecho crecer como persona.*

*Desde que ingresé he estado apoyando de manera decidida todas las actividades. Un tema muy importante ha sido la capacitación de las mujeres. Esto ha sido vital para el empoderamiento. Y es que si nosotras no tenemos capacitación vamos a seguir sin oportunidades.*

*Luego de las capacitaciones me sentí preparada y aprovechando que el tema del tercer Laboratorio de Paz era de incidencia política, me lancé al Concejo. Con un grupo de mujeres comenzamos a hacer un trabajo político interesante. El tema central de mi propuesta de campaña lo orienté hacia la importancia que tiene la difusión de los derechos de las mujeres.*

*Durante las elecciones conté con el apoyo de la gente del municipio, especialmente con el voto de las mujeres y logré un puesto en el Concejo. Para lograr este cargo fue muy importante la capacitación que recibimos en la Red de Mujeres en materia de políticas públicas.*

*Estoy muy contenta con mi trabajo en el Concejo y sin duda el apoyo de Naciones Unidas ha sido vital en este proceso. La participación política de las mujeres se ha ido abriendo espacio. Las capacitaciones te ayudan a ver que tú puedes.*

*“Por eso les recomiendo a las mujeres creer firmemente en nuestras capacidades, creer en nosotras y tener alta autoestima. Si estamos preparadas vamos a lograrlo.”*

# Oriente Antioqueño



La región de Oriente Antioqueño comprende 23 municipios del departamento de Antioquia, caracterizados por su riqueza en términos medioambientales. Produce 30% de la energía hidroeléctrica del país y cuenta con un alto potencial minero y agroforestal. Estas características le han generado presión por el control del territorio por parte de diferentes actores armados y ha llevado a la población a desplazarse hacia la zona metropolitana, principalmente entre los años 2000 y 2003. Actualmente muchas de estas poblaciones se encuentran en procesos de retorno o reubicación. Por otra parte, el impacto de eventos producidos por minas antipersona es alto comparada con otras regiones.

Aunque ART-Redes inició actividades en el Oriente Antioqueño en 2004, los efectos del conflicto en otras regiones del departamento de Antioquia, como el Bajo Cauca, han demandado por parte de las comunidades, la presencia y protección de Naciones Unidas (Ver capítulo "Priorización territorial y estrategias de salida).

En este contexto, el programa ART-Redes trabaja con 11 redes que agrupan a 115 organizaciones de la sociedad civil, enfocadas principalmente en temas de víctimas y mujeres.

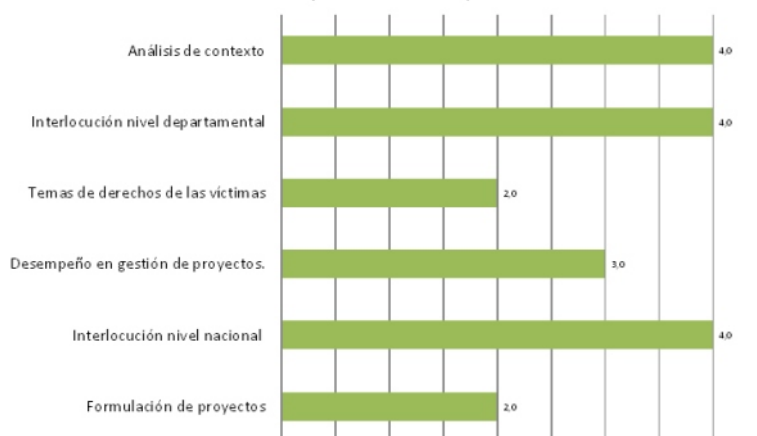


A pesar del porcentaje importante de organizaciones de víctimas, la Línea de Base 2010 determinó que existe un nivel bajo de conocimientos en temas de derechos de las víctimas y en formulación de proyectos. Así mismo, se observan fortalezas en cuanto a la interlocución con instancias públicas nacionales y locales, y en las capacidades para realizar análisis de contexto. La temática en que menos se trabajan las redes de organizaciones era el desarrollo socioeconómico, el cual está ausente en las líneas de acción de más de 40% de las redes.

Con respecto a los espacios de interlocución sobre políticas públicas, se determinó que los temas principales se dirijan hacia el desarrollo socioeconómico, derechos humanos y derechos de las víctimas. Así mismo existía un bajo nivel organizativo de la población juvenil y debilidades en procesos de recuperación de memoria. Las redes también reportaron tensiones entre las organizaciones con las administraciones locales y con la cooperación internacional.



### Índice de capacidades territorios de control (Línea de Base 2010)



#### Acciones transformadoras

Durante el 2011, teniendo en cuenta los resultados de la Línea de Base y la situación de contexto, se desarrollaron las siguientes estrategias, en el marco de la lógica de intervención:

##### a) Fortalecimiento de capacidades locales de paz

- Apoyo a los procesos organizacionales de mujeres, de víctimas y de retorno y reubicación de población desplazada,
- Asistencia técnica a las instituciones locales encargadas de mitigar los efectos de la contaminación por MAP / MUSE.

##### b) Fomento de conocimiento útil para la acción

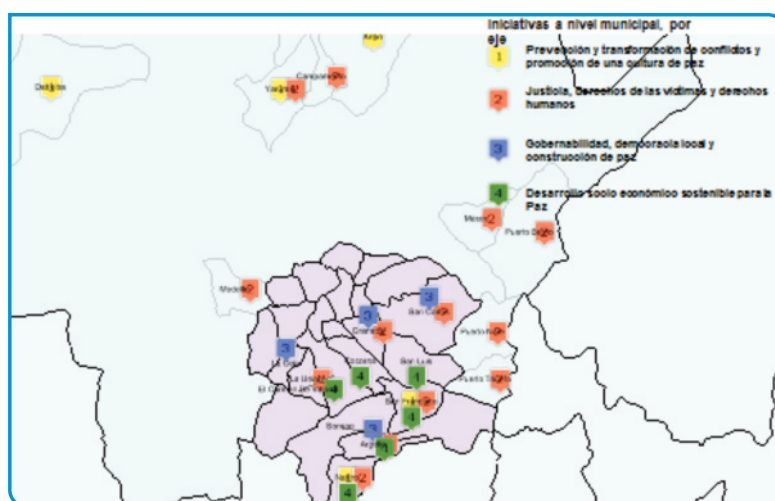
- Apoyo a la elaboración de documentos sobre restitución de derechos de población desplazada en procesos de retorno.

##### c) Consolidación de alianzas

- Articulación y creación de espacios, como el Proceso Estratégico Regional “PER”, y los Proyectos Estratégicos Territoriales “PETs”, la Mesa de Articulación Interinstitucional “MAI” y el proyecto de Desarrollo para la Paz y Reconciliación en el Municipio de San Francisco.

##### d) Incidir en políticas públicas

- Desarrollar espacios de diálogo entre organizaciones e instituciones en temas de desarrollo socioeconómico, derechos de las víctimas y equidad de género, con el fin de incidir en políticas públicas locales.
- Incidir en la formulación de planes y programas de gobierno a nivel regional y departamental, en el marco de la estrategia electoral 2011.



En el desarrollo de estas estrategias y otras actividades complementarias se obtuvieron los siguientes resultados, en cada uno de los ejes del programa:

### **1. Prevención, transformación de conflictos y promoción de una cultura de paz**

- 90 personas víctimas de desplazamiento forzado en proceso de retorno hacia tres veredas del municipio de Nariño (Oriente Antioqueño) han aumentado el uso de mecanismos institucionales para resolver sus conflictos. Esto en gran medida obedece a la construcción participativa de manuales de convivencia.
- En el marco de la Mesa Regional de Derechos Humanos, se discutieron los efectos ambientales, sociales y económicos de la construcción del túnel de Oriente y otros megaproyectos energéticos (Porvenir I y II y 3 solicitudes para la construcción de micro centrales), logrando la revisión de estas obras por parte de las autoridades competentes.
- 18 organizaciones participaron activamente en la construcción del informe “Capacidades locales de paz en el Oriente Antioqueño”. Este informe reconoce las capacidades de las organizaciones para responder al conflicto en la región y la sostenibilidad de tales procesos.
- En Oriente Antioqueño se ha visibilizado el papel de los comunicadores en la promoción de una cultura de paz, a través de 70 comunicadores comunitarios que participaron en la Segunda Muestra Regional de Medios. El cuarto Foro Regional de Comunicación, que trató el tema de Comunicación y Gobernabilidad y el premio Orlando López (Categorías: prensa, radio, televisión, fotografía, comunicación digital, comunicación alternativa, comunicación universitaria).
- Candidatos de cinco municipios de Antioquia, con alta contaminación de MAP/MUSE, incorporaron en sus programas de Gobierno temas de AICMA. En seguimiento a este resultado se han realizado reuniones con los candidatos elegidos en los 5 municipios para incluir el tema de AICMA en los Planes Locales de Desarrollo.

### **2. Justicia, derechos de las víctimas y derechos humanos**

- 7000 víctimas han sido orientadas y han recibido atención psicosocial y psicojurídica en el marco de las jornadas de atención interinstitucionales de las unidades móviles en 10 municipios de Antioquia, iniciativa liderada por la Gobernación de Antioquia. 300 de estas víctimas y otras que fueron asesoradas en diferentes jornadas realizadas desde el 2009, accedieron al derecho de reparación por vía administrativa. Este modelo, implementado inicialmente a nivel regional ha sido replicado en 5 municipios fuera del Oriente Antioqueño en articulación con la Gobernación de Antioquia, Acción Social, MAPP – OEA, ICBF, y organizaciones sociales (AMOR, APROVIACI) entre otros.
- 75 líderes de organizaciones de Antioquia mejoraron sus capacidades en orientación jurídica a víctimas y rutas de acceso a la justicia en la escuela jurídica de formación a víctimas. Estos líderes actualmente se encuentran replicando este proceso de formación a otras organizaciones en sus municipios de influencia.
- Las comunidades de los municipios de Granada, San Francisco, Argelia y La Unión cuentan con espacios de recuperación de la memoria histórica, a través de diferentes iniciativas desarrolladas en asocio con APROVIACI y ASOVIDA y con autoridades locales. Entre estas iniciativas se destacan el Salón de Nunca Más del municipio de Granada, el monumento a las víctimas de San Francisco y la multimedia de la memoria de Argelia.
- Se ha constituido una mesa metropolitana de DDHH en Antioquia, articulando a 30 organizaciones, SNU, e institucionalidad departamental y agencias y fondos del SNU como plataforma para el desarrollo de la declaración conjunta de DDHH y DIH.
- Las instituciones locales y nacionales con competencia en la restitución de derechos de las víctimas cuentan con mejores herramientas para facilitar los procesos de retorno o reubicación de población desplazada, desde un enfoque de derechos, y con insumos para la construcción de una política pública de reparación colectiva, gracias a la elaboración y publicación del estudio de caso “El retorno, entre derechos y garantías” y la agenda de reparación colectiva de San Francisco en Antioquia. Ambas investigaciones fueron realizadas mediante una alianza entre la oficina territorial del PNUD y la Universidad de Antioquia.
- Realización de una ruta de protección a reclamantes de tierras y víctimas que fue apropiada por las instituciones a nivel local (Defensoría, Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación, Policía, Fiscalía, Gobernación de Antioquia), en el marco de la Mesa Departamental de Protección. En este mismo espacio se realiza seguimiento a 10 casos de víctimas amenazadas y se determinaron cuellos de botella en el establecimiento de medidas de protección.

- El Municipio de Medellín replicó la experiencia de la Mesa Interinstitucional de Desaparición Forzada, con asistencia técnica del Programa ART-Redes, acercamiento que se logró gracias al proceso de búsqueda de personas desaparecidas y entrega de restos de NN, desarrollado en diciembre de 2010.

### **3. Gobernabilidad, democracia local y construcción de paz**

- Mediante la implementación de la estrategia electoral, fue posible incluir en los programas de gobiernos de candidatos y candidatas del 80% de los municipios del Oriente Antioqueño temáticas de equidad de género y derechos de las víctimas. Esto fue posible gracias a la realización de un diplomado para candidatos a elección popular en el Oriente Antioqueño (87 mujeres y 196 hombres), la implementación de estrategias comunicacionales (programas radiales, volantes, afiches y camisetas), la realización de agendas temáticas de las mujeres (Asociación de Mujeres Regional “AMOR”), agendas temáticas de las víctimas (Asociación Provincial de víctimas a ciudadanos “APROVIACI”). Es importante anotar que de los 23 candidatos a alcaldías electos, 4 hicieron parte de los procesos de la oficina territorial en el acompañamiento de las personerías municipales en la Asociación de Personeros del Oriente Antioqueño (ASPOA).
- Los candidatos elegidos a corporaciones públicas en el Oriente y Norte de Antioquia cuentan con mejores instrumentos y herramientas metodológicas para la construcción de planes de desarrollo con temáticas priorizadas y relevantes para la región y mecanismos de aceleración para el cumplimiento de los ODM.
- Se apoyó y capacitó, en asocio con la Procuraduría provincial, a 51 vigías (observadores) de la democracia en 13 municipios del Oriente antioqueño. De la misma manera se realizaron dos programas radiales sobre el tema de transparencia electoral y se produjo y difundió un jingle alusivo a la jornada. Esto contribuyó a incrementar una mayor participación de la población juvenil, de las mujeres y de las víctimas en las elecciones del 30 de octubre de 2011.

### **4. Desarrollo socio económico sostenible para la Paz**

- 52 familias desplazadas campesinas en proceso de retorno a sus veredas en el municipio de San Francisco se encuentran desarrollando proyectos productivos, de los cuales 40 son agrícolas y 12 de piscicultura. Estas familias reciben acompañamiento técnico y se les ha brindado capacitación en solución negociada de conflictos y otras temáticas de acuerdo con la caracterización de las familias.
- Los municipios del Oriente Antioqueño cuentan con un diagnóstico sobre su situación con respecto a Objetivos del Milenio en el Oriente Antioqueño, en alianza con el Área de Pobreza del PNUD e ISAGEN. Este diagnóstico servirá para diseñar proyectos que aceleren el alcance de los ODM. Se encuentra en proceso la sistematización y publicación de éste diagnóstico.
- Se ha contribuido en la articulación y sostenibilidad de espacios, como el Proceso Estratégico Regional “PER”, y los Proyectos Estratégicos Territoriales (PET). Dentro de este proceso se resalta la conformación de la Mesa de Articulación Interinstitucional (MAI), espacio que surge como estrategia para afrontar las dificultades observadas en el PER y la poca participación del sector empresarial.
- Formulación e implementación de los proyectos: “Cacao y fortalecimiento organizativo – Unión Europea” en los municipios de San Luis, San Francisco, Cocorná, El Carmen de Viboral, Sonsón y Nariño); soluciones duradera e integración local - ACNUR (Bello) y Desarrollo para la Paz y Reconciliación en San Francisco. Estos proyectos beneficiarán a 517 familias en condición de desplazamiento o retorno y buscan mejorar sus condiciones de ingresos, hábitat el fortalecimiento organizativo, de manera articulada a la oferta institucional local.

### **Impactos tempranos**

- Con el proceso de retorno de la población desplazada víctima del conflicto armado en Nariño (Antioquia), se presentaron varios hechos de violencia entre las personas que se quedaron resistiendo al conflicto armado con las que llegaron de otras regiones con costumbres y culturas diferentes a las de la región. Mediante la construcción colectiva del pacto de convivencia, la comunidad percibe que se han reducido las amenazas, “boleteo” y se han acercando a los mecanismos e instancias legales para resolver sus diferencias. Este pacto ha logrado que las comunidades dejen de considerarse “mendigas” de la ayuda, para ser ciudadanos propositivos motores de cambio. Adicionalmente, las propuestas de paz realizadas por la comunidad han logrado que éstas sean representativas de la comunidad y tengan una mayor proyección y sean escuchadas por las entidades públicas.

- En los 23 planes municipales de desarrollo, que comenzaron a construirse a finales de 2011 e inicios de 2012, se puede apreciar la inclusión de temas que antes no se encontraban, como víctimas, ODM, infancia y promoción de liderazgos, especialmente el de las mujeres. Los escenarios facilitados han permitido incluir las propuestas de las organizaciones sociales.
- El conocimiento de la ruta de derechos por parte de las víctimas ha mejorado, así como su acceso a la justicia y a mecanismos de reparación. El papel de las unidades móviles ha sido fundamental en este proceso, permitiendo acercar a las instituciones a la gente en zonas apartadas y fomentando una atención centrada en víctimas.
- La interlocución entre la comunidad y las instituciones ha mejorado notablemente. Anteriormente en las comunidades existía temor por hablar, participar y exponer sus propuestas, debido a que se estigmatizaban. Actualmente, la comunidad propone con tranquilidad y los funcionarios de las entidades públicas han mejorado su trato hacia las organizaciones. Por otra parte las entidades públicas han podido entrar a sitios de difícil acceso o a comunidades en donde no era posible el diálogo. Las comunidades se sienten empoderadas en el tema y pueden hablar ante las instituciones y manifestar sus inquietudes y demandas de forma clara y digna ante los funcionarios públicos.
- El apoyo a procesos de retorno ha sido fundamental para que 52 familias mejoren sus condiciones de seguridad alimentaria y accedan a tierras de cultivo, así como asistencia técnica. Más allá de la reconstrucción de las condiciones de vida individuales, el tejido social de la organización campesina se ha ido restableciendo, participando cada vez más de manera activa en diálogos con las instituciones locales.



Gloria Elsy Ramírez

De la organización Asovida (Oriente Antioqueño)  
Salón del Nunca Más

## “Nosotros no existíamos como ciudadanas”

*“Nariño es un pueblito de 9000 habitantes que basan su economía en la agricultura y los negocios. En el año 2000 había una población de 20.000 habitantes y por la violencia quedamos 4000. Las zonas rurales quedaron desoladas y en la zona urbana 73% de la gente salió. La gente se cansó de vivir en ese contexto de violencia y comenzó a unirse para generar espacios de reflexión y de resistencia. Decidimos entonces organizarnos y empoderarnos. Nosotros no existíamos ni como ciudadanos, éramos como muertos vivientes.*

*Comenzamos a desarrollar diversos programas apoyados por organizaciones como el PNUD y la cooperación sueca a trabajar en el tema de los derechos. Lo primero que hicimos fue aclarar qué queríamos al estar organizados. Luego nos dimos cuenta que podíamos ser escuchados pero que debíamos proponer, tener proyectos y un plan de acción para generar recursos y, además, que era necesario presentar informes. Yo no tenía ni la menor idea de lo que era una política pública.*

*Con todo este aprendizaje creamos el Salón del Nunca Más como proyecto de memoria. Con este proyecto buscamos un proceso de dignidad, de no repetición y de sensibilización para que la comunidad pueda entender que la guerra no es el camino.*

*El salón de la memoria ha cambiado la mentalidad de la gente. Ahora pensamos en restablecer los derechos, estamos dignificando con el Salón a nuestros seres queridos, estamos limpiando sus nombres de las sindicaciones y tenemos unas bitácoras en donde la familia tiene un contacto con ese ser querido. Allí escriben la historia de esa persona. El Salón de la Memoria me ha sensibilizado especialmente para entender que no es solo mi dolor, que hay otras personas que han vivido cosas similares. Es un dolor colectivo, es un dolor de todos y entender eso ayuda a elaborar el duelo.”*

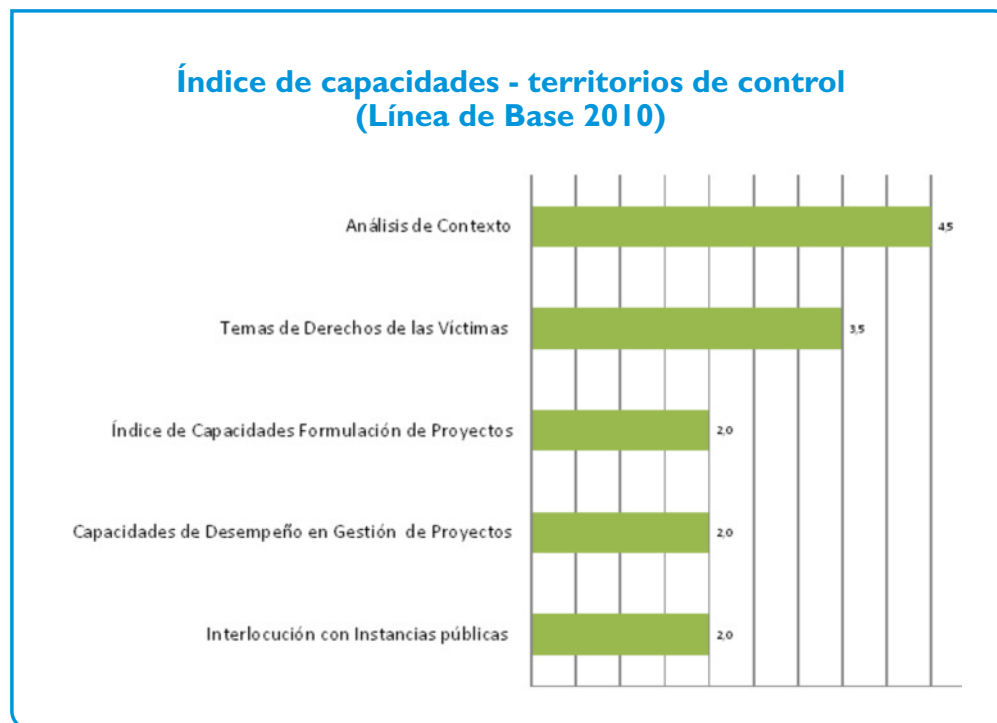
# Cesar



El Programa ART-Redes inició, en 2008, actividades en Cesar tras realizar un análisis de conflictividad y de condiciones de voluntad política en la región, para establecer iniciativas de construcción de paz. Las condiciones de desigualdad al interior del territorio, más de 150.000 víctimas del conflicto, un alto porcentaje de población indígena y afro viviendo con altos niveles de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), bajos niveles de gobernabilidad, así como el incremento y expansión de la minería y cultivos a gran escala, son algunos de los temas de análisis para entender el conflicto en la región.

Debido a que el ejercicio de línea de base se realizó cuando no se había establecido aún una oficina territorial, el estudio no recolectó información directamente de las redes de la región, sin embargo, fue incluido dentro de los territorios de control – comparación (Norte de Santander, Caquetá y Cesar) por lo cual, debido a la homogeneidad de estos, es posible generalizar los resultados.

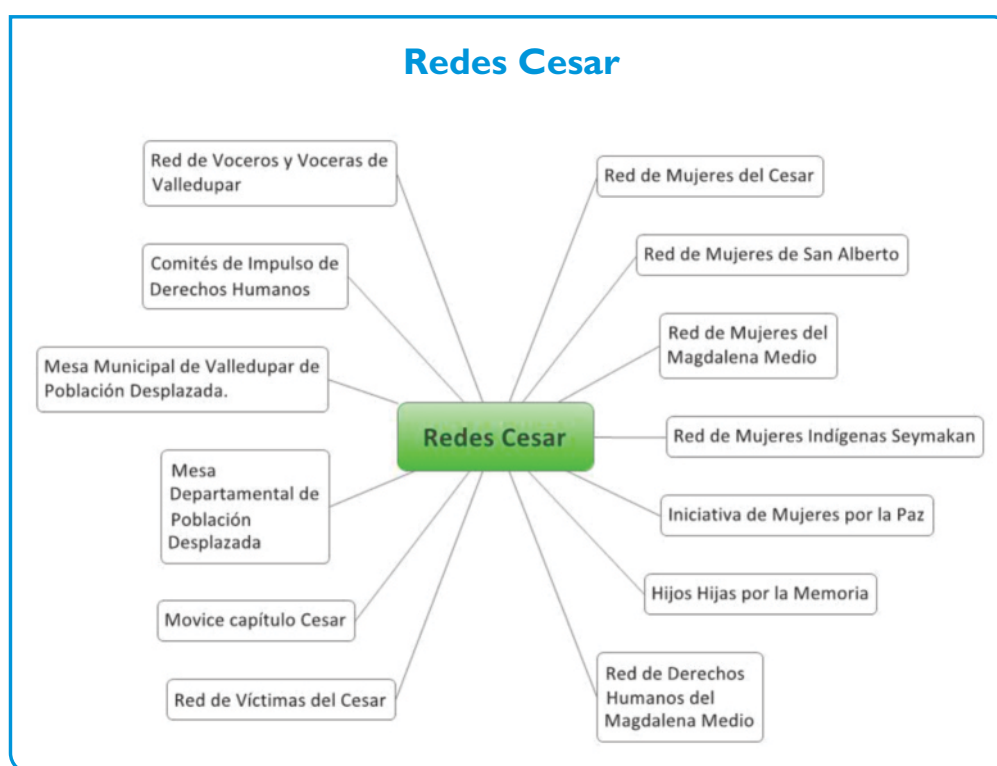
En general, al igual que en otros territorios, las capacidades más desarrolladas son las de análisis de contexto, sin embargo, las capacidades en temas de derechos de las víctimas es más alta que en los otros territorios de intervención. Por otra parte, se identificó la necesidad de realizar mayores esfuerzos para desarrollar las capacidades en formulación y gestión de proyectos socioeconómicos. Así mismo se resaltó la necesidad de cualificar los planes de vida para las comunidades indígenas.



Por otra parte, se identificó que las organizaciones de la sociedad civil tienen un mayor relacionamiento con las organizaciones internacionales, junto con la iglesia y la academia.



En este proceso se identifica que ART-Redes trabaja actualmente en el territorio con 13 redes que agrupan a 230 organizaciones sociales, principalmente organizaciones de víctimas.



#### Acciones transformadoras

Las estrategias de intervención en el Cesar se han centrado en contribuir al restablecimiento del ejercicio político democrático de los ciudadanos y las ciudadanas en su dimensión más amplia, como principio y valor de una sociedad y una ciudadanía que construye un Estado Social de Derecho basado en el bien común. La estrategia territorial considera que así como las condiciones de violencia, riesgo, vulnerabilidad y pobreza asociadas al conflicto armado han afectado a la población, también la convierten en agente determinante de cambio de dichas condiciones. En este orden de ideas, se han desarrollado las siguientes estrategias de acuerdo a la lógica de intervención:

### a) Fortalecimiento de capacidades locales de paz

- Desarrollo de capacidades de las organizaciones de víctimas, con énfasis en formación para su participación en la Ley 1448/2011 de Víctimas y Restitución de Tierras.
- Implementación de una estrategia de equidad de género, desarrollada en tres componentes: fortalecimiento de la articulación de las organizaciones de mujeres, contribución a los procesos de justicia transicional de las mujeres víctimas de la prevención y eliminación de las violencias contra las mujeres en Valledupar e incidencia en políticas públicas de género.
- Espacios de diálogo entorno a la problemática de tierras, particularmente en la Mesa Departamental de Tierras, Mesa de Retornos, Zonas de Reserva Campesina y política pública en materia de desplazamiento, promoviendo la participación de las organizaciones sociales y comunitarias en espacios de diálogo, concertación y toma de decisiones con las instituciones.

### b) Fomento de conocimiento útil para la acción

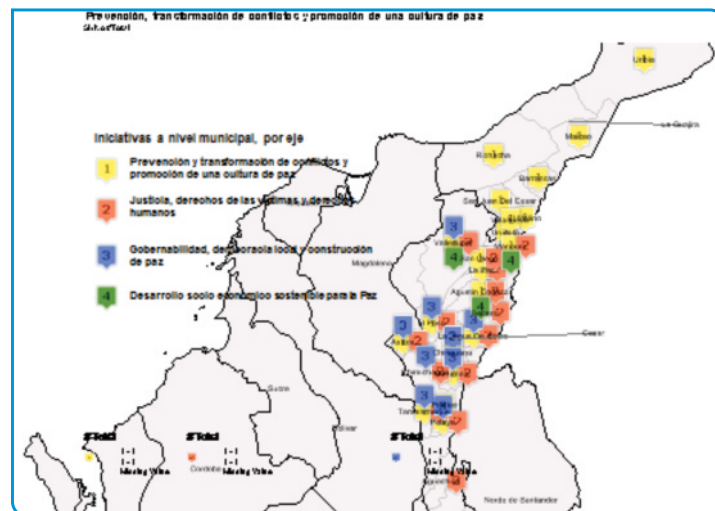
- Iniciar un proceso de gestión del conocimiento sobre las condiciones y dinámicas territoriales de desarrollo y paz del departamento, así como en la construcción de instrumentos y herramientas que contribuyen al fortalecimiento de las organizaciones sociales e instituciones territoriales.

### c) Consolidación de alianzas

- Establecimiento de alianzas con la Gobernación del departamento, con organizaciones sociales y con agencias del SNU orientadas a la construcción participativa del Plan de Desarrollo Departamental, la creación del Programa de Atención a Víctimas y Reintegración Comunitaria PAVIREC de la Gobernación del Cesar y a la constitución del Programa de Desarrollo y Paz del Cesar.
- Consolidada la alianza por la Gobernabilidad Democrática en el Cesar, en la cual participan la Misión de Observación Electoral (MOE), el Ministerio del Interior y de Justicia, la Cámara de Comercio de Valledupar, Pastoral Social, la Red de Universidades del Cesar, el Programa de Desarrollo y Paz del Cesar, los medios de comunicación, SNAU en Cesar, PNUD y ONU Mujeres, entre otros.

### d) Incidir en políticas públicas

- Implementación de una estrategia electoral para promover la inclusión de las poblaciones y temas tradicionalmente excluidos de los planes de desarrollo tanto de los municipios como del departamento del Cesar. En el marco de esta estrategia se desarrollaron acciones dirigidas a mejorar las capacidades de las organizaciones de víctimas y organizaciones de mujeres para incidir en los planes de desarrollo.
- Promover y fortalecer la participación de las organizaciones sociales y comunitarias en el marco de la Declaración Conjunta de DDHH, a través de la articulación y construcción de agendas de trabajo a nivel departamental y regional con el propósito de incrementar los niveles de gestión, interlocución e incidencia de las organizaciones sociales en el Caribe Colombiano.





En desarrollo de estas estrategias se alcanzaron los siguientes resultados, de acuerdo a cada eje del Programa:

## **1. Prevención, transformación de conflictos y promoción de una cultura de paz**

- Miembros de los pueblos Indígena Wayuú y Arhuaco y comunidades afrodescendientes del Cesar reconocen sus derechos y participan en los diálogos del proyecto sobre consulta previa y consentimiento previo libre e informado, como proceso preparatorio para la construcción de herramientas de concertación propias para la discusión del nuevo proyecto de ley sobre consulta previa, en alianza con OACNUDH. Participan 290 personas entre líderes y autoridades tradicionales.
- Se han facilitado espacios que han permitido la documentación de casos de despojo de tierras y de los predios del departamento. Dos casos emblemáticos son llevados directamente por el INCODER nacional y el Ministerio de Agricultura.
- Asistencia técnica al Comité Técnico Departamental de Tierras, la Mesa de Retornos del Comité Departamental de Atención Integral a la Población Desplazada CDAIPD<sup>2</sup>, la Gobernación del Cesar y proceso organizativos rurales campesinas afros y organización de población desplazada institucionalizan y hacen operativos cinco mesas temáticas de trabajo: a) Tierras; b) Retornos; c) Protección y Prevención; d) Restablecimiento socioeconómico y e) Atención Humanitaria. Estas mesas se reúnen periódicamente por convocatoria de la Gobernación del Cesar.
- Se ha brindado asistencia técnica a la mesa de Retornos del departamento, para focalizar las zonas de intervención del Plan de Retorno para 2011, a través de la formulación del Plan de Acción y el diagnóstico para el retorno de la población del Corregimiento de Casacará, municipio de Agustín Codazzi. Estos insumos han servido para la formulación del proyectos de soluciones transitorias.

## **2. Justicia, derechos de las víctimas y derechos humanos**

- En el marco de la alianza PNUD y ONU Mujeres y como resultado de los procesos de formación en VBG se conformó la Red de Voceras y Voceros de Valledupar, en la cual participan 6 instituciones gubernamentales, 5 instituciones académicas y 15 organizaciones sociales del municipio. Esta red ha promovido procesos de difusión y sensibilización de VBG a través de la Campaña ¡Paralá ya! Nada Justifica la Violencia contra las Mujeres. Se ha convertido en una campaña permanente apropiada por la Red.
- La comunidad del corregimiento de Minas de Iracal que habita en la zona y la que se encuentra en situación de desplazamiento en el municipio de Valledupar, a través del proceso de reconstrucción de la memoria histórica, cuenta con una documento multimedia en la cual identifica y sistematiza las dinámicas, los actores del conflicto y su impacto en la vida de la comunidad. Así mismo se le ha hecho seguimiento a 5 casos emblemáticos sobre violencia sexual basada en género. En esta línea, también se ha apoyado a la Asociación Departamental de Mujeres Cabeza de Hogar (ASOMUGAR), en la construcción de su memoria histórica como organización, a través de la sistematización escrita y visual.
- 727 mujeres y 17 hombres del departamento participantes del proceso de mujeres y equidad de género fueron sensibilizados y formados en temas de Ley de Víctimas, justicia de Género, las Resoluciones 1325, 1820, 1888 y 1960 del Consejo de Seguridad, ciclo de formación en violencias contra las mujeres y comunicación con visión de género, Sentencia T-025 de 2008 y el Auto 092 de 2008. En este proceso de formación se ha promovido la réplica de conocimientos y su difusión a través de piezas comunicacionales y la conmemoración del Mes por la no Violencia contra la Mujeres. Así mismo, se creó la Mesa Interinstitucional de Equidad de Género en el municipio de Valledupar por medio del Decreto 000633 del 25 de Noviembre de 2011.
- Con participación 700 mujeres se elaboró la “Agenda política de las mujeres del Cesar”, documento producto de la planeación participativa de las mujeres del departamento del Cesar, en especial mujeres de organizaciones municipales. Fue el resultado de jornadas subregionales y municipales y ha servido de documento base para la incidencia en los planes de desarrollo del departamento y de diferentes municipios.

<sup>2</sup>Secretarías de Gobierno y Agricultura de La Gobernación del Cesar, Programa de Protección de Tierras del Ministerio de Agricultura, ACNUR y PNUD.

- Creación de la Red de Voceras y Voceros de Valledupar por una vida libre de violencias contra las mujeres con un plan de trabajo enfocado en la difusión y sensibilización en temas de VBG en el municipio de Valledupar.
- 116 organizaciones de víctimas población desplazada, de derechos humanos, de mujeres, jóvenes, indígenas, afros, campesinas e iglesias, a partir de procesos de formación-acción, reconocen sus derechos como víctimas y los mecanismos de participación establecidos en el marco de Ley 1448/2011 y avanzan en la construcción de instrumentos que permiten la caracterización de la población víctimas e identificar, desde un enfoque territorial-poblacional-sectorial, los delitos causados por el conflicto armado.
- El Caribe colombiano cuenta con un instrumento que permite medir la capacidad institucional para la implementación de la Ley 1448/2011 facilitando la gestión y fortalecimiento institucional en la asistencia y atención integral a las víctimas del conflicto armado. Este instrumento se ha aplicado en una encuesta piloto (ver capítulo Montes de María) en Sincelejo, y próximamente se aplicará en el Cesar.
- Los municipios del Cesar cuentan con cinco acuerdos municipales y cuatro proyectos de acuerdo municipal presentados para la creación del Comité Municipal de Justicia Transicional que facilitaron y se convirtieron en referentes para las administraciones municipales en el proceso de implementación de la Ley 1448/2011 a nivel municipal.
- 76 organizaciones sociales que trabajan temas de DDHH, DIH y construcción de paz en la región Caribe hacen parte de los Comités de Impulso Departamental y construyen la "Ruta Caribe" como propuesta articulada de la región en el proceso participativo de construcción participativa de la Política Pública en materia de DDHH y DIH en el marco de la Declaración Conjunta de DDHH, incrementando su capacidad de incidencia e interlocución con las entidades de Estado y gobierno, otras organizaciones y la cooperación internacional en los Comités Tripartitos departamentales.

### 3. Gobernabilidad, democracia local y construcción de paz

- Como parte de la Estrategia Electoral, organizaciones de mujeres de tres 3 municipios realizaron foros y firmaron Pactos de Gobernabilidad con candidatos y candidatas a las alcaldías para incluir la temas de la Agenda de las Mujeres, entre ellos, dar cumplimiento a la Ley de Cuotas en sus administraciones, formular una Política Públicas de Equidad de Género, crear la Secretaría de Mujeres y Equidad de Género, tener presupuestos sensibles al género, fortalecer la participación de las mujeres en instancias de participación, así como a los procesos organizativos y de formación de las mujeres en sus planes de desarrollo. Esto se logro gracias al proceso de fortalecimiento organizativo a 39 organizaciones de mujeres.
- Esta estrategia promovió, en un primer momento el diálogo y debate en los temas de víctimas, mujeres y equidad de género, étnias (indígenas y afrodescendientes), y tierras; para ello se realizaron encuentros con las y los candidata/os a Alcaldía y Gobernación, debates, foros y firma de pactos de gobernabilidad con amplia participación de la sociedad civil. Se brindó asistencia técnica, en especial a la Alcaldía de Valledupar y a la Gobernación del Cesar en las mesas de trabajo temáticas y poblacionales para la construcción de los planes de desarrollo. Como resultado se obtuvieron 10 Pactos de gobernabilidad firmados por candidatos y candidatas a alcaldías y 4 firmados por los candidatos a la Gobernación del Cesar en temas de mujeres y equidad de género, afros, víctimas y tierras con el compromiso de incluirse estos temas en su plan de desarrollo municipal y departamental. En el caso de Valledupar se creó la Mesa Interinsitucional de Equidad de Género.
- Como resultado preliminar de esta estrategia, en el borrador del plan de desarrollo departamental se incluyeron temas de:
  - **Género:** a) Crear la Alta Consejería y/o programa líder para la equidad de género, b) Sensibilizar a mujeres y hombres en el tema de los derechos reconocidos en la ley o en tratados y convenios internacionales nacionales y departamentales, debidamente ratificados, c) Capacitar a los servidores públicos para que garanticen la adecuada prevención, protección y atención a las mujeres víctimas de la violencia, d). Fortalecer iniciativas productivas para mujeres cabeza de familia, rural, indígena y afrocesarense, d) Apoyar la creación y puesta en marcha de la Mesa de erradicación de las violencias de género y la ruta de atención en violencias contra las mujeres, e) Promover y realizar campañas de sensibilización "una vida libre de violencias".
  - **Víctimas:** a) Formular e implementar el 100% del Plan de Prevención, Protección, Atención, Asistencia y Reparación integral a víctimas del conflicto armado con enfoque diferencial, articulado con la implementación del Plan Integral Único (PIU) municipal y en coordinación del Comité de Justicia Transicional durante el cuatrienio, b) Poner en marcha un Centro Regional de Atención Integral a Víctimas del conflicto armado, de manera conjunta con la Gobernación del Cesar y las demás entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas durante el cuatrienio, c) Implementar una estrategia de fortalecimiento de la participación efectiva de las víctimas durante el cuatrienio.

- **Afros:** a) Apoyar y fortalecer las organizaciones locales de población afro del Cesar; b) Propender por la conformación la Mesa Departamental de Comunidades Afro y c) Concertar y ejecutar un plan de acción, basado en la política pública.
- Se ha contribuido al desarrollo de las capacidades de la administración departamental del gobierno en temas de tierras, víctimas y género, generando herramientas y conocimiento útil como el Sistema de Información Humanitaria -que monitorea temas de desastre natural (SICDE)- de protección y prevención en DDHH y DIH (SIDH), sistematizando el PAVIREC y apoyando la elaboración de los estudios preparatorios del Programa de Desarrollo y Paz del Cesar, aportando en su fortalecimiento y proceso de territorialización.

#### 4. Desarrollo socio económico sostenible para la Paz

- 106 mujeres integrantes de 4 organizaciones de los municipios de Valledupar, Manaure y Agustín Codazzi se benefician de la convocatoria mujer rural realizada por el INCODER, Ministerio de Agricultura y la OIM y mejoran sus ingresos a través de la asistencia técnica brindada en el proceso de elaboración e implementación del proyecto, el cual se implementa desde enero de 2012.
- En el marco de la Mesa de Tierras y la implementación de su agenda estratégica, se estableció un convenio con el INCODER para el desarrollo de los estudios tendientes a la sustracción de un área de la Zona de Reserva Forestal de Ley 2ª del 59 con fines de formalización de la propiedad rural de las familias campesinas retornadas. Este convenio se firmó en diciembre de 2011 y se cuenta con una agenda preliminar de fortalecimiento entre las organizaciones campesinas de la zona con la Mesa Campesina de Montes de María donde de adelanta también, un proceso de conformación de ZRC.
- El Comité Técnico Departamental de Tierras diseñó e implementa una la Agenda Estratégica de la Mesa Departamental de Tierras, en torno a seis acciones prioritarias, alternativas para la formalización de la propiedad rural en el marco de las Zonas de Reserva Forestal, Asistencia técnica a organizaciones sociales para su participación en las convocatoria del INCODER, formalización de 791 predios en zona de reserva forestal, análisis sobre las posibilidades y estrategias para la titulación de los territorios colectivos de comunidades negras en el departamento y aplicación de la ruta colectiva de protección de tierras en las veredas San Antonio y San Isidro en La Jagua de Ibirico.

#### Impactos tempranos

- Hace cinco años el contexto socio-político en el Cesar no permitía la participación ciudadana. Hoy en día, existe un proceso de diálogo con las instituciones. Adicionalmente, las organizaciones cuentan con mayores conocimientos, una mayor articulación entre ellas y realizan propuestas a las diferentes administraciones aprovechando los espacios de interlocución generados en el departamento. Estos espacios han permitido un diálogo directo con las entidades del Estado y actualmente se cuenta con instrumentos que permiten hacer incidencia en políticas públicas y la visibilización de las situaciones de las comunidades.
- Las mujeres del departamento del Cesar cuentan con una agenda propia, con la cual realizaron actividades de incidencia política con los candidatos y posteriormente en los espacios de participación ciudadana para la construcción de los diferentes planes de desarrollo. Se evidenció un gran avance en términos de interlocución entre las instituciones y las organizaciones sociales.
- Las víctimas, sus organizaciones y las organizaciones acompañantes de procesos de víctimas cuentan hoy con mejores instrumentos para reconstruir su memoria histórica y para hacer más visibles sus hechos de victimización. En la misma línea, las instituciones locales que atienden y orientan. las víctimas cuentan con herramientas y espacios centrados en víctimas para garantizarles una adecuada orientación y atención, como el PAVIREC y la Mesa de Tierras. Es importante anotar que la entrada en vigencia de la Ley 1448 implica continuar con este proceso, profundizando en los contenidos e implicaciones de la nueva legislación tanto para titulares como para de como garantes de derechos.
- Las comunidades indígenas han podido visibilizar su problemáticas y organizarse de una mejor forma para realizar incidencia en políticas públicas. Y los gobiernos departamentales y municipales las tienen en cuenta en los espacios de interlocución. Esto ha sido posible por la inclusión de comunidades de La Guajira, que pertenecen a las mismas etnias que las del Cesar y quienes tienen una concepción de división territorial diferente a la institucional.
- Los campesinos involucrados en procesos de desarrollo socioeconómico han mejorado sus capacidades para apalancar sus iniciativas y acceder a la oferta institucional o de cooperación internacional (ej. Asociación de Organizaciones de Comunidades Negras del Cesar “Ku – Suto” es apoyada ahora por el Fondo Sueco para la Sociedad Civil (FOS) para implementar el Proyecto de “Fortalecimiento Organizativo de 21 Consejos Comunitarios Afrocesarenses). Además cuentan con agenda construida de forma participativa en el tema de DDHH y DIH.



José Luis Peralta

Representante legal de la organización Alianzas por la Vida.  
Corregimiento de Minas de Iracal. Departamento del Cesar.

## “Hoy hablamos con libertad”

*“Desde hace algún tiempo hemos venido trabajando para buscar el desarrollo de nuestra comunidad tan golpeada, Minas de Hiracal. Nosotros sufrimos en varios aspectos. A comienzos de los 80 con la llegada de la guerrilla a la región. Luego con la llegada de las Autodefensas, las cosas se agravaron y comenzaron a suceder toda serie de barbaridades que afectaron a la población. Hubo desaparecidos, desplazados, ataques armados y de violaciones en contra de la comunidad.*

*El PNUD llegó y apoyó a todos los habitantes no solo de aquí del corregimiento sino de muchas zonas del departamento del Cesar. Nosotros hemos tenido más confianza y más acercamiento con los organismos internacionales que con el gobierno municipal y departamental.*

*Antes de 2008, estábamos totalmente desorientados. No teníamos una entidad confiable a quién acercarnos y comentar lo que nos sucedía.*

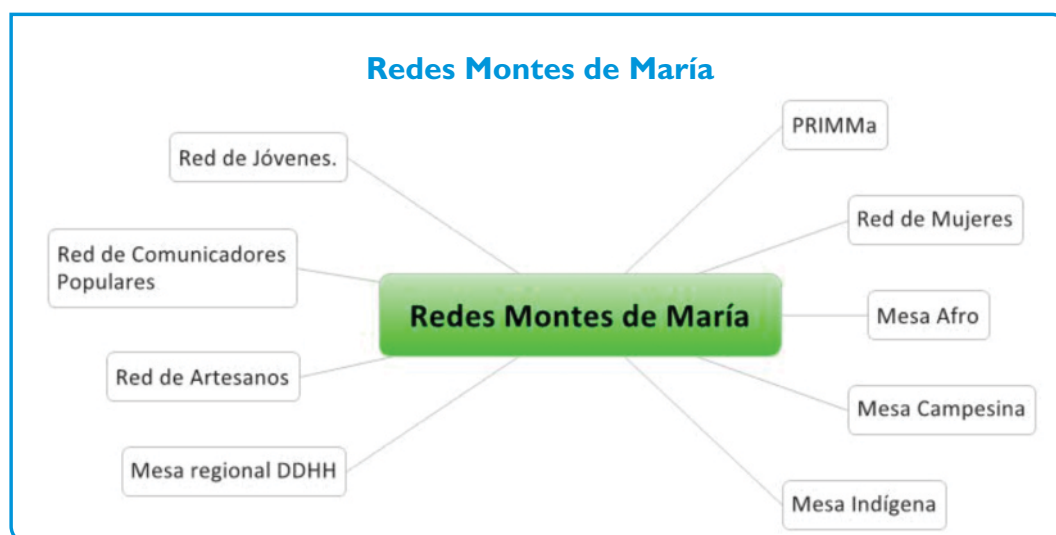
*Fue gracias a Naciones Unidas y al Programa ART-Redes del PNUD y la cooperación internacional que fuimos generando espacios de confianza. Hoy, por ejemplo, yo hablo con libertad, expongo las problemáticas sin ningún temor. Hoy nos estamos organizando y podemos hablar con libertad y reclamar nuestros derechos y saber ante quién y cómo canalizamos nuestros reclamos. Organizarnos ha sido muy importante porque nos ha permitido empoderarnos y sentir que no estamos solos, que somos una red de apoyo que trabaja para toda la comunidad”.*



# Montes de María

La región Montes de María comprende a 15 municipios, 8 de Sucre y 7 de Bolívar. Esta región ha sido históricamente reconocida por la fertilidad de los suelos y su vocación ganadera, sin embargo, su ubicación estratégica cercana a la costa norte y la presencia histórica de grupos armados ilegales, paralelamente a una institucionalidad débil por sonados casos de corrupción y vínculos con paramilitares, han debilitado tanto a las instituciones locales en su deber de garantizar los derechos de los ciudadanos, así como las capacidades de las organizaciones sociales para exigirlos.

El programa ART- Redes, trabaja desde el 2004 con 9 redes de organizaciones sociales que agrupan a 397 organizaciones, principalmente de campesinos.

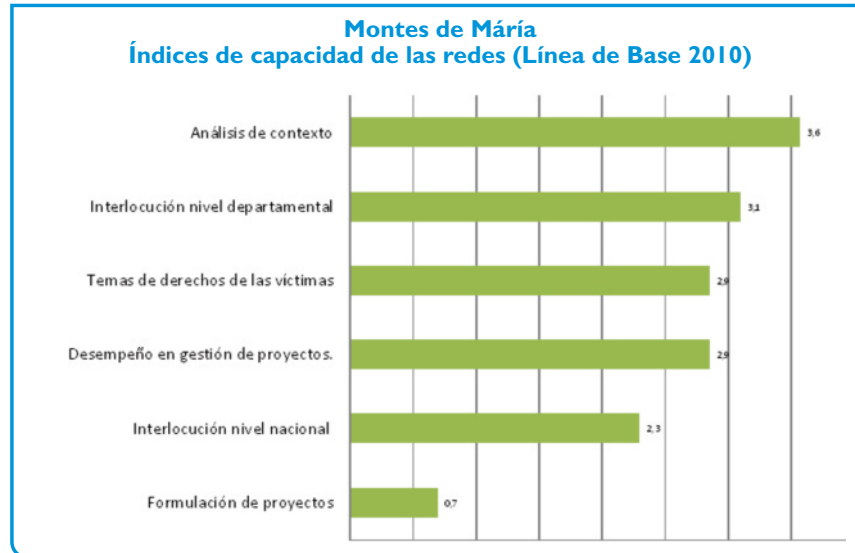


En esta región se ubican las redes de mayor tamaño con respecto a los otros territorios, con un promedio de 78 organizaciones por red. Así mismo, las organizaciones se relacionan con 3 redes diferentes y se resalta la baja participación de instituciones en las redes.



De acuerdo con la caracterización realizada por la Línea de Base (2010) se encontró que la mayor fortaleza de las redes es en cuanto al análisis de contexto y en menor medida su interlocución con instancias públicas nacionales. Por otra parte se identificaron mayores debilidades en temas de derechos de las víctimas y desempeño en formulación de proyectos (ver gráfico). Con respecto a la identificación de prioridades por parte de las instituciones, el estudio encontró que en el año 2010, la institucionalidad manejaba su propia lista de prioridades sin consultar a la comunidad y solo contaba con una perspectiva de inversión de recursos, sin visión de derechos, sin espacios formales de participación de la sociedad civil y las autoridades públicas indígenas y los afro.

### Acciones transformadoras



Por parte de las organizaciones sociales se identificó que la temática menos abordada es el desarrollo socioeconómico, que está ausente en las líneas de acción de más del 40% de las redes, Debilidad en procesos de recuperación de memoria y Desconocimiento del tema de acción sin daño. Así mismo se encontró una bajo nivel organizativo de los Jóvenes.

Durante el 2011, teniendo en cuenta los resultados de la Línea de Base y la situación de contexto, se desarrollaron principalmente tres estrategias, en el marco del ciclo de implementación:

#### a) Fortalecimiento de capacidades locales de paz

- Se implementó una estrategia para fortalecer la respuesta institucional y las capacidades de las organizaciones ante la violencia basada en género, para avanzar en la sensibilización, prevención y atención de estos casos. La estrategia contó con la participación de los procesos de mujeres en los Montes de María, un grupo de masculinidades, CAVIF, UNFPA, ONU Mujeres e instituciones locales.
- Se apoyó a la Unidad Integral de Atención a Víctimas (CECAR), con la participación del PRIMMA,, ACNUR, MPDL, MAPP-OEA, CNRR.

#### b) Fomento de conocimiento útil para la acción

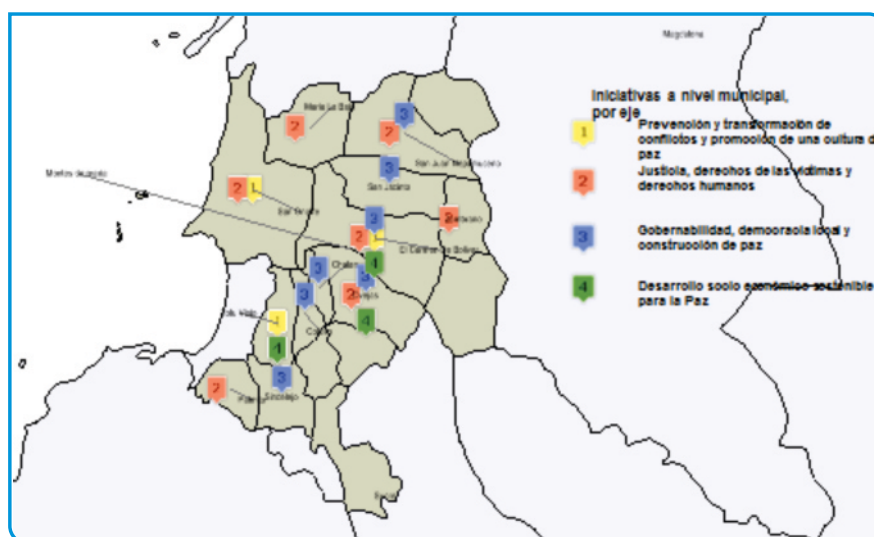
- Fortalecimiento técnico a las organizaciones de víctimas del Proceso de Reconstrucción Integral de los Montes de María (PRIMMA), para que lideren su procesos de sistematización.

#### c) Consolidación de alianzas

- Espacios de diálogo con grupos étnicos para garantizar su empoderamiento y su incidencia en políticas, particularmente organizaciones afrocolombianas.
- Fortalecimiento de capacidades de la Fundación Montes de María como proyecto territorial que asuma de manera directa los procesos implementados durante la tercera fase de ART-Redes.

#### d) Incidir en políticas públicas

- Implementación de la Estrategia Caribe de Justicia Transicional, Derechos Humanos y Desarrollo (en articulación con Cesar), con miras a contribuir a la formulación de la política pública de DDHH.



En desarrollo de estas estrategias y otras actividades complementarias, se obtuvieron los siguientes resultados, en cada uno de los ejes del programa:

### **1. Prevención, transformación de conflictos y promoción de una cultura de paz**

- 30 jóvenes líderes mejoraron sus capacidades para impulsar una cultura de paz y la prevención del reclutamiento en comunidades afectadas por el conflicto en Montes de María, mediante su participación en diplomado de Acción sin Daño y Construcción de Paz, realizado conjuntamente con la Universidad Nacional. Este diplomado sirvió de base para que los jóvenes de la Biblioteca María Mulata y de Paz Caribe formularan un proyecto con enfoque de acción sin daño en las comunidades de Higuerón y Macaján en Montes de María, el cual será objeto de seguimiento durante el 2012.
- 20 Funcionarios de EHL mejoraron sus capacidades en temas de sensibilidad a los conflictos (mainstreaming) a través de procesos de capacitación y el desarrollo de herramientas, específicamente en técnicas de acción sin daño y recuperación temprana en la comunidad de Loma Central, en el marco del proyecto de recuperación temprana del IASC Sucre-Bolívar.
- Las organizaciones sociales afrocolombianas a través de 10 mesas municipales, desarrollaron un Etnoplan, el cual constituye un instrumento para crear políticas públicas incluyentes con enfoque diferencial. Esta herramienta fue un elemento clave para gestionar la inclusión de temas de interés para las comunidades afro en los planes de desarrollo municipales. A su vez, este ejercicio contribuyó a que se reconociera e identificara a la población afrocolombiana en los Montes de María.
- La red de mujeres de Montes de María cuenta con una agenda política para la incidencia en política pública de equidad de género en 15 municipios, fortaleciendo así a la sociedad civil en el ámbito local para incidir en políticas públicas de paz, desarrollo y reconciliación, en el marco de la alianza PNUD-ONU Mujeres.

### **2. Justicia, derechos de las víctimas y derechos humanos**

- 1964 víctimas han obtenido servicios individuales y colectivos de asesoría jurídica y atención psicosocial y remitidos a la Defensoría de Pueblo y al sistema público de salud, en el marco de la Unidad Integral de Atención a Víctimas la cual fue creada por iniciativa de la Universidad CECAR con el propósito de apoyar a las organizaciones de la sociedad civil y a la academia para promover el acceso a los procesos judiciales. Esta iniciativa que surge de la sociedad civil, específicamente de la academia, ha sido reconocida como una buena práctica y un modelo a seguir por parte de la institucionalidad.
- 30 participantes de 5 redes de víctimas que hacen parte del PRIMMA, diseñaron e implementaron una estrategia regional de reconstrucción de la memoria histórica contribuyendo a la reconstrucción de la verdad y la memoria en los Montes de María. Este proceso permitió construir el “Museo Itinerante de la memoria”, realizando cinco conmemoraciones comunitarias en Mampuján, las Brisas, las Palmas, Macayepo y Chengue.
- 140 organizaciones de Montes de María y Cesar participaron en tres encuentros de la región Caribe sobre derechos humanos, los cuales contribuyeron a la firma de la Declaración Conjunta, un documento que reúne las primeras recomendaciones por parte de la sociedad civil del Caribe frente a este tema y la ruta de DDHH del Caribe

- Las instituciones del Estado a nivel local cuentan con mejores herramientas para que adopten mecanismos que faciliten el acceso de las víctimas a la justicia, mediante la aplicación de instrumentos de evaluación de las capacidades institucionales locales en temas de justicia transicional, el cual tuvo un pilotaje en Sincelejo, estableciendo un diagnóstico que permitió identificar las debilidades en términos de capacidades institucionales, se priorizaron áreas de trabajo y se formularon acciones encaminadas a fortalecer y abordar los puntos débiles.
- Construida una ruta de prevención, atención y acceso a la justicia de las mujeres y niñas en situaciones de VBG para cinco municipios (Carmen de Bolívar, San Antonio de Palmito, San Jacinto, San Onofre, María la Baja) con participación de organizaciones y funcionario públicos. en el marco del alianza UNFPA y ONU Mujeres. Adicionalmente este proceso permitió sensibilizar a 51 funcionarios públicos y 50 líderes campesinos y afrocolombianas de los municipios sobre estos temas.
- Como parte de la estrategia de fortalecimiento institucional en temas de VBG, con el apoyo de PNUD, UNFPA y ONU Mujeres se brindó asistencia técnica para el diseño e implementación de las rutas para la atención, prevención y acceso a la justicia en materia de VBG y en VSBG en los municipios de Carmen de Bolívar, San Antonio de Palmito, San Onofre, María la Baja y San Jacinto. Se realizaron cinco jornadas de promoción de ruta de atención en los mismos municipios.
- El Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar de Sucre (CAVIF) cuenta con mayores capacidades para establecer sus necesidades y deficiencias en las rutas de atención a la VBG, con el diseño y formulación de un Plan de Fortalecimiento.
- Conformadas 4 mesas locales de DDHH con la participación de personerías y administraciones municipales, las cuales tuvieron como resultado la formulación de dos planes de acción en DDHH en Ovejas y Zambrano. Estos planes de acción tendrán implementación en 2012.
- En medio de un clima de desconfianza generalizada defensores y defensoras de DDHH e institucionalidad pública, han dialogado y debatido sobre el ejercicio de la defensa de los DDHH con la idea de conformar la mesa de garantías de Sucre. Mediante los buenos oficios del PNUD ha logrado tres acercamientos con las partes y cuatro encuentros aparte con las organizaciones sociales. El trabajo de acercamiento debe continuar con el fin de lograr la concertación de los actores en el nivel local y trabajar para garantizar que los defensores de DDHH puedan ejercer su labor libremente.

### 3. Gobernabilidad, democracia local y construcción de paz

- 50 líderes de la Mesa regional Campesina mejoraron sus capacidades en temas de participación política con miras al proceso electoral 2011. Gradualmente se ha fortalecido y renovado su liderazgo mediante la formación de sus líderes a través de capacitaciones donde se abordaron temas de liderazgo político, restitución de tierras y zona de reserva campesina, entre otros.
- Para promover el desarrollo de procesos participativos de identificación y priorización de agendas temáticas de desarrollo, paz y reconciliación a incluir en programas de gobierno, el PNUD en Montes de María a través de los buenos oficios y la firma de acuerdos de voluntades, logró incorporar en los programas de gobierno de los candidatos y candidatas a gobiernos territoriales de los 15 municipios estas agendas. Territorialmente se hizo una cartilla sobre lo que en particular en la región deberían contener los Planes de Gobierno. Se llevaron a cabo reuniones con candidatos a la alcaldía de Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Ovejas, Coloso y Chalan, Sincelejo y cinco reuniones con candidatos a la Gobernación. Al final se logró suscribir acuerdos con los candidatos a la Alcaldía de Sincelejo y para la Gobernación de Sucre para incluir temas de desarrollo económico, víctimas, derechos en salud sexual y reproductiva, Gestión Integral del Riesgo (GIR) y Objetivos del Milenio (ODM).
- Se promovieron 15 espacios de análisis y debate en el proceso electoral 2010-2011 sobre la transparencia y legalidad de los procesos democráticos locales, con la participación de 10 organizaciones de la sociedad civil del territorio.
- 40 líderes campesinos participaron en espacios de diálogo entre la institucionalidad y organizaciones sociales sobre la seguridad y la protección a líderes para el ejercicio de la ciudadanía, mejorando sus conocimientos para la elaboración e implementación de mecanismos de protección, mapas de riesgo y blindaje social.
- Consolidada una Agenda Democrática Montemariana para la recuperación, apropiación y ejercicio de la soberanía popular en asocio con los Programas regionales de Desarrollo y Paz, la cual tiene como propósito promover la ciudadanía activa para la transformación sociopolítica y facilitar el relacionamiento entre lo privado, lo público y lo social. Esta agenda contribuyó a impulsar en los 15 municipios una estrategia de trabajo



con candidatas y candidatos a ocupar las alcaldías para incorporar temas de desarrollo y paz en sus programas de Gobierno.

#### 4. Desarrollo socioeconómico sostenible para la paz

- Fue implementado, en un 50%, el proyecto de recuperación temprana del Inter-Agency Standing Committee (IASC) en la comunidad de Loma Central: el PNUD acompañó técnicamente la implementación del proyecto, se adecuaron dormitorios en la institución educativa de Loma Central, se realizaron diversas jornadas de atención en VBG y se formuló e implementó por solicitud de la comunidad, un proyecto piloto de Unidades Modulares para producir aguacates, producto que hace parte de la vocación productiva de la región. Dicho piloto contó con la participación de 10 familias y en 2012 se extenderá a 30 familias. Así pues se han promovido proyectos productivos, que sean auto sostenibles, replicables y demostrativos de modelos económicos alternativos viables.
- 50 integrantes de las Mesas Campesinas regionales e inter-veredales de los 15 municipios de Montes de María han sido formados y capacitados en el acceso a convocatorias y en procesos de legalización de tierras, como paso previo a los diálogos con entidades públicas para socializar conocimiento sobre el acceso, uso, control y restitución de tierras. En este proceso se han realizado 3 talleres para brindar asistencia técnica en temas de Zonas de Reserva Campesina, Subsidio integral de tierras, Consejos Municipales de Desarrollo Rural, capítulo de restitución de tierras despojadas y formalización de la propiedad rural. Como principal resultado de estos espacios se elaboraron documentos sobre la posición de la Mesa Campesina frente al capítulo de restitución de tierras despojadas del proyecto de Ley de Víctimas y sobre desarrollo rural y Zona de Reserva Campesina que será presentado posteriormente al Ministerio de agricultura. Así mismo se formularon 10 Planes de Acción Municipales y las Mesas participaron en diálogos con entidades públicas para ampliar sus capacidades técnicas en materia de restitución, el acceso, uso y control de tierras y otros activos productivos. Junto con la Mesa Campesina se realizó un diagnóstico y se reactivaron 3 Consejos Municipales de Desarrollo Rural en los municipios de Los Palmitos, Tolú Viejo y Zambrano.
- Se realizó una Mesa Agraria Regional para la presentación del documento estratégico en tierras y desarrollo rural de la mesa campesina y la presentación de los casos emblemáticos para futuro seguimiento de las instituciones públicas. De igual manera se socializó en este encuentro la revista de Hechos de Paz sobre la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras.
- El INDH 2011 se socializó con 350 personas y se promovió un proceso de profundización con 40 personas, con el objetivo de vincular a actores relevantes en una agenda sobre la problemática de tierras y desarrollo rural. En 2012 está programada continuidad con la mesa campesina.

#### Impactos Tempranos

- Los procesos participativos con candidatos y organizaciones no se habían realizado antes en la región, por lo cual es una ventana importante para realizar seguimiento y control social a los planes de desarrollo finales.
- Las organizaciones e instituciones locales (Particularmente DP, CNRR, FGN) perciben que han mejorado el acceso de las víctimas y su participación a la justicia y en esto juega un papel importante las actividades de diagnóstico y apoyo a iniciativas institucionales de verdad, justicia y reparación. Las organizaciones de víctimas organizadas en el PRIMMA, están progresivamente asumiendo su proceso de empoderamiento, fortalecimiento de capacidades organizativas e incidencia en políticas públicas.
- Algunos procesos están suficientemente consolidados, como la Mesa campesina, la cual es un resultado del esfuerzo de las organizaciones campesinas, en el cual ha sido fundamental el aporte de ART-Redes.
- Mediante la producción y difusión de información sobre la violencia de género en el marco de los conflictos se realizaron diversas actividades de sensibilización a hombres y niños sobre la VBG y su eliminación. En este sentido se puede afirmar que gradualmente ha cambiado la concepción de que la VBG es un tema que involucra y concierne casi que exclusivamente a las mujeres. Muestra de esto es que por iniciativas de las organizaciones y con apoyo de ART-Redes se conformó un grupo de masculinidades de los Montes de María. Uno de los resultados más visibles es el diseño de una ruta de prevención contra las violencias de género que el mismo grupo de hombres elaboró.



Osmir Peñalosa Jaraba

Rector de la Institución Educativa La Alta Montaña  
Vereda Loma Central (Montes de María)

## “Era un escuelita perdida en la montaña”

*“La presencia del PNUD en esta región ha sido una gran apoyo. Fue la primera organización de cooperación internacional que entró a esta zona y desde entonces se consolidó un proceso de fortalecimiento en el tema de derechos de las organizaciones de base. Adicional a eso, viendo las múltiples necesidades y carencias acompañó al sector educativo.*

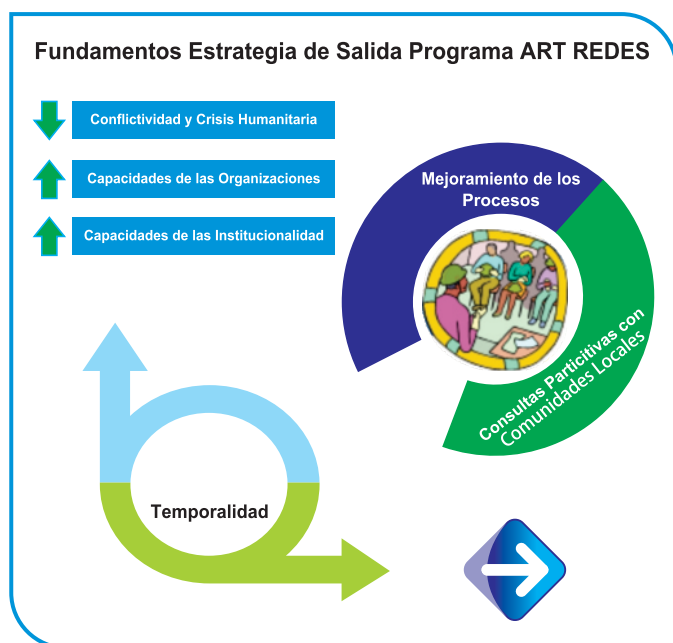
*En 2008, cuando el PNUD entró, nosotros teníamos una escuelita perdida en la montaña. Pero la gestión y el apoyo nos permitió mejorar la infraestructura. Desde entonces comenzamos a crecer como institución educativa. Pasamos de ofrecer educación básica primaria a secundaria. En 2011 graduamos la primera promoción de bachilleres en el corazón de Montes de María.*

*Inicialmente estaban las Juntas de Acción Local (JAL) que lideraban estos procesos, pero a raíz del conflicto armado los líderes fueron asesinados o tuvieron que emigrar para otras partes por seguridad. El PNUD, además de apoyar para mejorar la infraestructura escolar, comenzó a fortalecer la parte organizativa de las comunidades. Gracias a eso, los campesinos han formado dos organizaciones de base que les ha permitido acercarse a la institucionalidad para reclamar sus derechos y para iniciar proyectos productivos. Además, el movimiento comunal se ha reintegrado nuevamente y el año pasado se reunieron con la Gobernación de Bolívar donde el PNUD sirvió de facilitador en el diálogo. Se ven muchos avances en el proceso participativo.*

*El más reciente proyecto en el que trabajamos es un proyecto productivo. La violencia ha generado un agudo problema económico. Se murieron cercad de 6000 hectareas de cultivo de aguacate. A raíz de ese hecho se presentó una propuesta para recuperar 100 hectareas de este cultivo y así mejorar los ingresos de los habitantes. El proyecto está en proceso y la intención es que se pueda implementar en corto tiempo para ayudar a mitigar el problema de ingresos en la zona.”*

## 5. Priorización territorial y estrategias de salida

El esquema de salida y de entrada a territorios del programa ART-Redes se ha definido teniendo en cuenta varios criterios: la evolución del contexto regional referido a las conflictividades y la situación humanitaria; las capacidades territoriales de los actores sociales e institucionales; las características de la gobernabilidad democrática locales y otras consideraciones propias de las dinámicas nacionales e internacionales, como se mencionó en el Informe de seguimiento, octubre de 2011. Este proceso se puede resumir con la siguiente gráfica:



Como insumo para la definición de este esquema se tuvieron en cuenta las intervenciones que se han realizado en las regiones ART-Redes y dos procesos efectuados en los últimos meses. Por un lado, un ejercicio de focalización territorial en el que se hizo un panorama general de las regiones observando indicadores en los tres ejes de PNUD en Colombia: Desarrollo, Paz y Reconciliación; Pobreza y Desarrollo sostenible y Gobernabilidad Democrática. Por otro lado, análisis realizados en los territorios y por expertos externos –la académica Claudia López con los directores de la corporación Nuevo Arco Iris y de la MOE– sobre las potencialidades y posibles riesgos en la gobernabilidad democrática luego de los resultados de las elecciones locales de octubre de 2011. En los dos procesos se elaboraron sendos documentos que incluyen una serie de herramientas, entre ellos mapas, que guían sobre la priorización territorial y que están a disposición de los interesados.

En cada territorio, en particular, se ha pensando en un esquema de salida o entrada gradual, progresivo y con intervenciones puntuales en un proceso a darse en dos años, en algunos territorios, y en otros, en un proceso aún más largo según dinámicas territoriales y nacionales.

Como una buena práctica de gestión, ART-Redes realiza permanentemente un proceso analítico que busca monitorear la pertinencia de las acciones en los territorios, así como establecer la relevancia de realizar intervenciones en territorios conexos a los actuales. Este proceso analítico ha redundado en la definición de una serie de actividades a desarrollarse durante el periodo 2012 – 2013, que buscan reducir o finalizar las intervenciones en cuanto se considere que se ha alcanzado un nivel suficiente de sostenibilidad. Este análisis se detalla en el anexo 1, y con base en el mismo, se ha definido:

- Oriente Antioqueño/Bajo Cauca y otros Iniciar una estrategia de salida progresiva de algunos municipios del Oriente Antioqueño –en un proceso de dos años– ante la reducción del conflicto armado y el fortalecimiento de las capacidades locales, pero manteniendo intervenciones focalizadas para consolidar procesos municipales y atender especiales coyunturas: implementación de ley de víctimas, impacto de megaproyectos, retorno de población e impulso al desarrollo rural de la región, sostenibilidad en los procesos de reubicación, retorno y restitución de tierras, lo cual incluye la legalización de predios, generación de ingresos, inclusión social o sea, participación e incidencia en los procesos participativos a nivel veredal-municipal. Asimismo, iniciar un proceso de entrada a seis municipios del Bajo Cauca Antioqueño (Tarazá, Cáceres, Caucasia, Nechí, El Bagre y Zaragoza) y a otros municipios específicos como Bello, Yarumal, Ituango, valdivia, Campamento, Anorí, Dabeiba, Briceño y Salgar, dado el aumento progresivo de diferentes conflictividades, como el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, presencia de cultivos de uso ilícito, presencia de Minas antipersonal y munición sin explotar, desaparición forzada, homicidios y desplazamiento forzado; la armada, la debilidad de capacidades locales y las nuevas opciones políticas a raíz de las elecciones de octubre de 2011. Al hacer presencia en estos nuevos municipios se permite el impacto a 5 nuevas subregiones de Antioquia que son Norte, Occidente, Nordeste, Suroeste y Área metropolitana, que en la actualidad concentran la mayor afectación humanitaria de todo el Departamento.

- **Montes de María/Córdoba.** iniciar un proceso progresivo de salida de Montes de María en un periodo de dos años- con algunas intervenciones focalizadas ante la disminución del conflicto armado y el fortalecimiento de capacidades locales sociales e institucionales. Y avanzar en una estrategia de entrada a Córdoba ante el aumento de las conflictividades, la débil institucionalidad, las solicitudes hechas a PNUD por organizaciones sociales y el Gobierno nacional. La presencia en estas regiones, además, buscará atender especiales coyunturas: implementación de ley de víctimas, impacto de megaproyectos, impulso al desarrollo rural de la región, que incluye la restitución de tierras y las reservas campesinas, y la consulta previa.
- **Meta.** Continuar con la presencia en el territorio para consolidar procesos sociales determinantes en la región y responder a coyunturas específicas (impulso al desarrollo rural de la región, que incluye la restitución de tierras; derechos de las víctimas; implementación ley de víctimas y la consulta previa) y acompañar a la institucionalidad ante las problemáticas que enfrenta, aprovechando de manera especial las nuevas condiciones políticas que vive el departamento ante la elección de un gobernador y alcaldes comprometidos con la construcción de la paz y los derechos de las víctimas. Al mismo tiempo pensar en una estrategia de salida en un periodo de tres años considerado que es el departamento con mayor “antigüedad” de presencia del Programa ART-Redes (junto con Montes de María).
- **Nariño.** Continuar con la presencia en el territorio por los efectos del conflicto armado en la población en mayor estado de vulnerabilidad, para consolidar procesos sociales determinantes en la región (proyectos comunidades indígenas y afros, implementación ley de víctimas, iniciativas de paz, consulta previa) y para acompañar la institucionalidad ante las problemáticas que enfrenta, aprovechando las nuevas condiciones políticas (continuidad en Gobernación con compromisos por la paz y los derechos humanos). Priorizar acciones en municipios donde confluyen diferentes tipos de conflictividades, como los del Pacífico, Cordillera y frontera, y en los temas de desarrollo rural del departamento ante la situación del campo nariñense y los temores por los efectos negativos del TLC con Estados Unidos. Al mismo tiempo se puede pensar a una estrategia de salida en tres años considerada la significativa presencia de la cooperación internacional en el departamento y la solidez de la respuesta social e institucional, esto condicionado a una efectiva reducción de la conflictividad en el territorio.
- **Huila/ Caquetá.** Priorizar acciones estratégicas en el Huila con un proceso de salida de dos años para iniciar desde este departamento una entrada progresiva al Caquetá iniciando con apoyos técnicos puntuales a San Vicente del Caguán (con su plan de desarrollo, por ejemplo), Puerto Rico, Montañitas y Cartagena del Chairá. Esto, aprovechando que en los dos departamentos el PNUD se ha ganado la confianza de la población y de las autoridades, en un contexto complejo con fuerte presencia de las FARC. Este es un momento oportuno para actuar ante la renovación en la Gobernación del Caquetá y las esperanzas de cambio luego de años de inestabilidad política, los altos niveles de conflictividad no sólo armada, sino también social y ambiental que vive la región y además, ante la movilización por la paz que caracteriza a las bases sociales de estos departamentos con miras a posibles diálogos de paz. La intervención, además, buscará atender especiales coyunturas: implementación de ley de víctimas, impacto de megaproyectos, desarrollo rural que incluye restitución de tierras y reservas campesinas y consulta previa.
- **Cesar/ Guajira.** Continuar con la presencia en el Cesar, departamento más “joven” de presencia de ART-Redes, ante la situación del conflicto armado, los retos de restitución de tierras y de desarrollo rural en el departamento, la consolidación de los procesos indígenas y afros, la defensa de sus derechos colectivos y el apoyo en temas estratégicos como la consulta previa y la implementación de la ley de víctimas. Iniciar una entrada progresiva y puntual a La Guajira, desde Cesar, ante las conflictividades que enfrenta este departamento y su debilidad institucional y más teniendo en cuenta que entre los dos departamentos no hay 'fronteras' y para los guajiros, Cesar es referencia para la atención de sus víctimas y la satisfacción de sus necesidades básicas, entre otros.
- **Chocó y Cauca.** En caso de una disponibilidad de recursos, sería prioritaria una intervención en estos dos departamentos ante el conflicto armado, la situación humanitaria y otros conflictos (sociales, ambientales) que enfrentan sus pobladores y, además, aprovechando las nuevas condiciones políticas, entre ellas la elección de autoridades locales con independencia y un compromiso político en avanzar en el desarrollo humano de sus pobladores y en la búsqueda de una salida negociada al conflicto, que en el caso de Cauca está liderando acciones para sembrar las bases para un escenario de diálogo de paz. La entrada a estos departamentos sería gradual y con apoyo técnico puntuales, por ejemplo, en el tema de la consulta previa que es de interés especial tanto para los indígenas como para el Gobierno nacional. Se requiere, además, atender especiales coyunturas: implementación de ley de víctimas, impacto de megaproyectos y desarrollo rural, que incluye la restitución de tierras.

Para este esquema de salida y entrada el programa ART-Redes contempla la siguiente estrategia, que se transversalizará dentro de las actividades planeadas en el 2012, teniendo en cuenta y aplicando el enfoque de acción sin daño, utilizando instrumentos con los que cuenta ART-Redes<sup>3</sup>.

### 1. Determinar las gradualidad de la salida según el nivel de fortalecimiento de capacidades alcanzado:

- Si bien, como se presento en la sección de resultados, existen grandes avances en términos del desarrollo de capacidades tanto a nivel de las organizaciones como de las instituciones, existen procesos que llevan poco tiempo de intervención y que aun no se podrían cerrar sin causar efectos colaterales negativos (ej. mesa campesina y la Mesa Regional en Montes de María, retornos en el municipio de Nariño, Antioquia, Mesa Humanitaria del Meta, Mesa de concertación Resguardo San Agustín, entre otros).
- Para esto es fundamental actualizar la línea de base 2010, para identificar las iniciativas que requieren estrategias específicas y no romper los procesos sociales adelantados. As u vez implica brindar apoyo técnico para la interlocución efectiva entre organizaciones sociales e institucionalidad –donde aún sea necesario- para que iniciativas sociales estratégicas de los territorios sigan siendo impulsadas y acompañadas mayoritariamente desde las autoridades locales y entidades del Estado con presencia territorial.

### 2. Consultar con los involucrados

- El programa ART-Redes ingreso a los territorios con un proceso de consulta y así mismo debe ser su salida. Para esto se iniciaran consultas con los procesos que se identifiquen con mayores fortalezas, y se informara de manera sistemática la finalización de la fase, independientemente de la continuidad del programa en una fase adicional.
- Para esto es prioritario realizar de análisis con sensibilidad al conflicto con un esquema participativo para los territorios en donde se está pensando una estrategia de salida para priorizar acciones y focalizar territorios y de entrada –para tener un panorama de la realidad territorial.
- De igual forma es importante construir de planes para la continuidad de los proyectos que reciben apoyo de ART-Redes, que incluye identificación de actores estratégicos del territorio que podrían darle continuidad a dichos proyectos y acciones y apoyo técnico a los mismos, si fuera necesario y planes para mantener una interlocución constante con los actores sociales e institucionales del territorio con el fin de preparar, valorar e implementar el proceso de salida o entrada.

### 3. Cosechar lo aprendido

- Durante su vigencia el programa ha apoyado el desarrollo de herramientas, metodologías y modelos que pueden ser replicables en otras regiones y que deben ser trasferidos a las instituciones del estado en su papel de garantes de derechos. Actualmente se han identificado 3 iniciativas a ser sistematizadas, por considerarse que recogen la lógica de intervención del programa, a saber: Género, Construcción de Paz, Proceso territorial en Nariño (modelo de construcción de paz desde lo local). Estas sistematizaciones serán publicadas y divulgadas con los involucrados. Así mismo, se prevé crear un “banco de conocimiento” con el fin de compilar y ajustar las herramientas desarrolladas en el marco de los procesos apoyados.

### 4. Dejar instaladas las capacidades de M&E.

- Los impactos de las intervenciones en términos de cambios transformacionales no serán evidentes sino en el mediano o largo plazo. Por lo cual es importante desarrollar indicadores, técnicas, instrumentos que permitan a los principales socios identificar estos cambios para analizar los contextos territoriales con sensibilidad a los conflictos y enfoque de acción sin daño, y, además, monitorear y tomar decisiones estratégicas con el fin de evaluar la eficacia, eficiencia e impacto de estos procesos. Para esto se prevé impulsar procesos de análisis territoriales y dejar capacidades instaladas sobre gestión basada en resultados..

<sup>3</sup> PNUD, COSUDE, GIZ, Universidad Nacional y Fundación Synergia, 2011. Acción Sin Daño como aporte a la construcción de paz: Propuesta para la práctica eficiencia e impacto de estos procesos. Para esto se prevé impulsar procesos de análisis territoriales y dejar capacidades instaladas sobre gestión basada en resultados.

## 6. Retos 2012

Teniendo en cuenta el contexto político actual, la situación de conflictividad y las iniciativas de construcción de paz en lo local, el Programa ART-Redes enfrenta una serie de retos para su implementación.

- Es posible que en tiempos relativamente rápidos el país entre en una fase orientada a buscar una **solución negociada del conflicto**. Las señales son claras y contundentes: el nuevo discurso sobre la paz del Presidente Santos; los comunicados de las FARC y Ejército de Liberación Nacional (ELN); el “Marco Jurídico para la Paz” aprobado por el Congreso de la República. En este sentido podemos decir que “se cierra el círculo” que la estrategia ART-Redes quiso impulsar cuando surgió como estrategia territorial de construcción de paz: promover la construcción de paz desde lo local para crear condiciones basadas en el diálogo. Esta estrategia ha sido pensada y definida con la cooperación de Suecia desde 2004. En este momento tan importante para el país será de fundamental importancia no abandonar sino fortalecer la estrategia territorial de construcción de paz. Es importante que la agenda de la paz no sea definida “desde arriba” a través de un proceso de negociación de élites: la principal lección aprendida de ART-Redes es que la paz se construye “desde abajo” con la participación activa de las regiones y de los actores más afectados por el conflicto. El PNUD mantendrá en esta fase crucial para el país su presencia territorial para que las iniciativas territoriales de paz que hemos estado apoyando sean escuchadas en un eventual proceso de paz..
- Nos encontramos en un momento crítico relativo a la **disponibilidad de recursos** de parte de la cooperación internacional. Los donantes consideran que Colombia, siendo un país de renta media, tiene los recursos para su propio desarrollo. En algunos casos los donantes prefieren dirigir los recursos directamente al Gobierno Nacional que ha demostrado la voluntad política de enfrentar los temas estructurales del país, como demuestran las iniciativas legislativas sobre los derechos de las víctimas y el desarrollo rural. Sin embargo, los mismos actores nacionales (el Gobierno Nacional, los gobiernos locales y la sociedad civil) solicitan el apoyo consistente de la comunidad internacional y de Naciones Unidas en esta fase delicada. La preocupante situación humanitaria, el aumento de la violencia relacionada con los cambios anunciados sobre derechos de las víctimas, solución negociada del conflicto y reforma agraria, requieren en esta fase una mayor presencia de las Naciones Unidas en las regiones más afectadas por la violencia. En este contexto la estrategia territorial promovida por ART-Redes es de extrema actualidad y necesidad.
- Será necesario fortalecer la **estrategia de sistematización, monitoreo-evaluación y comunicación** del Programa ART-Redes. La sistematización es necesaria para evidenciar lecciones aprendidas, útiles para estrategias de entrada y de salida en determinados territorios. El monitoreo, la evaluación y la comunicación son indispensables para evidenciar los resultados concretos, los cambios transformacionales, los cambios reales en las condiciones de vida de la población, que demuestren frente a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional la necesidad de fortalecer la estrategia territorial de construcción de paz. Existe una preocupación legítima en la comunidad internacional en relación a los resultados concretos y al impacto de los fondos destinados a programas de cooperación. El Programa ART-Redes ha tenido a lo largo de los años importantes resultados que es necesario conocer y visibilizar.
- Al mismo tiempo es necesario pensar en la implementación de **estrategias de salida** con enfoque de acción sin daño, lo que implica definir durante los años 2012-2013 en algunos territorios específicos (Montes de María, Oriente Antioqueño, Huila) los actores sociales e institucionales que, debido al fortalecimiento de sus capacidades, están en condiciones de conducir la estrategia de construcción de paz con una reducción del apoyo externo. El proceso de salida se base en la sistematización y transferencia de conocimiento y tomará en cuenta la necesidad de que todos los actores locales participen y conozcan el proceso. En las regiones identificadas la estrategia de salida podrá ser acompañada por una **estrategia de entrada** en territorios que tienen afinidad socio-económica y mayor necesidad debido a los índices de conflictividad (de Montes de María a Córdoba, de Oriente Antioqueño a otros municipios de Antioquia, de Huila a Caquetá).
- La entrada en vigencia de la **Ley de Víctimas y Restitución de Tierras** implica, por una parte, desarrollar las capacidades de las instituciones locales para cumplir con sus obligaciones y, por otra, mejorar los conocimientos de las organizaciones de víctimas y acompañantes de procesos de víctimas para que exijan sus derechos en este nuevo marco normativo. En este sentido, el trabajo articulado con el FJT es vital para conocer los lineamientos

institucionales desde el nivel nacional, como también para canalizar las voces regionales hacia lo nacional. A pesar de la existencia de numerosos espacios de la cooperación internacional que tienen el objetivo de contribuir a la implementación de la ley de víctimas, es evidente el valor agregado específico del Programa ART-Redes. Gracias a su presencia territorial y a la estrategia de fortalecimiento de iniciativas territoriales de paz, el Programa logra dos objetivos que difícilmente otros programas de cooperación pueden abordar: el primero, fortalecer los mecanismos locales y regionales de reconocimiento de los derechos de las víctimas gracias a una presencia constante de facilitación y de apoyo por parte de las oficinas territoriales (comités de justicias transicional, mesas de participación, unidades territoriales de víctimas y de restitución de tierras entre otros). El segundo, vincular la agenda de las organizaciones de víctimas a la agenda de construcción de paz, empoderando las víctimas y transformándolas en ciudadanos y ciudadanas con propuestas convergentes con otros actores sociales para un horizonte de paz y de reconciliación en el territorio.

- En este mismo contexto, la situación de **seguridad** de los reclamantes de tierras y de los defensores de derechos humanos se ve seriamente amenazada, sobre todo ante la inminencia del proceso de restitución. El trabajo desarrollado por ART-Redes con organizaciones campesinas y de desplazados implica fortalecer la coordinación con espacios como la Mesa de Garantías, y con agencias como La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y ACNUR para proteger a las poblaciones en procesos de restitución, pero también se requieren cambios estructurales como la promulgación de la política pública de DDHH y DIH y de medidas efectivas de protección de parte del Estado.
- Así como ART-Redes nace, en parte, del Informe Nacional de Desarrollo Humano INDH 2003 “El conflicto: callejón con salida”, el INDH 2011 “Colombia rural: Razones para la esperanza” implica retos en términos tanto conceptuales como operativos, a fin de pasar de la socialización del Informe, a la creación de un modelo de desarrollo rural con enfoque territorial. En este sentido el eje de desarrollo socio-económico para la paz del Programa, debería priorizar las dinámicas y los procesos de desarrollo rural. En particular el Programa ART-Redes está en una posición privilegiada para contribuir al fortalecimiento de las organizaciones campesinas y para incidir en el debate sobre la nueva Ley de Desarrollo Rural. Una reforma rural transformadora puede ser un paso fundamental en el camino hacia una paz sostenible.

## Consideraciones analíticas de priorización territorial y estrategias de salida

A continuación se explican las razones por las cuales en algunos territorios ART-Redes se está trabajando en un esquema de salida y de entrada a territorios<sup>42</sup>, teniendo en cuenta varios criterios: las conflictividades y la situación humanitaria de las regiones; las capacidades territoriales de los actores sociales e institucionales; las características de la gobernabilidad democrática local y otras consideraciones.

### Oriente Antioqueño, Bajo Cauca y otros.

Las razones para iniciar un proceso de salidas progresivo del Oriente y de entrada a otros municipios son las siguientes:

#### a) Conflictividades y situación humanitaria

Si en los primeros años de 2000 el conflicto armado de Antioquia se centró de manera especial en varios municipios de la región del Oriente Antioqueño (con 23 municipios y 522.819 habitantes en 7.021 kilómetros cuadrados), en los últimos años se ha ido desplazado hacia el Bajo Cauca Antioqueño, una región de sólo seis municipios (Taraza, Cáceres, Caucasia, Nechí, El Bagre y Zaragoza), más extensa (8.485 kilómetros cuadrados) y donde habitan 246.189 personas.

En los últimos años, en el Oriente antioqueño se ha dado un descenso importante de homicidios, desplazamientos forzado y de víctimas de minas antipersonal y de MUSE, entre otros delitos, pero preocupan las amenazas y muertes de muchos líderes que hoy están defendiendo sus derechos y liderando procesos para reclamar sus tierras (en Antioquia hay 567.329 hectáreas registradas como abandonadas) y, así mismo, la presencia de bandas pos desmovilización, que han impactado negativamente la seguridad ciudadana.

Los homicidios han bajado desde los primeros años de la década (2002, 956 víctimas; 2003, 688; 2004, 486), cuando el conflicto armado fue especialmente violento en esta subregión y afectó particularmente a Granada, Sonsón, San Carlos, Cocorná, Rionegro, Carmen de Viboral, San Luis, Marinilla, Guarne, Santuario, Abejorral y San Francisco, municipios que hoy se caracterizan por sus iniciativas reclamación de tierras, retornos y reubicaciones de población desplazada. En los últimos años, el descenso en los homicidios continúa: en el 2006, 249 víctimas, y en el 2011, 95. Sin embargo, preocupa que la disminución haya sido menor en municipios como Rionegro y La Ceja, con 68 y 15 víctimas (2011), respectivamente, de las 97 ocurridas en los 23 municipios del Oriente; pues son los municipios que geográficamente están más cerca a Medellín y el Área Metropolitana y por ende se ven afectados por nuevas formas de manifestación de la violencia ocasionada por nuevos grupos que delinquen y se dedican sobre todo al microtráfico, las vacunas y en general al control territorial.

En estos municipios del Oriente Antioqueño, se concentra la mayor población que sufrió mayor desplazamiento masivo de la población, en especial en San Francisco, Sonsón, San Carlos, Granada y Cocorná. El desplazamiento también ha descendido: en el 2003 fueron expulsados 19.335 del Oriente, en el 2005 huyeron 11.775 y en el 2011, 403 personas. En la actualidad, gran parte de la población adelanta un proceso para retornar ante dos preocupantes problemáticas: la protección de la vida de las víctimas y el riesgo de que los campos estén sembrados con minas antipersonal y MUSE, pero también con una apuesta política clara de los gobiernos locales y departamental para apoyar estos procesos, ejemplo claro son Granada, San Francisco y San Carlos de donde surge la alianza Medellín Antioquia (AMA) que pretende la articulación del Municipio de Medellín y la Gobernación de Antioquia para apoyar, política, logística y financieramente los procesos de retorno sobre todo en estos tres municipios.

En esta región ha sido notorio el uso de estas minas por los grupos armados ilegales para el control territorial. Entre 2000 y abril del 2012, los pobladores de San Francisco (105 víctimas), San Carlos (172), Sonsón (90), Argelia (90) y Cocorná (74) han sido los más afectados, aunque hay un descenso progresivo de víctimas en los últimos años en estos y los demás municipios del Oriente. Sin embargo, el problema es que la estos artefactos pueden durar décadas sembrados antes de ser detectados. Esta disminución en la afectación se debe, además, a los esfuerzos para la Educación en el Riesgo de MAP que se han desarrollado desde las diferentes instancias Gubernamentales y No Gubernamentales instalando en las comunidades una cultura del autocuidado y uso de hábitos seguros ante la presencia de las minas antipersona y la Munición Sin Explotar y también por los procesos de desminado de Emergencia y Humanitario que se vienen desarrollando en Granada, San Francisco y San Carlos desde el año 2008 y por lo cual en el mes de Mayo se define a San Carlos como el primer municipio libre de sospecha de presencia de minas antipersona en el País.

<sup>42</sup> En el análisis de conflictividad y crisis humanitaria, las fuentes que se usan son: Policía Nacional para el caso de homicidios; el Departamento para la Prosperidad Social, para desplazamiento; el PAICMA, para minas y MUSE; el Ministerio de Agricultura, para restitución de tierras; el Registro Nacional de Personas desaparecidas, para casos de desaparición forzada; UNODC, para cultivos ilícitos; y Alta Consejería para la Reintegración, para el número de desmovilizados. En este aparte se hace un breve resumen del análisis realizado y no se incluye el soporte estadístico, el cual está a disposición si se requiere.



En el caso de los seis municipios del Bajo Cauca Antioqueño (Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza) la situación es inversa a la del Oriente Antioqueño, en la mayoría de los indicadores del conflicto armado. Si durante 2002-2004 -una de las épocas de mayor violencia en Antioquia- hubo 2.130 víctimas en los 23 municipios del Oriente Antioqueño, en los seis municipios del Bajo Cauca se registraron 84. Pero en los últimos años, los casos de homicidios han aumentado o se han mantenido constantes en casos que requieren especial atención, como Caucasia, Tarazá y Zaragoza. Mientras en el 2011, 97 ciudadanos de los 23 municipios del Oriente Antioqueño fueron asesinados, un total de 143 perdieron la vida en los seis municipios del Bajo Cauca, situación de mayor preocupación en Caucasia, donde murieron 114 ciudadanos.

En estos municipios del Bajo Cauca también se registra el desplazamiento de mucha población, con un aumento considerable desde el 2004 en algunos municipios. Mientras en los seis municipios de esta región se desplazaron 1.486 personas en el 2003, en el 2005 aumentó a 5.049 y en el 2009 lo hicieron 6.625. En el 2011, entre tanto, huyeron 3.655 personas. Aunque ha habido descenso importante en este delito, sigue preocupando en especial la situación en Tarazá (358 desplazados en 2003, 1934 en 2009 y 541 en 2011), Caucasia (202 desplazados en 2003, 1918 en 2009 y 987 en 2011) y Cáceres (166 en 2003, 1042 en 2009 y 805 en 2011).

Las minas también se han convertido en un factor de preocupación en esta subregión. Hoy Tarazá es el municipio de Antioquia con el mayor número de víctimas de minas antipersona (180) entre 2000 y abril del 2012 -después de San Carlos y San Francisco, del Oriente- y aunque en los últimos años los casos han disminuido sobresalen Tarazá y Cáceres, que desde el 2004 presentan un aumento de víctimas. También se presenta la instalación y detonación de Artefactos Explosivos, sobre todo en Cáceres, Tarazá y Zaragoza, en zonas comunes de los municipios como parques principales y mercados, generando un aumento de la vulneración de la población y dejando en su mayoría como víctimas a niños/as y mujeres. A esta situación se suma la siembra permanente de MAP y la dificultad de las instituciones de poder adelantar procesos de prevención y atención con las comunidades que se encuentran en riesgo por la presencia hostil de los grupos armados.

En otras subregiones de Antioquia - del norte, nordeste, occidente y área metropolitana- hay municipios con situaciones de conflictividad que requieren también de una atención especial, como ocurre con Bello, Yarumal, Ituango, Campamento, Anorí, Dadeiba y Salgar.

En Bello, por ejemplo, la principal problemática es la recepción cada día de población que viene huyendo de otros municipios de Antioquia o de departamentos vecinos ante su cercanía con la capital antioqueña. Desde hace ya varios años, después de Medellín, Bello es el municipio que más población en situación de recibe de Antioquia: 2.194 personas en 2009 (14.648 en Medellín) y 1.112 en 2011 (14.974 en Medellín). Entre tanto, han expulsado en esos mismos años 258 y 214, respectivamente.

Yarumal y Anorí, entre tanto, han presentado un aumento tanto en homicidios como en población desplazada hacia otras zonas: en Yarumal murieron en el 2009 34 de sus habitantes y fueron desplazados 2002 habitantes, mientras que en el 2011, fueron 48 los homicidios y 2010 los desplazados. En Anorí, entre tanto, 4 homicidios y 144 desplazados se presentaron en el 2009 y en el 2011 fueron 12 los fallecidos y 450 los desplazados. Sin embargo, en Anorí, Ituango, Briceño, Valdivia, la presencia de diferentes grupos al margen de la ley, la presencia de cultivos de uso ilícito, el reclutamiento forzado hacen que sean municipios donde el acompañamiento a las comunidades y el fortalecimiento a las administraciones se hace urgente con el fin de generar capacidades de resistencia y redes de protección comunitaria frente a la agudización del conflicto.

Otro tipo de conflictividad es la que se prevé alrededor de la construcción en Antioquia de tres grandes proyectos, que tendrán un impacto en el departamentos y otros vecinos: la Autopista de la Montaña, el Túnel de Oriente e Hidroituango, que si bien prometen desarrollo, también son un factor de preocupación por los costos ambientales y los efectos en la población y, de manera especial, en el campo.

#### b) Capacidades de actores sociales e institucionales

La población de Antioquia, en general, se ha caracterizado por la manera de reaccionar al conflicto y de organizarse para superar sus efectos. Los más importantes procesos organizativos se vieron afectados por el conflicto, que debilitó especialmente entre 1993 y 2004- las organizaciones y liderazgos comunitarios, la reacción de la ciudadanía y su capacidad organizativa. Sin embargo, en los últimos años las organizaciones han vuelto a ser parte activa en los asuntos públicos y líderes en la defensa de los derechos humanos, en particular en el Oriente, donde se han identificado 1.576 organizaciones sociales e institucionales que le están apostando a la paz. Hay notorias capacidades de organizaciones de carácter regional, movimientos cívicos e iniciativas locales de paz, así como un Programa de Desarrollo y Paz (PDP) con acción en el Oriente y en algunos municipios del Magdalena medio y nordeste del departamento. Adicionalmente, hoy hay una confluencia de esfuerzos de las instituciones del Estado, de organizaciones regionales y nacionales de la

sociedad civil y de la cooperación internacional. Sin embargo, el Oriente enfrenta el reto de consolidar procesos sociales y, además, tener en cuenta algunas problemáticas de la coyuntura: ley de víctimas, restitución de tierras, protección a víctimas, retornos, desarrollo rural e impacto de megaproyectos.

En el Bajo Cauca y otros municipios, por el contrario, si bien hay organizaciones reconocidas, aún no tienen las capacidades que hoy caracterizan a las de Oriente. Hay organizaciones de carácter departamental que tienen presencia en la región y cuentan con reconocimiento y capacidad de articulación con otras organizaciones e instituciones territoriales y nacionales, pero requieren de apoyo técnico para hacerse sentir en el departamento.

En el Norte (Briceño, Valdivia, Campamento, Yarumal, Ituango) las organizaciones de mujeres y de víctimas han ido surgiendo como forma de resistencia al conflicto, permitiendo a la subregión una fortaleza en cuanto formación en derechos, en participación ciudadana y movilización que le permite hacer parte de espacios a nivel departamental que visibilizan las problemáticas pero también las fortalezas y las posibilidades de desarrollo que se pueden gestar en la subregión.

En Occidente(Dabeiba) y en Nordeste(Anorí) se ha agudizado la problemática del conflicto armado con la presencia de MAP – MUSE, aumento de desplazamiento forzado, homicidios y también se ve la necesidad de fortalecer los pequeños espacios organizativos que han surgido, sobre todo organizaciones de víctimas con una gran presencia de jóvenes y mujeres que pretenden proyectar a sus comunidades mayor información frente a sus derechos pero también las posibilidades de organización y proyección frente a la subregión.

### c) Oportunidades en la gobernabilidad

En Antioquia, en los últimos años, la guerrilla y los grupos de autodefensa han tenido incidencia en la política y en las administraciones municipales de esta región, lo que ha afectado de manera importante su gobernabilidad. Muchas acciones han coartado la libertad de los ciudadanos a elegir y ser elegidos (elecciones de 2002 y 2006 al Congreso y las locales de 2007) y amenazas (entre 2002 y 2008) que llevaron a la renuncia masiva de aspirantes a cargos de elección. Aunque en las elecciones locales de octubre de 2011 había temores en subregiones como el Bajo Cauca y el Nordeste, donde los territorios estaban en disputa y no había un grupo armado ilegal hegemónico, las autoridades no reportaron mayores injerencias en el proceso electoral. Actualmente, por el contrario, hay condiciones favorables para la gobernabilidad, entre otras razones, ante la elección de mandatarios departamental (Sergio Fajardo, del Partido Verde) y municipales con alto reconocimiento, apoyo en las bases y sus compromisos con la construcción de la paz, el desarrollo humano, la defensa y garantía de los derechos humanos, las organizaciones sociales y el fortalecimiento de la institucionalidad para evitar la infiltración ilegal. La administración de Fajardo ve como aliados a las regiones en busca del desarrollo y cuenta, además, con una coalición de 19 de los 26 diputados de la Asamblea, lo que facilita su gobernabilidad y la aprobación de iniciativas como el plan de desarrollo Antioquia la más educada, que es una apuesta para combatir la desigualdad social, la violencia, la corrupción y lograr la sostenibilidad ambiental.

### Montes de María y Córdoba

Las razones para iniciar un proceso de salida progresivo de Montes y de entrada a Córdoba son las siguientes:

#### a) Conflictividades y situación humanitaria

En Montes de María, los principales indicadores del conflicto armado han tenido un descenso en los últimos años. Por ejemplo, cada vez son menos las víctimas de desplazamiento. Si de los 15 municipios de Montes salieron expulsadas 12.763 víctimas en el 2003; 13.343 en el 2005 y 9.454 en el 2007, a partir de este año la situación tendió a mejorar: 1.212 en el 2009 y 284 víctimas en el 2011, la mayoría de ellas de San Onofre, Toluviejo, Los Palmitos y Ovejas. La misma tendencia se observa en los homicidios, que también fueron usados por los paramilitares para expulsar a la población de sus tierras: mientras en el 2005 hubo 124 víctimas y 1.005 en el 2007, en el 2008 se registraron 14 y 40, en el 2011.

En número de víctimas de minas antipersona y MUSE también ha presentado una disminución si bien hay 258 víctimas en los Montes entre 1993 y 2011, siendo la etapa más crítica entre 2002 y 2006 en municipios como Carmen de Bolívar, Zambrano, Ovejas y San Jacinto. En los últimos tres años, entre tanto, se han registrado dos víctimas.

A pesar de los avances en los indicadores de conflictividad en los Montes de María, aún se requiere acompañar procesos que lideran organizaciones sociales y que tienen que ver, especialmente, con la restitución de tierras y el desarrollo rural, en general; la implementación de la ley de víctimas y la protección de las víctimas.

La situación de Córdoba es hoy diferente a la de Montes. Córdoba es uno de los 5 departamentos más pobres del país, pues un 28% de su población se encuentra bajo la línea de indigencia. El 76,10% de población rural y el 42,47% de la urbana tienen necesidades básicas insatisfechas e indicadores como el desempleo y el analfabetismo son de los más

altos de la Costa, convirtiéndose esa situación social en otro factor de inestabilidad.

Además de esta situación, se suman los efectos del conflicto armado y otras violencias, que han impactado a la población más vulnerable. El desplazamiento ha sido uno de los mecanismos de los grupos armados ilegales especialmente de paramilitares- y de actores legales para apropiarse de las tierras de la población. Un total de 110.886 personas se han desplazado de manera forzada entre 2000 y 2011, en una tendencia que ha ido en aumento. De los 30 municipios de Córdoba, los más afectados por el desplazamiento en la última década han sido los mismos en los que se han denunciado el masivo despojo de tierras Tierralta, Puerto Libertador, Montelíbano y Valencia y se evidencia un acompañamiento para su desarrollo rural Si bien el desplazamiento ha descendido en los últimos años sigue siendo una de las mayores problemáticas en especial ante la presencia masiva de bandas emergentes, entre ellas la Urabeños y Los Paisas, lo que ha afectado también negativamente la seguridad ciudadana.

La presencia de excombatientes –algunos integrantes de estas bandas- ha tenido un impacto en los habitantes. De los 31.699 ex combatientes que dejaron las armas colectivamente entre 2002 y 2010, 2.547 se encuentran en el departamento.

El aumento del desplazamiento en los últimos años ha estado asociado con el de los homicidios y la presencia de bandas: 252 víctimas en 2003; 352, en 2007; 510, en 2009; y 595, en 2011. Muchas de las víctimas pertenecen a comunidades campesinas o indígenas. La situación ha provocado voz de alerta por la situación de seguridad y de derechos humanos de Montería, Tierralta, San Bernardo del Viento, Loricá, San Antero, Montelíbano, Pueblo Nuevo, Buenavista, la Apartada, Puerto Libertador y Moñitos.

Una situación preocupante en Córdoba es el aumento progresivo, a partir de 2006, de los cultivos de hoja de coca: 838 hectáreas, en el 2003; 3.136, en 2005; 1.858, en 2007; 2.782, en 2009 y 3.347 en 2010.

Una razón más de conflictividad es el departamento es la concentración de grandes extensiones de tierra en pocas manos debido a que campesinos, indígenas y otros pobladores carecen de títulos que les permitan legalizar la tenencia, los han desalojado o ilegales y terratenientes se han apropiado ilegalmente de sus tierras. En Córdoba hay registradas como abandonadas 171.696 hectáreas de tierra.

#### b) Capacidades de actores sociales e institucionales.

Después del debilitamiento de las organizaciones sociales por el grado de confrontación en los Montes de María en la década de los 80 y hasta los primeros años del 2000, hoy la región cuenta con una gran diversidad de actores e iniciativas dirigidas a la construcción de la paz, principalmente organizaciones campesinas, grupos de sectores poblacionales tanto urbanos como rurales, iglesias, campesinos, estudiantes, grupos étnicos, organizaciones de mujeres y algunos representantes de las instituciones públicas. Hay una importante capacidad organizativa y gran fuerza de las comunidades, que han impulsado acciones y buscado movilizarse en la perspectiva de la paz. Estas comunidades, el PDP de Monte de María y otras organizaciones, así como las comunales, de maestros, sindicalistas, defensores de derechos humanos y movimientos cívicos, son actualmente reconocidos en la región por sus capacidades hacia la paz y la resolución de problemáticas cotidianas asociadas al conflicto y la violencia: desde la búsqueda de protección mínima y rechazo a actos de violencia, pasando por iniciativas productivas para resolver necesidades básicas, hasta acciones de formación y de prevención.

En el caso de Córdoba, las constantes luchas territoriales entre los diferentes grupos guerrilleros, autodefensas y bandas criminales han debilitado el tejido social. Las acciones de construcción de paz se han visto seriamente afectadas por homicidios selectivos, amenazas, desapariciones forzadas, reclutamiento y utilización ilícita de niños y adolescentes, desplazamiento forzado, estigmatización de la población civil y atentados contra los derechos colectivos de los pueblos indígenas (embera katío y zenú). Pero a diferencia de Montes de María, si en un momento hubo fuertes movimientos sociales, hoy los diferentes conflictos en Córdoba los han silenciado.

No hay una institucionalidad fuerte que defienda los derechos de las víctimas y, por el contrario, hay una gran desconfianza de la ciudadanía hacia sus instituciones, muchas de ellas infiltradas por grupos paramilitares. Fue en este departamento donde nacieron las autodefensas, se infiltraron en los diferentes escenarios económicos, políticos e institucionales del departamento y extendieron su poder paramilitar al resto del país. El departamento tiene el record de tener tres funcionarios públicos, ocho alcaldes y cinco ex congresistas investigados por sus presuntos nexos con grupos paramilitares.

#### c) Oportunidades en la gobernabilidad.

En Montes de María aún la institucionalidad requiere ser fortalecida. En las pasadas elecciones locales (octubre de 2011) no se observó la renovación que se esperaba y los municipios de esta región no han sido ajenos a las crisis político administrativa que -desde hace ya varios años- viven los departamento de Bolívar y Sucre ni a la crisis de gobernabilidad

producto de gobiernos financiados con recursos ilegítimos y personas cuestionadas por sus nexos con el paramilitarismo y los negocios ilegales. Aún preocupa la influencia que siguen teniendo sectores ligados o aliados con el crimen, a pesar de que perdieron espacios importantes en esos comicios. Sin embargo, en los últimos años algunas autoridades han aumentado su interés en el desarrollo y la paz de la región participando y promoviendo concertación entre actores sociales para plantear alternativas a los conflictos; acompañado a comunidades en proyectos específicos, construyendo de manera participativa sus presupuestos y protagonizando acuerdos para impulsar procesos de desarrollo y paz.

En Córdoba, entre tanto, persisten serias debilidades en las garantías de los derechos ciudadanos y desconfianza de la ciudadanía hacia su institucionalidad ante los numerosos hechos de corrupción y la presencia e infiltración de grupos armados ilegales en buena parte del territorio, que siguen siendo factores que amenazan la gobernabilidad democrática local y la defensa de los derechos de las víctimas.

El departamento se encuentra en una encrucijada después de las elecciones locales de 2011 por la mezcla de narcotráfico, violencia, política y elecciones. Mientras los sectores de la parapolítica aliados de las autodefensas perdieron en los comicios, los herederos de sus divisiones políticas internas y algunos de los que mantienen vasos comunicantes con las llamadas BACRIM las ganaron arrolladoramente, tanto en más de una quincena de municipios como en la coalición ganadora en la gobernación. La expectativa es si en este periodo los jóvenes que se afianzaron en el poder en la Gobernación (Alejandro Lyons, electo por el partido de la U, abogado de parapolíticos y contratistas del cartel de la contratación de Bogotá) y la alcaldía de Montería (Carlos Eduardo Correa Scaff, su primera aspiración en el sector público y en cargo de elección popular) efectivamente serán el cambio hacia la transparencia, la justicia y progreso que necesitan los cordobeses.

Existen dos Alcaldías con inestabilidad política, Moñitos y las Córdobas, porque sus mandatarios electos ganaron y se posesionaron desde la cárcel por sus vínculos con el paramilitarismo. Posteriormente, el Gobierno designó alcaldes encargados mientras se definen la situación jurídica de los detenidos, lo cual ha originado una crisis administrativa y en las poblaciones, lo que ha sido una constante en el departamento en los últimos años por la cooptación y contubernio entre grupos ilegales y el Estado.

Causa preocupación que en los ámbitos departamental y municipal se presenta una total hegemonía por parte de los grupos políticos que ostentan el poder local y regional sobre los organismos de control, es así como sobre contralorías y personerías, que no poseen una total independencia sobre las administraciones de turno, lo que sin dudas se convierte en un riesgo para la imparcialidad con que se debe ejercer la labor de seguimiento y control por parte de estas entidades.

#### d) Otras consideraciones

Durante la visita del Presidente de Colombia y el Secretario General de la ONU a Córdoba junio de 2011- organizaciones sociales le pidieron al Gobierno y al PNUD tener una presencia en Córdoba como la que se tiene en Montes de María. El Mandatario colombiano respondió afirmativamente a dicha solicitud.

### Meta

Las razones para continuar con la presencia en el Meta e iniciar una salida a largo plazo –tres años- son las siguientes:

#### a) Conflictividades y situación humanitaria

Los niveles de desigualdad, marginalidad y pobreza; la presencia de grupos armados fuera de la ley; el narcotráfico y la economía ilícita y la construcción de megaproyectos son algunos de los múltiples conflictos armados, políticos, sociales y económicos, históricamente no resueltos.

Seis municipios del Meta (Puerto Rico, La Macarena, Uribe, Vistahermosa, San Juan de Arama y Mesetas, que fueron parte de la llamada zona de distensión en el proceso de paz) hacen parte del Plan Consolidación de La Macarena, una política del Gobierno nacional que ha implicado un despliegue de Fuerza Pública, acciones cívico militares y aumento en la confrontación entre las fuerzas militares y la guerrilla como vía para garantizar el control territorial. Esto ha generado, un aumento en las acciones de los grupos ilegales (emboscadas, ataques a puestos de policía, tomas): mientras en el 2008 se dieron 14, 54 se presentaron en el 2010 y 44, entre enero y septiembre de 2011.

Las numerosas víctimas que tiene el departamento hoy enfrentan enormes dificultades en defensa de sus derechos: amenazas y la muerte de sus líderes en sus procesos de recuperar sus tierras, apropiadas ilegalmente por paramilitares. Precisamente hay 484.231 hectáreas registradas como abandonadas en este departamento.

La presencia de bandas pos desmovilización sucesoras de los grupos paramilitares que dominaron la región se han convertido hoy en la principal problemática para la seguridad ciudadana y al mismo tiempo, para los esfuerzos de paz de las comunidades.

Aunque en los últimos años se han reducido los principales indicadores del conflicto armado (homicidios y

desplazamiento) en el Meta, las mayores problemáticas se centran en algunos municipios, lo que ha hecho que la situación sea aún más compleja. Desde el 2007, con 599 homicidios, se ha dado un descenso importante: 438 casos en 2009 y 399 en 2011, aunque las mayores víctimas siguen siendo de Villavicencio, Granada, Acacias, La Macarena, La Uribe, Puerto Rico y Mesetas.

El desplazamiento también ha disminuido, pero se ha focalizado: mientras en el 2003 tuvieron que desplazarse 10.188 víctimas, 17.277 en el 2005 y 14.178 en el 2007, desde entonces ha habido un descenso: 6.609 en el 2009 y 2.083, en el 2011.

La construcción de megaproyectos palma de aceite y la explotación de recursos naturales como el petróleo siguen siendo factor de conflictividad a veces violentas con un efecto especial en población en mayor estado de vulnerabilidad, como la indígena, ante la violación de derechos humanos y derechos laborales, la expropiación de tierras y los impactos en el medio ambiente y el desarrollo rural.

#### b) Capacidades de actores sociales e institucionales

La dinámica de conflictividad en Meta en los 90 y los primeros años de los 2000 debilitó la organización social y por la paz e impidió que se consolidaran procesos sociales y organizativos, a pesar de la fuerza historia del movimiento social. En los últimos años, sin embargo, han surgido importantes espacios organizativos y de articulación, que trabajan en temas relacionados con la paz, el desarrollo, la reconciliación y los derechos humanos, en donde sobresalen las organizaciones campesinas, de mujeres y los jóvenes, así como la iglesia. Según un censo realizado por la pasada Gobernación del Meta hay 8.000 organizaciones. A pesar de estos avances, la prioridad hoy es lograr que haya una mayor articulación entre la ciudadanía y las instituciones ante los años de desconfianza y polarización que caracterizaron estas relaciones.

#### c) Oportunidades en la gobernabilidad

Meta ha vivido una situación de gobernabilidad muy complicada ante la presencia de grupos guerrilleros, la presencia de bandas pos desmovilización, los constantes problemas sociales originados por explotaciones petroleras y el aumento de la criminalidad urbana. La llegada de Alan Jara a la Gobernación supone un cambio drástico en la política del departamento y una situación a aprovechar ante su condición de líder regional y nacional, su experiencia, su capacidad de gestión y compromiso con las organizaciones sociales y las víctimas. Precisamente su gabinete está conformado por personas muy cercanas a él que no representan muchos intereses políticos tradicionales. La misma situación se presenta en Villavicencio, que viene de una época de mucha inestabilidad política y que apenas empezó a mejorar en las elecciones de 2007. Una importante oportunidad política vive la ciudad con el triunfo de Juan Guillermo Zuloaga, quien cuenta con la mayoría en el concejo municipal y un respaldo social y cuya principal meta es la seguridad, con su plan "Villavicencio sin Miedo".

### Nariño

Las razones para continuar con la presencia en Nariño e iniciar una salida a largo plazo tres años, si cambian algunas condiciones son las siguientes:

#### a) Conflictividades y situación humanitaria.

En Nariño confluyen los conflictos armado por la presencia de guerrilla, bandas pos desmovilización, redes de narcotráfico y los enfrentamientos entre guerrilla y la Fuerza Pública, el conflicto socioeconómico por los niveles de pobreza y desigualdad de la región; y ambiental, ante los efectos de los cultivos ilícitos y la minería.

En Nariño el conflicto armado sigue teniendo un fuerte impacto en la población, en especial en indígenas y afros el 70% de la población son mestizos, el 11% indígenas representantes de 6 pueblos y el 19%, población afrocolombianas, quienes han sido víctimas de masacres, amenazas, usurpación de tierra y desplazamiento, en muchos casos hacia Ecuador, lo que es un factor que ha perturbado las relaciones binacionales.

Aunque desde 2007 (37.075 personas desplazadas) ha habido un descenso del desplazamiento (26.688 en 2009 y 16.497 en 2011) hay situaciones alarmantes de algunos municipios, como Tumaco, Barbaças, El Charco, Olaya Herrera, El Rosario, Ricaurte, Santa Bárbara y Samaniego, que presentan los mayores niveles de desplazamiento. En el caso de Tumaco, por ejemplo, el 50% de la población desplazada de Nariño en el 2011 fue de este municipio. Adicional a esta problemática, está la de usurpación de tierras por parte de ilegales. Actualmente, hay 93.952 hectáreas registradas como abandonadas en este departamento.

En la lucha por el control territorial y los dividendos del narcotráfico, los nariñenses están siendo asesinados y siendo víctimas de minas y MUSE. En el caso de los homicidios, si bien han disminuido con relación a 2003 (518 víctimas) y 2004 (491) las cifras aún preocupan porque, entre otras razones, las víctimas son líderes regionales: en el 2006 hubo 797 víctimas, 723 en el 2008 y 566 en 2011, siendo las mayores víctimas los habitantes de Tumaco, Ipiales, Pasto, Samaniego, Potosí y Barbaças.

En algunos de estos municipios, en especial Samaniego, Ricaurte y Barbacoas, las minas y MUSE se han convertido en una preocupación ciudadana: entre 2000 y 2012 hubo 616 víctimas, la mayoría de Samaniego (130).

La población también ha estado en medio de conflicto generado por los cultivos de uso ilícito, en los que tienen interés guerrilla, bandas y narcotraficantes, incluso se investiga la presencia de carteles mexicanos, lo que ha tenido un efecto negativo en el medio ambiente por las hectáreas de bosques que han sido taladas. El departamento sigue siendo el primero en el país con más cultivos de hoja de coca (15.951 en 2010), siendo los mayores cultivadores los habitantes de Tumaco, Barbacoas y Roberto Payán, quienes se ven obligados a esta actividad ante la situación que enfrentan ya que Nariño tiene unos altos niveles de pobreza (2009: 56,9%) y pobreza extrema (18,8%).

Existe preocupación en este departamento por el efecto que tendrá el TLC con Estados Unidos y en especial en el campo nariñense y en su población.

En los municipios mencionados confluyen las principales problemáticas de este departamento, que sigue siendo escenario de políticas nacionales que han tenido un fuerte impacto regional (Plan Colombia, Plan Patriota), como el Plan Nacional de Consolidación, este último en marcha. De los 64 municipios de Nariño, ocho hacen parte del Plan Consolidación y de ellos, Ricaurte y Tumaco son de frontera y son los que registran, en algunos casos, los mayores niveles de conflictividad. Esto ha provocado una alta presencia de las Fuerzas Militares y de la Policía, que en los últimos años se ha ido aumentando de manera progresiva con operativos militares y acciones cívico-militares, que siguen siendo factor de denuncias ciudadanas ante vínculos con fuerzas de extrema derecha y violaciones a los derechos humanos.

#### b) Capacidades de actores sociales e institucionales.

Como en otras regiones del país, el conflicto armado sigue teniendo un fuerte impacto en la movilización social de Nariño, que históricamente y en especial en la última década se ha destacado por ser pacífica, asertiva, propositiva, incluyente, que usa lo simbólico y lo cultural y que tiene una gran capacidad para la autocrítica y el diálogo. Sobresalen los procesos indígenas de planificación de su etnodesarrollo, los planes de vida campesinos, las iniciativas impulsadas por afros, jóvenes y mujeres, la alianza para trabajar los temas de los derechos humanos y la atención integral a las víctimas; las experiencias centradas en la formación política de las personas; un Programa de Desarrollo y paz de frontera y procesos de gestión participativa del desarrollo.

En este departamento, existe una amplia conciencia en el territorio sobre la importancia del trabajo interinstitucional y la necesidad de las articulaciones sobre todo dada su condición de departamento periférico, alejado de los centros políticos y económicos de Colombia. Eso ha permitido un fortalecimiento de los actores institucionales, en los que hay una alta credibilidad.

La fuerte presencia de la cooperación internacional que ha logrado crear una estrategia conjunta de articulación, que incluye nueve agencias, programas y fondos de Naciones Unidas, ha permitido unir esfuerzos, priorizar y articular acciones.

#### c) Oportunidades en la gobernabilidad.

Nariño vive una gran oportunidad política con la elección en los comicios de octubre de 2011 de Raúl Delgado en la Gobernación, que garantiza un continuismo de muchas de las políticas de su antecesor (de su mismo partido político) y la prioridad a asuntos como la construcción de paz, la garantía y defensa de los derechos humanos, el diálogo con los actores sociales, el desarrollo rural y la atención especial a indígenas y afros. Es necesario tener en cuenta el nuevo Gobierno de Nariño se ha comprometido con una serie de iniciativas y temas que son relevantes en la agenda del gobierno nacional y que han encontrado un replica importante en el departamentos, como el desarrollo de la economía campesina, el debate en torno al estatuto de desarrollo rural y una política revitalizada en el tema de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito.

### Huila y Caquetá

Las razones para priorizar acciones en Huila e iniciar una entrada progresiva con acciones puntuales en Caquetá son las siguientes:

#### a) Conflictividades y situación humanitaria

Los pobladores de Huila y Caquetá en especial este departamento en los últimos años se encuentran en un riesgo constante ante los diferentes tipos de conflictos que vive la región: el conflicto armado ante las acciones históricas de las FARC, la presencia reciente de bandas pos desmovilización y la confrontación armada con la Fuerza Pública; conflictos ambientales ante la explotación de recursos naturales y la construcción de megaproyectos energéticos e hidroeléctricos y conflictos sociales, ante los niveles de pobreza y desigualdad y la falta de oportunidades en especial para la población campesina. Mujeres, niños, niñas y jóvenes son los principales afectados.

Lo que ocurre en un departamento tiene un impacto en el otro, como lo evidencia el desplazamiento forzado, cuyas principales víctimas son las mujeres. Huila continúa siendo más un departamento receptor de población que expulsor habitantes, la mayoría de los departamentos vecinos, como Caquetá, que ante las conflictividades llegan a Huila en busca de mejores oportunidades. Mientras en el 2007 salieron de Huila 9.697 personas, 7.754 en 2009 y 3.145 en el 2011, el departamento recibió en esos años 14.064, 7.866 y 3.407 pobladores, respectivamente.

En el caso de Caquetá, los homicidios, las desapariciones y el aumento de víctimas de minas antipersonal han sido factores para el desplazamiento de su población. A diferencia del Huila, Caquetá es un departamento más expulsor que receptor de población. Mientras del departamento salieron 19.548 personas en el 2007, 11.613 en 2009 y 6.209 en el 2011, recibió en esos años 10.518, 8.395 y 4.768 pobladores, respectivamente. Preocupa que de los 17 municipios de Caquetá, la problemática se concentra precisamente, en Florencia, Puerto Rico, San Vicente del Caguán, La Montañita y Cartagena del Chairá.

Los homicidios también se concentran en muchos de los municipios que presentan mayor desplazamiento. Mientras la tasa de homicidio del Caquetá en el 2010 fue de 77,95 (349 muertos), la del Huila fue de 32,03 (347), situación que ha sido una de las causas del desplazamiento de la población entre los dos departamentos. En el caso de Huila, el mayor impacto de este delito lo sufren los pobladores de la capital, Neiva (en el 2011 se cometieron el 50.4% de los casos), Pitalito, y La Plata, mientras que en Caquetá la población más afectada son los mismos afectados por el desplazamiento. Por ejemplo, de los 150 homicidios en Caquetá en el 2011, el 88% ocurrieron Florencia (63), La Montañita (25), San Vicente (21), Puerto Rico (15) y Cartagena del Chairá (8).

Tanto en Huila como en Caquetá en especial en Huila las organizaciones sociales han advertido de numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”, así como han exigido una respuesta por la población que ha desaparecido de sus hogares: -a septiembre de 2011- había registradas como desaparecidas 62.745 personas de Huila y 1.040, de Caquetá.

El uso de minas antipersona y MUSE que están usando de manera especial los grupos armados ilegales está teniendo un impacto importante en la población, en especial en la de Caquetá. Mientras entre 1990 y noviembre del 2011 en Huila se presentaron 179 víctimas, en Caquetá, hubo 710 víctimas, el 75% de ellas de San Vicente (208); La Montañita (185); Puerto Rico (85) y Cartagena del Chairá (55).

Otra razón más para el desplazamiento de población entre Huila y Caquetá y otras regiones es la situación social de los pobladores. Aunque en los últimos años ha disminuido la pobreza y la pobreza extrema, sigue afectando un importante número de huilenses y en menor proporción, a los habitantes de Caquetá. Para el 2010, la pobreza en Huila fue de 53,3% y la pobreza extrema, 25,9% y en el Caquetá, al 44,3% y el 10% de sus habitantes, respectivamente. Se trata, además, de regiones con unos altos índices de desigualdad, que incluso supera los porcentajes nacionales: en 2010, fue superior la desigualdad en el Huila (0,572) que en Caquetá (0,451).

Las diferentes visiones sobre el tipo de desarrollo y los intereses por el uso y explotación del suelo se han convertido en otro factor de conflictividad en Huila y Caquetá ante el impacto ambiental y social que tienen megaproyectos hidroeléctricos en construcción y proyección, la siembra de extensos cultivos de palma de aceite y la explotación de recursos naturales, como el petróleo. Actualmente, hay registradas como abandonadas 47.081 hectáreas de tierra en Huila, mientras que en Caquetá la cifra es de 528.388.

#### b) Capacidades de actores sociales e institucionales.

Una de las características de la historia de Huila y Caquetá es su trayectoria de movilización social, debilitada en las últimas décadas primordialmente a causa del conflicto armado, que se ha convertido en la mayor amenaza al tejido social de los dos departamentos. De manera paralela a la movilización campesina, que sigue teniendo un rol importante en la región, aunque no como hace 10 años, en las últimas décadas también ha sido notorio el surgimiento de movimientos, organizaciones y liderazgos por la paz, por las salidas políticas y dialogadas a la confrontación armada en defensa de los derechos humanos de las víctimas y por el fortalecimiento de la institucionalidad y la democracia locales.

En la movilización por la paz, las juntas locales son una fuerza social muy importante, con amplio reconocimiento en el territorio, con legitimidad, con nivel de interlocución con la institucionalidad y con una posición firme sobre la necesidad de una solución negociada al conflicto armado. Precisamente esta región - Caquetá- fue sede de unos diálogos de paz y tiene una presencia histórica de las FARC, lo que ha hecho que su población y sus organizaciones han sido víctimas de estigmatizaciones y de acusaciones tener vínculos con esta guerrilla.

Huila y Caquetá siguen teniendo una institucionalidad débil, fuertemente cuestionada por casos de corrupción, uso indebido de regalías y, además, por tener vínculos con el paramilitarismo, lo que ha sido un factor de polarización y de

ruptura en el diálogo de la comunidad y sus autoridades. Órganos de control como las defensorías y las personerías se han convertido en importantes actores por su trabajo en la defensa de los derechos humanos de la ciudadanía.

En el caso del Caquetá, el PNUD ha logrado ganarse el respeto de la población, de autoridades y de actores armados ilegales, lo que ha permitido apoyar técnicamente procesos sociales, promover redes y tener intervenciones con un enfoque de derechos en zonas en las cuales las FARC no han permitido el acceso de otros actores de la cooperación internacional, ni siquiera de la Cruz Roja Internacional.

### c) Oportunidades en la gobernabilidad.

Tanto en Caquetá como en Huila, la gobernabilidad ha estado en crisis en los últimos años por la presión de los grupos armados y por los líos judiciales de sus principales dirigentes políticos, incluidos sus máximas autoridades departamentales y locales, por casos de corrupción y vínculos con paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes.

Con las elecciones de octubre de 2011, se han dado diferentes escenarios, no tan optimistas para Huila, cuya gobernadora ha sido suspendida por hechos de corrupción, lo que ha dejado al departamento en una crisis de gobernabilidad.

En el Caquetá, por el contrario, la elección de la autoridad departamental y de algunos alcaldes municipales, que llegaron al poder como resultado de procesos sociales, han generado un ambiente positivo y optimista. La elección de Víctor Ramírez en la Gobernación ha sido recibida con esperanza fundada de cambio tanto en el departamento como en el país porque rompió con liderazgos tradicionales del departamento (que hoy son fuertemente cuestionados) y porque cuenta con un apoyo popular. Por primera vez ganó un líder del Movimiento Mira, que pasó de una modesta representación política a ganar la gobernación quintuplicando la votación que había obtenido en 2010: pasando de cerca de 11.000 votos en 2010 a algo más de 55.000 votos en 2011. El reto de este movimiento y de la comunidad es demostrar que hay capacidad de gestionar con eficacia y transparencia un ejecutivo departamental y que es posible un comportamiento menos clientelista y burocrático, como el que llevó a la derrota a los candidatos de los partidos tradicionales de la región.

## Cesar y Guajira

Las razones para continuar las acciones en Cesar e iniciar una entrada progresiva con acciones puntuales en Guajira son las siguientes:

### a) Conflictividades y situación humanitaria

En el Cesar, la situación provocada por el conflicto armado, la violación de los derechos de poblaciones indígenas y afros, el impacto de los megaproyectos y los conflictos alrededor de las tierras, el territorio y el desarrollo rural siguen siendo algunas de la problemáticas que hoy son el centro de atención de la comunidad y las autoridades.

Actualmente existe una alta vulnerabilidad del sector rural cesarense por los efectos de las acciones de los actores armados ilegales (el desplazamiento, el despojo), la alta informalidad de la propiedad rural, las dinámicas del mercado, las ineficientes políticas públicas de desarrollo rural, los conflictos de uso del suelo y el subsuelo y las denuncias de ejércitos antirestitución de tierras.

Otro factor que limita el desarrollo humano en el sector rural es la implementación de megaproyectos extractivos, la alta informalidad de los derechos sobre la propiedad rural de la población campesina y la concentración en pocas manos de grandes hectáreas fértiles destinadas a los monocultivos y la ganadería, lo que tiene como consecuencia notoria la actual crisis alimentaria que se vive en el territorio, ya que de 132.000 toneladas de alimentos que se comercializan en el departamento tan solo el 20% son producidos en el Cesar. Este es uno de los departamentos con diferentes formas de despojo, que incluye el traspaso ilegal de tierras, venta forzada de predios y abandono de tierras por parte de la población campesina del departamento. Hay 269.930 hectáreas de tierra del Cesar que están registradas como abandonadas.

En el departamento sigue siendo una necesidad la ampliación y saneamiento de resguardos, así como la protección de los mismos contra la expansión de colonos y los megaproyectos extractivos mineros, lo que ha evidenciado la necesidad de impulsar la Mesa Interinstitucional de Tierras del Cesar, que tiene como objetivo activar una agenda estratégica en torno a la protección de tierras; formalización; reparación/restitución; territorios y etnia; reserva forestal y acceso.

El impacto del conflicto en la última década cuyos indicadores se han reducido en los años recientes han dejado innumerables víctimas que hoy reclaman sus derechos: 2616 homicidios entre 2003 y el 2011; 90.747 víctimas de desplazamiento entre 2003 y 2011; 211 víctimas de minas antipersona y MUSE entre 2000 y abril del 2012; y 1.798 desaparecidos reportados a septiembre de 2011. Asimismo, alrededor de 21.473 víctimas se encuentran registradas en las bases de datos de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y Paz, que han acudido a los procesos judiciales de



reparación en el departamento del Cesar.

A esta situación se suma el conflicto social en el territorio a los altos niveles de pobreza (60,28%) y pobreza extrema (25,70%, para el 2009), la desigualdad en la población y las necesidades básicas insatisfechas (44,5, casi el doble del nacional (27,3) en el 2005) en los 25 municipios del departamento, aunque con altas condiciones de vulnerabilidad en municipios como Astrea, Chimichagua, El Paso y González, donde la pobreza por ingresos y dependencia golpea con mayor fuerza a estos municipios en comparación con los restantes 21 del departamento.

En el caso de La Guajira, entre las distintas problemáticas se encuentran un conflicto armado intenso con una presencia de grupos armados ilegales, reclutamiento de jóvenes, amenazas a la población, control de la circulación de las comunidades por el territorio y serias deficiencias del Estado para garantizar los derechos de la ciudadanía, lo que requiere de una intervención focalizada principalmente para la protección de los derechos humanos, en especial de la población indígenas.

Existe una preocupante situación de los derechos de los pobladores específicamente de los municipios de Albania, Maicao, Fonseca, Uribia y en las áreas rurales de Riohacha y Dibulla. Los más afectados son los indígenas y en particular la étnica wayuú, que tiene un asiento ancestral en el departamento y es la población mayoritaria de la región.

En el departamento de La Guajira viven 818.695 habitantes (proyección 2010) que pertenecen a varias culturas: la población indígena representa el 43,7% del total y está conformada por cinco grupos, que en su mayoría vive en la zona rural: Wayúu (38.43%), Koguis (3%); Wiwa o Arzarios, (menos del 1%) y los Ika, Arhuacos o Bintukua (1%). Además se encuentra la población mestiza (58%), que vive principalmente en las áreas urbanas.

Los índices de homicidio en algunos municipios del departamento presentan cifras muy altas y tendencias que no evidencian un decrecimiento significativo: (214 en 2007; 212 en 2009 y 214 en 2011). El municipio que mayor tasa de homicidios es El Molino, seguido de Dibulla, Maicao, Fonseca, la Jagua del Pilar, Albania y Riohacha con tasas superiores a las del departamento. En el 2011, de los 214 homicidios, 104 ocurrieron en Maicao y 84, en Riohacha. Se ve con preocupación el aumento de muertes selectivas con arma de fuego y artefactos explosivos o incendiarios y la multiplicación de fenómenos delincuenciales como el hurto común y el robo de vehículos.

En este departamento hay un flujo constante de población a causa del desplazamiento forzado, pero también del turismo, el comercio y la explotación de recursos minero energéticos. Mientras a causa del conflicto armado y el social llegaron 5.526 habitantes y huyeron 6.315 en el 2007, en el 2009 fueron 5.407 quienes ingresaron a La Guajira y salieron 3.274, mientras que en el 2011, 907 entraron y se desplazaron hacia otros departamentos 634 ciudadanos.

Los informes de diferentes centros académicos y de la Defensoría siguen advirtiendo de la presencia y actividad de un grupo paramilitar confirmado por una estructura no desmovilizada que amenaza a la población con el fin de intimidarla y continuar con su control sobre actividades de contrabando, tráfico de estupefacientes, armas, combustibles y sobre la actividad comercial lícita que se realiza en la región y puertos y corredores naturales que facilitan la comunicación desde la península de La Guajira hasta Venezuela.

Uno de los principales desafío del departamento y causa de conflictividad social- son los niveles de pobreza y de marginación de su población. El NBI departamental es del 65,2% (40,3% en la cabecera y 91,9% en el resto) frente al 28% del nivel nacional (Censo 2005); el Índice de Condiciones de Vida (ICV) es 69,8, (2005) frente al promedio de la Región Caribe de 73,3 y nacional de 78,8; el 66,9% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza y el 32,4% en pobreza extrema (2009).

Así mismo, presenta una expansión urbana incontrolada e ilegal en zonas de alto riesgo conformando asentamientos precarios e informales por la venta de tierras ilegales; déficit de servicios públicos, en especial acueducto y alcantarillado; altas tasas de desempleo (de 10.4%; en el 2009), desescolarización y desnutrición de niños, niñas y adolescentes (para el 2005, la desnutrición crónica de menores de 5 años era de 24,7% y la global, de 15,5%.); alto nivel de violencia intrafamiliar y sexual (39,4% de las mujeres reportaron haber sido maltratadas física y psicológicamente por parte de su pareja y el 13,8% haber sufrido violencia sexual) y altos grado de analfabetismo (40,71% y con una tasa de analfabetismo absoluto en jóvenes del 26,7% para el 2005, en su mayoría de indígenas).

Si bien La Guajira recibe 9% de las regalías del país por carbón, gas, sal e impuesto de transporte y 59.09% de los giros se deriva del carbón, 40.63% del gas y el resto de la explotación de sal, estos recursos han terminado en manos de ilegales y su uso no se ha reflejado en un mejoramiento de la calidad de vida de la población. Con los cambios en la distribución de regalías este será un departamento que se verá seriamente impacto, lo que se ha convertido en una gran preocupación en el territorio y las autoridades.

La explotación de riquezas naturales como el carbón, gas, sal, entre otros, ha generado conflictos en el territorio,

violación de derechos ciudadanos, en especial de comunidades indígenas, apropiación indebida de territorios y ha contribuido al deterioro de ecosistemas en el departamento, ocasionando la reubicación de poblaciones, la extinción de especies, el agotamiento de los recursos naturales y contaminación del agua, suelo y aire. Aproximadamente 75% del territorio de la región está amenazado en términos de escasez de agua y desertificación.

Hay una relación histórica, cultural y dinámica en la frontera. Un activo comercio de productos básicos de la canasta familiar entre Colombia y Venezuela y familias que derivan su subsistencia de las actividades de contrabando. Las familias se ven seriamente afectadas cuando hay problemas en la frontera y se teme que se verán seriamente impactadas con la entrada de nuevos productos a raíz del TLC con Estados Unidos.

#### b) Capacidades de actores sociales e institucionales.

Cesar tiene una tradición de movilización social, campesina e indígena que si bien ha sido fuertemente debilitada por el conflicto armado, sigue siendo un actor importante en el territorio y persiste en la búsqueda de espacios de interlocución e incidencia. Hay avances importantes en el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas y afros en el plan de desarrollo departamental, por ejemplo y en espacios de interlocución con la institucionalidad que requieren un apoyo de la cooperación y más aún ante la situación social de esta población y el impacto que está teniendo en ella el conflicto armado. Hay una falta de confianza de sus habitantes en las instituciones públicas, un debilitado sistema de administración pública y la necesidad de construir una cultura de gobernabilidad democrática y capacidad institucional para asegurar una gestión pública eficiente, transparente e incluyente, ya que hay alto impacto y permeabilidad de actores ilegales en las esferas institucionales, administrativas y políticas del territorio.

Ante la violencia en el departamento, que ha afectado a la población por la vulneración y violación de los derechos humanos, el DIH y el resquebrajamiento del tejido social como estrategias de los grupos armados ilegales, en el Cesar sigue siendo prioridad avanzar en el proceso de diseño, validación y consolidación de la política pública departamental orientada a la protección, atención y reparación de las víctimas de la violencia.

En el caso de La Guajira, hay varios factores, entre ellos el conflicto armado, que ha hecho que no haya sólidas organizaciones sociales con una incidencia política y que tampoco haya actores institucionales más allá de algunas entidades de control con un alto grado de legitimidad y credibilidad.

La población indígena, histórica en la región, se caracteriza por su organización, por su diversidad y también por los múltiples conflictos internos que enfrenta. A pesar de su liderazgo y respeto, ha sido utilizada por las microempresas electorales y el clientelismo armado para llegar al poder y no tiene representación en los cargos de poder. Aunque en las administraciones municipales hay secretarías indígenas, éstas no tienen injerencia en los presupuestos municipales y se reducen a manejar conflictos y conciliaciones étnicas en los resguardos.

Ante los múltiples y continuos casos de corrupción denunciados y sin castigo por parte de actores institucionales, se ha validado en el inconsciente colectivo de la sociedad el camino del “atajo” y el “clientelismo” como prácticas normales por parte de los servidores públicos y dentro de las relaciones de la propia ciudadanía. El tema del control social aún es incipiente en el departamento y no es asumido por la ciudadanía para ejercer sus derechos, a pesar de los esfuerzos realizados por entidades públicas y privadas con las organizaciones de la sociedad civil y juntas de acción comunal.

#### c) Oportunidades en la gobernabilidad

Si en las elecciones de 2007 en el Cesar la sorpresa y la ilusión estuvieron concentradas en la Gobernación que ganó Cristian Moreno, quien estuvo muy por debajo de las expectativas y necesidades ciudadanas, esta misma sensación es la que hoy se siente en el Cesar con la elección de Freddy Socarras en la Alcaldía de Valledupar. Existe la esperanza de que la ciudad podrá avanzar en el desarrollo de la ciudad ante el consenso que logró aglutinar a su alrededor y, además, aprovechando que el Concejo de Valledupar fue renovado casi en su totalidad y por personas muy jóvenes.

En la Gobernación, entre tanto, está Luis Alberto Monsalvo Genecco, una nueva figura de un clan familiar de tradición en el departamento y con una cuestionada reputación, lo que genera temores de que tanto los intereses familiares pesarán en sus decisiones. Sin embargo, hoy los dos mandatarios tienen un margen de independencia y maniobra política frente a la generación vallenata caracterizada por la corrupción y la parapolítica y hay posibilidades de seguir avanzando en temas claves para el departamento, como los derechos humanos, en especial de indígenas.

Una situación diferente es la que vive La Guajira luego de las elecciones de octubre ante quienes fueron elegidos en la Gobernación (Juan Francisco Gómez) y la alcaldía de Riohacha (Rafael Ceballos Sierra), políticos que en sus planes de gobierno no priorizan los temas de derechos humanos, cultura de paz ni de restitución de tierras.

El Gobernador, cuya candidatura fue polémica y financiada con dineros de dudosa procedencia, es señalado de supuestos vínculos con las autodefensas, con el contrabando de gasolina y con narcotraficantes locales, lo que hace temer que las

finanzas públicas no vayan a tener un uso transparente y, por el contrario, ocurra lo que ha sucedido en la región: el control de las rentas públicas por parte de intereses particulares e ilegales. Los temas de derechos humanos, restitución de tierras y víctimas estuvieron ausentes de su plan de gobierno. Es un político que, además, desconoce la existencia de un conflicto armado en el país y reduce el problema de seguridad que vive la región a bandas de delincuencia común.

En Riohacha, entre tanto, el alcalde quien es investigado por la Procuraduría ganó con una votación sin precedentes en el municipio y con la más alta votación a nivel de capitales en todo el país. Este político, apoyado por la clase tradicional del departamento (incluido el hoy Gobernador), desconoce la existencia de un conflicto armado y de bandas criminales en su municipio y en su plan de gobierno estuvo también ausente la promoción de los Derechos Humanos, la gestión pública de una cultura de paz y la prevención de riesgos relacionados con la restitución de tierras. El tratamiento que le da al desplazamiento forzado y a las consecuencias humanitarias del conflicto armado se reduce a acuerdos intersectoriales con los programas del Gobierno nacional, por lo que urge un trabajo con esta institucionalidad para incluir los temas de derechos humanos en la agenda local.

## Chocó

Razones para iniciar una entrada progresiva en Chocó, en caso de que haya recursos, son:

### a) Conflictividades y situación humanitaria.

En los últimos años, al Chocó se ha ido desplazando de manera progresiva la violencia proveniente de departamentos vecinos ante los múltiples intereses que allí se concentran: explotación de recursos naturales, ubicación estratégica para el tráfico de droga y construcción de megaproyectos.

Los homicidios han aumentado de manera progresiva desde el 2003, con 94 víctimas, afectando de manera especial a las poblaciones afrocolombianas y sus derechos. En el 2005 hubo 151 víctimas, dos años después 113; en el 2008, 157; en el 2009, 142 y para el 2011 eran 119 los asesinados, siendo la situación más crítica la que enfrentan, en la última década, los pobladores de Quibdó.

La capital del Chocó es también la más afectada por el desplazamiento forzado de su población, así como también lo es la del Bajo y Alto Baudó, Carmen del Darién e Itsmina. Aunque el desplazamiento ha descendido en los últimos años (11.393 personas en 2005; 11.032 en 2007; 6.719 en 2009 y 5.045 en 2011) esta población está siendo víctima de asesinados selectivos y amenazas por la defensa de sus derechos, entre ellos la de su tierra.

Las violencias en el Chocó también está asociada a los cultivos de uso ilícito y es por eso que ha sido alarmante el crecimiento de estos cultivos en el departamento. De las 323 hectáreas detectadas en el 2004, un año después había 1.025 hectáreas, en el 2007 ya se contaban 1.080, en el 2008, 2.794 y en el 2010 el número alcanzó a ser de 2.904, situación que ha impactado a la población y al medio ambiente ante la tala indiscriminada de bosques para su siembra.

El conflicto social es otra razón que explica la urgencia de una intervención en este departamento. El departamento registra unos de los mayores niveles de pobreza (64,9%), condiciones que coexisten con ingresos bajos y desigualmente distribuidos, recursos financieros escasos, vulnerabilidad económica, bajos niveles de productividad y reducidos niveles de inversión.

Como parte de este conflicto está el impacto que está generando en la población en su seguridad alimentaria y su seguridad y en el medio ambiente la construcción de megaproyectos. Grupos ilegales en algunos casos en asocio con terratenientes y políticos se han apropiado indebidamente de las tierras de comunidades negras e indígenas para construir megaproyectos en sus territorios, entre ellos la palma de aceite. Actualmente hay 147.948 hectáreas registradas como abandonadas.

Chocó vive actualmente un boom minero que también ha sido causa de múltiples conflictos. Este auge se aprecia por la participación del departamento en el total de títulos mineros y en la proporción de área dedicada a ese fin. De aportar 0,55% del total de títulos mineros expedidos en Colombia durante 2004, Chocó pasó a contribuir con 1,28% del total expedido en 2008. En términos de área contratada a través de los títulos concedidos en el orden nacional, la participación del departamento pasó de 0,86% en 2004 a 11,09% en 2008. Entre tanto, la minería ilegal, que practican muchas comunidades como vía de subsistencia, se ha convertido en otro factor de crisis ya que actores ilegales han encontrado en esta actividad un mecanismo para apropiarse de recursos y financiar sus acciones.

### b) Capacidades de actores sociales e institucionales.

Chocó se caracteriza por contar con unas capacidades institucionales y sociales muy débiles, que han sido un obstáculo para su desarrollo, como lo evidencian varias situaciones: escándalos de corrupción en las áreas de la salud - desnutrición infantil de 2007 que ocasionó la muerte de doce niños- y la educación, la infiltración de paramilitares en

administraciones locales, tres ex congresistas condenados por vínculos con grupos paramilitares; crisis fiscales e insolvencias financieras recurrentes, producto de debilidades en todas las áreas de la administración y una ausencia de rendición de cuentas y de veeduría ciudadana.

Los principales actores sociales de la región son las comunidades afros e indígenas, que con el apoyo de la Iglesia y de la cooperación internacional han liderado importantes movimiento en defensa de sus tierras. Sin embargo, estos son procesos son muy débiles, entre otras causas, porque sus líderes han sido silenciados por los efectos del conflicto armado.

Existe en el departamento una importante identidad que une a la población. Chocó es el único departamento del país cuya población declara una pertenencia étnica superior al 90% (82% afrocolombianos y 12,6% indígenas). En el departamento hay 11.914 resguardos indígenas (2010, INCODER), ubicados en 26 de los 31 municipios y concentrados en Quibdó, Alto Baudó, Bajo Baudó, Bojayá, Carmen de Atrato, Litoral de San Juan y Riosucio.

Asimismo, se han adjudicado a poblaciones afros títulos de propiedad colectiva de la tierra a 16.715 consejos comunitarios, localizados en 22 municipios y concentrados en Acandí, Atrato, Bajó Baudó, Medio San Juan, Nóvita y Riosucio, los cuales se estiman en 2,2 millones de hectáreas. Entre esta población se destacan algunos consejos comunitarios que agrupan a un número alto de comunidades, como el Consejo Mayor del Medio Atrato (hacia) (91 comunidades y 30.635 habitantes) y el Consejo Mayor del Río Baudó y sus Afluentes (acaba) (73 comunidades y 16.000 habitantes).

A pesar de su situación humanitaria, en Chocó no hay una fuerte presencia internacional, como la que hay, por ejemplo, en Nariño, aunque se cuenta con actores importantes incluidos de Naciones Unidas que trabajan con sede en otros departamentos.

### c) Oportunidades en la gobernabilidad.

El departamento tiene hoy una oportunidad importante luego de una crisis de gobernabilidad en los últimos años: el gobernador elegido por voto popular en 2007 fue suspendido por 18 meses y entre marzo de 2010 y marzo de 2011 hubo cuatro gobernadores diferentes que tuvieron que abandonar sus cargos.

Los ganadores en la Gobernación y la alcaldía de Quibdó en las elecciones de octubre de 2011 han generado esperanzas ante el cambio en las tendencias políticas del departamento. Estos triunfos han sido catalogados como una renovación en las estructuras políticas del departamento y sobre todo en Quibdó. El gobernador Luis Gilberto Murillo Urrutia y la alcaldesa Zulia Mena García son considerados como políticos progresistas, sin un pasado cuestionado y con la intención de trabajar por el desarrollo del departamento. Los dos son profesionales con experiencia –aunque no mucha en cargos públicos- y que han conformado sus gabinetes con personal técnico sin raíces o vínculos con las familias políticas tradicionales de la región. La experiencia internacional del Gobernador ha sido especialmente valorada.

## Cauca

Las razones para iniciar una entrada progresiva en Cauca, en caso de que haya recursos, son:

### a) Conflictividades y situación humanitaria

En los últimos años, Cauca se ha convertido en un departamento con unos altos niveles de conflictividad ante un intenso conflicto armado -con especial impactando en su población indígena- y la confrontación entre esta población y la institucionalidad ante la falta de capacidad estatal para proteger y garantizar sus derechos.

En este departamento confluyen acciones de guerrilla las FARC con una presencia histórica y muy activa tanto que Cauca fue la zona de mayor iniciativa armada de esta guerrilla en el 2011, con bandas emergentes (con presencia en 14 municipios) y narcotraficantes, así como delicadas situaciones de orden público ante el enfrentamiento de las FARC con la fuerza pública teniendo en cuentas que varios municipios de Cauca (Caloto, Corinto, Santander de Quilichao y Toribío) hacen parte del plan de consolidación territorial.

Bajo este contexto, los pobladores de dos áreas del Cauca son los más afectados. Por un lado, los de la región del nororiente (Toribío, Corinto, Jambaló, Miranda, Caloto, Santander de Quilichao, Caldono y Páez, poblada principalmente por indígenas de la etnia Nasa) y la zona que comprende la vertiente occidental de la cordillera occidental hasta la Costa Pacífica (El Tambo, Balboa, Argelia, Timbiquí, Guapi, López de Micay, Morales, Suárez y Buenos Aires).

Desde el 2008 en este departamento han aumentado de manera progresiva las acciones de los grupos armados al margen de la ley (ataques contra instalaciones de la Fuerza Pública, emboscadas, hostigamientos y otros). Si en el 2008 se

registraron 48 ataques y 124 en el 2010, en sólo nueve meses del 2011 (enero a septiembre) se presentaron 116 ataques. Estas acciones han tenido un impacto directo en la población porque muchas han ocurridos en cascos urbanos, alrededor de los cuales se encuentran batallones o centros de policía contra los cuales van dirigidos los ataques.

Una de las situaciones más preocupantes en el departamento es el uso indiscriminado de MAP por parte de la guerrilla para impedir la presencia y avance de la Fuerza Pública en la zona. Entre 2000 y marzo de 2012 se han presentado 473 víctimas. Aunque los militares han sido históricamente las mayores víctimas, preocupa que en los últimos años por primera ha sido superior el número de víctimas civiles: en el 2009 hubo 21 víctimas militares e igual número de civiles y ya en el 2011, fueron 22 los militares víctimas y 23 los civiles. La situación es aún de mayor inquietud porque entre los civiles hay numerosos menores de edad: sólo en estos tres años, de las 56 víctimas civiles, 24 fueron niños y niñas. Los pobladores de El Tambo, Toribío, Jambaló, Caloto, Corinto y Argelia son los más afectados.

Ante los ataques, las minas y el riesgo de reclutamiento forzado de niños y niñas, lo que ha sido otra de las constantes denuncias en el territorio, la población se ha visto obligada a desplazarse de manera masiva. Si bien en términos generales este ha sido un delito que ha disminuido (16.138 desplazados en el 2007, 13.287 en 2009 y 10.090 en 2011), en algunos municipios el aumento supera el 50%. Los pobladores de Argelia, El Tambo, Balboa, Bolívar, Patía y Guapi es la más afectada con situaciones que son una voz de alerta, como lo que ocurre en Timbiquí: 537 huyeron en el 2009 y en el 2011 lo hicieron 1693 personas.

Los intereses del narcotráfico son un factor más en la conflictividad de este departamento, que precisamente fue el segundo en el país con mayores cultivos de hoja de coca (5.908 hectáreas de las 61.83 detectadas en el 2010). Incluso, Timbiquí (donde están confluyendo muchas violencias) es uno de los 10 municipios del país con más hectáreas sembradas (1.454).

#### b) Capacidades de actores sociales e institucionales.

La organización indígena del Cauca es una de las más representativas del país, caracterizada por su trabajo en defensa de sus derechos, por su movilización social campesina, por sus acciones de resistencia civil y su exigencia a los diferentes grupos armados para que se les respete como neutrales dentro del conflicto armado. Si bien dentro de estas organizaciones hay diferentes tendencias, que a veces hace que sea muy complejo llegar a consensos, estas organizaciones tienen una articulación importante con otras indígenas del país, lo que les ha permitido actuar de manera conjunta en sus reclamos al Gobierno nacional, en especial sobre la consulta previa.

De los 1.276.423 pobladores del departamento, 190.069 son indígenas, quienes están organizados en ocho grupos étnicos establecidos en 26 de los 39 municipios del Cauca. Tienen 84 resguardos, 115 cabildos y 11 asociaciones de cabildos.

Estas organizaciones han encontrados en los órganos de control –Defensorías y Personerías- aliados importantes en la defensa de sus derechos por ser actores institucionales con credibilidad en la región, a diferencia de otros actores gremios, políticos y gobernantes, investigados por casos de corrupción y por sus relaciones como el paramilitarismo (caso de ex gobernador del Cauca).

Hay actores importantes incluidos de Naciones Unidas que trabajan con sede en otros departamentos, pero la presencia internacional no es tan fuerte como la que hay, por ejemplo, en Nariño.

#### c) Oportunidades en la gobernabilidad.

Ante los comicios del 2012, hay una oportunidad importante en el Cauca con la elección de mandatarios municipales y el Gobernador, que quieren apostarle a construir la paz en el territorio y han expresado su compromiso de apoyar una consulta por la paz, que lideran varias organizaciones indígenas, afros, campesinas y de mujeres.

El Gobernador Temistocles Ortega dijo en campaña que ante la intensidad del conflicto en el departamento era necesario buscar salidas dialogadas y negociadas, un compromiso que viene ambientando en el departamento, pero también regionalmente. Por eso, en un municipio de Cauca (Villarrica) se reunió con todos los alcaldes del Cauca y los gobernadores de Nariño y la Gobernadora (E) del Valle y afirmó: “En ejercicio del Derecho Constitucional a la paz nos declaramos en movilización permanente a efectos de crear una gran fuerza moral y política que facilite el camino a la paz y la negociación del conflicto. De igual manera, apoyamos las iniciativas de la sociedad civil como la consulta por la paz”.

## Anexo 2

## Implementación financiera

<b>Award Id:</b>	00058220	<b>Amount USD\$</b>	
<b>Award Title:</b>	PROG. REDES ART - ESTRAT TERRT DSLLC, PAZ Y RECONCL	Remanente 2010 <sup>Nota1</sup>	51.277,81
<b>Year:</b>	201	Fondos ASDI 2011 (MSEK 25)	3.892.868,27
<b>Fund:</b>	30000	Total Recursos ASDI 2011	<b>3.944.146,08</b>
<b>Donor:</b>	SIDA I	Reserva GMS (7%)	258.028,25
		Fondos disponibles para programación	<b>3.686.117,83</b>

Proyecto	Resultados esperados	Presupuesto Inicial	% Ppto	Gastos	Compromisos	Ejecución Total	% Ejecución	Ejecución Vs. Ppto
00072237	I. Prevención y transformación de conflictos y promoción de una cultura de paz	755.504	19%	<b>654.910,98</b>	<b>93.679,70</b>	<b>748.590,68</b>	<b>20%</b>	<b>99%</b>
	WP Territorio AWP Nacional			505.033,40 149.877,58	62.758,23 30.921,47	567.791,63 180.799,05	76% 24%	
00072238	II. Justicia, derechos de las víctimas y derechos humanos	650.260	16%	<b>643.096,25</b>	<b>36.356,58</b>	<b>679.452,83</b>	<b>18%</b>	<b>104%</b>
	WP Territorio AWP Nacional			617.846,91 25.249,34	36.356,58	654.203,49 25.249,34	96% 4%	
00072239	III. Gobernabilidad, democracia local y construcción de paz	480.627	12%	<b>421.831,70</b>	<b>65.179,79</b>	<b>487.011,49</b>	<b>13%</b>	<b>101%</b>
	WP Territorio AWP Nacional			410.789,01 11.042,69	34.258,32 30.921,47	445.047,33 41.964,16	91% 9%	
00072240	IV. Desarrollo socio económico sostenible para la Paz	761.129	19%	<b>365.726,97</b>	<b>268.708,98</b>	<b>634.435,95</b>	<b>17%</b>	<b>83%</b>
	WP Territorio AWP Nacional			306.856,79 58.870,18	126.187,52 142.521,46	433.044,31 201.391,64	68% 32%	
00072241	V. Monitoreo, Evaluación, Gestión del Conocimiento y comunicación	237.529	6%	<b>205.160,10</b>	<b>52.141,19</b>	<b>257.301,29</b>	<b>7%</b>	<b>108%</b>
	WP Territorio AWP Nacional			78.208,93 126.951,17	52.141,19	130.350,12 126.951,17	51% 49%	
<b>Personal y funcionamiento</b>		<b>801.068</b>	<b>20%</b>	<b>509.870,93</b>	<b>221.433,94</b>	<b>731.304,87</b>	<b>19%</b>	<b>91%</b>
Costo de Personal		272.788	34%	252.176,39	97.534,52	349.710,91	48%	
Costos de funcionamiento		528.280	66%	257.694,54	123.899,42	381.593,96	52%	
<b>Total</b>		<b>3.686.118</b>	<b>93%</b>	<b>2.800.596,93</b>	<b>737.500,17</b>	<b>3.538.097,10</b>	<b>93%</b>	<b>96%</b>
<b>AWP Territorio</b>				78.208,93	311.701,84	2.230.436,88	59%	
<b>AWP Temático</b>				126.954,93	204.364,40	576.355,36	15%	
<b>Costo de Personal</b>				252.176,39	97.534,52	349.710,91	9%	
<b>Costos de funcionamiento</b>				257.694,54	123.899,42	381.593,96	10%	
<b>GMS (7%)</b>		258.028,25	7%	196.041,79	51.625,01	247.666,80	7%	96%
<b>Gran total<sup>2</sup></b>		<b>3.944.146,08</b>	<b>100%</b>	<b>2.996.638,72</b>	<b>789.125,18</b>	<b>3.785.763,90</b>	<b>100%</b>	<b>96%</b>

**Nota 1.** USD\$51.277,81 corresponden al recurso remanente del depósito de MSEK 20 equivalente a USD\$2.902.757,62, según el Acuerdo suscrito el 7 de diciembre de 2009, comprometido durante la vigencia 2010 e implementado en la vigencia 2011; por lo anterior se da por ejecutado y concluido el mencionado Acuerdo.

**Nota 2.** En el marco de Acuerdo suscrito el 21 de febrero de 2011, se recibieron MSEK 25 equivalentes a USD\$3.892.868,27, de los cuales se implementaron USD\$2.996.638,72, y quedaron comprometidos USD\$789.125,18; el remanente correspondiente a USD\$158.382,18 se encuentra previsto dentro de las actividades del POA para la vigencia 2012.

Territorial	Organización	Objetivo	Valor total (cop)	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
Cesar	Asociación red de juventudes cesarences	Fortalecimiento de los procesos organizativos, deliberativos y decisionales para la promoción y restitución de los derechos fundamentales de las OSC	185.111.585	02-Nov-11	14-Jun-12
Huila	Corporación casa de la memoria	2ª. Fase formulación diagnósticos participativos de estado de la política pública de juventud, violencias basadas en género y soberanía, seguridad y autonomía alimentaria	69.600.000	29-Ago-11	31-May-12
Huila	Asociación municipal colonos del pato	Fortalecimiento de las capacidades, procesos y la participación real y efectiva e incidencia política de las Juntas de Acción Comunal y ASOJUNTAS	89.000.000	25-Ago-11	31-May-12
Huila	Corporación por la defensa de los derechos humanos - caguan vive	Apoyo al trabajo de acompañamiento y asesoría a víctimas del conflicto y fortalecimiento interno de la Corporación CAGUÁN VIVE	67.800.000	29-Ago-11	31-May-12
Huila	Corporación de abogados y profesionales sur colombianos caps	Fortalecimiento del Programa de Atención Integral	64.300.000	29-Ago-11	31-May-12
Huila	Consejo regional indígena del huila - crihu	Apoyo para el fortalecimiento interno del Consejo Regional Indígena del Huila – CRIHU y la implementación regional de una estrategia de ejercicio del Gobierno Propio	69.000.000	29-Ago-11	25-Jun-12
Huila	Corporación observatorio sur colombiano de derechos humanos y violencia - obsurdh	Apoyo al trabajo de acompañamiento y asesoría a víctimas del conflicto y fortalecimiento interno de la Corporación OBSURDH	70.000.000	29-Ago-11	31-May-12
Huila	Corporación de desarrollo y paz del departamento del huila y piedemonte amazonico - huipaz	Fortalecimiento del Programa de Desarrollo y Paz del Departamento del Huila y Piedemonte Amazónico	120.000.000	29-Ago-11	31-May-12
Huila	Universidad surcolombiana usco	Fortalecimiento del Programa de Acompañamiento e Intervención Integral a las Víctimas del Conflicto Político, Social y Armado	71.600.000	06-Sep-11	31-May-12
Meta	Asociación departamental de usuarios campesinos - anuc	Fortalecimiento de los grupos poblacionales y temáticos principalmente de campesinos(as), Medio Ambiente, Cultura y comunicación para la Paz, vinculados a la Mesa Humanitaria del Departamento del Meta	66.000.000	07-Dic-11	07-Abr-12
Meta	Corporación desarrollo para la paz del piedemonte oriental - cordepaz	Fortalecimiento de la CORDEPAZ, como organización dinamizadora del Programa de Desarrollo y Paz – PDP del Meta y Entidad Coordinadora Regional del Tercer Laboratorio de Paz	74.000.000	13-Dic-11	13-Abr-12
Meta	Asociación el meta con mirada de mujer	Fortalecimiento a la red de mujeres del Meta a través del desarrollo de iniciativas productivas locales que promueva su organización e incidencia en políticas públicas.	43.000.000	07-Dic-11	07-Abr-12
Meta	Corporación retoños	Proceso de articulación de redes de víctimas que impulsa el Programa Promoción de la Convivencia	102.000.000	13-Dic-11	13-Abr-12

Territorial	Organización	Objetivo	Valor total (cop)	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
Montes de María	Fundacion red, desarrollo y paz de los montes de maria	Incidir en el territorio en el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local y la construcción de paz	182.000.000	17-Jul-11	17-Oct-11
Montes de María y Cesar	Corporacion para el desarrollo social y comunitario - corsoc - asvidas	Incidir en los territorios en el fortalecimiento de capacidades locales de paz, tanto en las instituciones como en las organizaciones sociales	124.670.000	22-Jul-11	22-Oct-11
Nariño	Fondo mixto de cultura de nariño	Desarrollo de capacidades territoriales de sistematización e incidencia política Nariño 2011	105.664.320	13-Sep-11	13-Mar-12
Nariño	Agencia de desarrollo económico local de nariño	Proceso de articulación de redes de víctimas que impulsa el Programa Promoción de la Convivencia	268.650.000	23-Jun-11	31-May-12
Oriente Antioqueño	Asociacion agencia para el desarrollo economico de la provincia del oriente antioqueño - adeproa	Fortalecimiento del Cibercentro sostenible modelo para la promoción de la sociedad de la información y el conocimiento, los objetivos del milenio y el desarrollo humano sostenible, en el municipio del Carmen de Viboral – Oriente Antioqueño	63.000.000	01-Jul-11	01-Nov-11
Nivel central	Agencia de desarrollo económico local de la provincia del alto ricaute y chiquinquirá , adel dinosaurios	Consolidar la ADEL Dinosaurios como herramienta de Desarrollo Socio-Económico Incluyente de la Provincia del Alto Ricaurte y Chiquinquirá, del Departamento de Boyacá	130.000.000	03-Oct-11	03-Feb-12
Nivel central	Agencia de desarrollo económico local , adel asociacion casa del agua	Consolidar la ADEL ASOCIACIÓN CASA DEL AGUA como herramienta de Desarrollo Socio-Económico Incluyente en cinco (85) municipios del Norte del Cauca.	70.000.000	22-Nov-11	31-May-12
Nivel central	Fundacion codespa	Mejora de las competencias laborales y empresariales para la inserción laboral e incremento de la capacidad productiva y empresarial de 330 familias	104.500.000	25-Nov-11	25-Ago-12
Nivel central	Fundacion antonio restrepo barco	Apoyo al Proyecto Fomento de los derechos de los niños, niñas y jóvenes en su segunda fase	72.000.000	27-Jul-11	11-Jul-12
Nivel central	Ruta pacifica de las mujeres	Apoyo al proyecto de Comisión de Recuperación de la Memoria Histórica desde las mujeres	54.000.000	28-Jun-11	30-Sep-11
Nivel central	Corporacion infancia y desarrollo - cid	CENTRO DE APOYO ESCOLAR CAE- a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad por desplazamiento, pobreza, extraedad, fracaso escolar y/o desescolarización	17.890.000	30-Nov-11	30-May-12
Nivel central	Agencia para el desarrollo económico local - adel, asociación casa del agua - 56637	Apoyar un proceso de fortalecimiento y cualificación de la actividad artesanal para 80 personas de los 4 municipios socios y el incremento de la capacidad de gestión de proyectos de la ADEL CASA DEL AGUA	12.500.000	07-Mar-11	07-Jun-11
Nivel central	Maloka centro interactivo de ciencia y tecnología	Impulso de las actividades de la Secretaría Técnica de IDEASS, el Comité Directivo y la identificación de innovaciones para el desarrollo humano y su respectiva divulgación en el I Catálogo de IDEASS Colombia”	40.000.000	21-Jun-11	31-Mar-12



## Glosario

<b>ACNUR</b>	Agencia de la ONU para los Refugiados
<b>ADEL</b>	Agencias de Desarrollo Económico Local
<b>ADEPAS</b>	Agencia de Desarrollo y Paz del Pacífico Sur de Nariño
<b>ADIFSUR</b>	Agencia de Desarrollo y Paz del Sur del Nariño
<b>AECID</b>	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
<b>AICMA</b>	Acción Integral contra las Minas
<b>AMCOP</b>	Asociación Municipal de Colonos del Pato
<b>AMOR</b>	Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño
<b>ANUC</b>	Asociación Nacional de Usuarios Campesinos
<b>APROVIACI</b>	Asociación Provincial de Víctimas de Ciudadanas/os
<b>ASDI</b>	Agencia Sueca de Desarrollo Internacional
<b>ASPOA</b>	Asociación de Personeros del Oriente Antioqueño
<b>BCPR</b>	Oficina para la Prevención y Recuperación de la Crisis del PNUD
<b>CAVIF</b>	Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar de Sucre
<b>CCV</b>	Cámara de Comercio de Villavicencio
<b>CDA</b>	Conflict-related Development Analysis
<b>CDAIPD</b>	Comité Departamental de Atención Integral a la Población Desplazada
<b>CECAR</b>	Unidad Integral de Atención a Víctimas
<b>CI</b>	Cooperación Internacional
<b>CICR</b>	Comité Internacional de la Cruz Roja
<b>CIIDET NARIÑO</b>	Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico de Nariño
<b>CINEP</b>	Centro de Investigación y Educación Popular
<b>CNRR</b>	Comisión Nacional de Reparación y reconciliación
<b>CONPES</b>	Consejo Nacional de Política Social
<b>CRAV</b>	Comité Regional de Atención a Víctimas
<b>CRER</b>	Comité de Estudio y Evaluación de Riesgos
<b>CRIHU</b>	Consejo Regional Indígena del Huila
<b>DDHH</b>	Derechos Humanos
<b>DIH</b>	Derecho Internacional Humanitario
<b>DNP</b>	Departamento Nacional de Planeación
<b>DP</b>	Defensoría del Pueblo
<b>EHL</b>	Equipo Humanitario Local
<b>ESAP</b>	Escuela Superior de Administración Pública
<b>FAO</b>	Food and Agriculture Organization
<b>FARC</b>	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
<b>FGN</b>	Fiscalía General de la Nación
<b>FJT</b>	Fondo de Justicia Transicional
<b>GIR</b>	Gestión Integral del Riesgo
<b>GTD</b>	Grupo de Trabajo Departamental
<b>Huipaz</b>	Programa de Desarrollo y Paz del Huila
<b>IASC</b>	Inter-Agency Standing Committee
<b>ICAV</b>	Índice de Capacidades de Atención a Víctimas

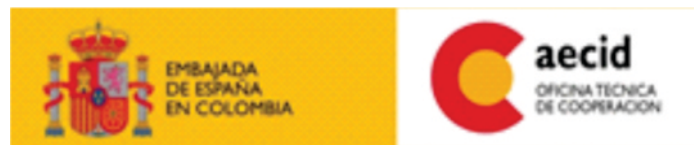
<b>ICBF</b>	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
<b>IDSN</b>	Instituto Departamental de Salud de Nariño
<b>INCODER</b>	Instituto Nacional de Desarrollo Rural
<b>INDH</b>	Informe Nacional de Desarrollo Humano
<b>JAC</b>	Junta de Acción Comunal
<b>MAI</b>	Mesa de Articulación Interinstitucional
<b>MAP / MUSE /AEI</b>	Minas Antipersonal / Munición sin Explotar / Artefactos Explosivos Improvisados
<b>MAPP – OEA</b>	Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos.
<b>MPDL</b>	Movimiento por la Paz
<b>NBI</b>	Necesidades Básicas Insatisfechas
<b>NNA</b>	Niños, Niñas y Adolescentes
<b>Nns</b>	No Identificados
<b>OACNUDH</b>	Oficina Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
<b>OBSURDH</b>	Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y Violencia
<b>OCHA</b>	Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios
<b>ODM</b>	Objetivos de Desarrollo del Milenio
<b>OIM</b>	Organización Internacional para las Migraciones
<b>ONIC</b>	Organización Nacional Indígena de Colombia
<b>ONU</b>	Mujeres Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y empoderamiento de la Mujer
<b>OSC</b>	Organizaciones de la Sociedad Civil
<b>OV</b>	Organizaciones de Víctimas
<b>PAICMA</b>	Programa Presidencial de Acción contra Minas
<b>PAVIP</b>	Programa de Acompañamiento a Víctimas
<b>PAVIREC</b>	Programa Departamental de Atención Integral a Víctimas del Conflicto y Reintegración comunitaria
<b>PER</b>	Proceso Estratégico Regional
<b>PET</b>	Proyectos Estratégicos Territoriales
<b>PIU</b>	Plasn Inegral Único de Atención a la Población Desplazada
<b>PNUD</b>	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
<b>POT</b>	Plan de Ordenamiento Territorial
<b>PRIMMa</b>	Proceso de Reconstrucción Integral de los Montes de María
<b>PRODOC</b>	Program Document (Documento de Programa)
<b>ADELCO</b>	Agencias de Desarrollo Local de Colombia
<b>SENA</b>	Servicio Nacional de Aprendizaje
<b>SICDE</b>	Sistema de Información Humanitaria (monitorea temas de desastre natural)
<b>SNCI</b>	Sistema Nacional de Cooperación Internacional
<b>SNU</b>	Sistema de Naciones Unidas
<b>SUIPPCOL</b>	Programa de la Paz en Suiza en Colombia para Fortalecer la Sociedad Civil
<b>UE</b>	Unión Europea
<b>UNICEF</b>	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
<b>USCO</b>	Universidad Surcolombiana
<b>VBG</b>	Violencia Basada en Género
<b>VSBG</b>	Violencia Sexual Basada en Género
<b>ZRC</b>	Zonas de Reserva Campesina





*Al servicio  
de las personas  
y las naciones*

## SOCIOS DEL PROGRAMA ART REDES – PNUD



**Regione Toscana**

